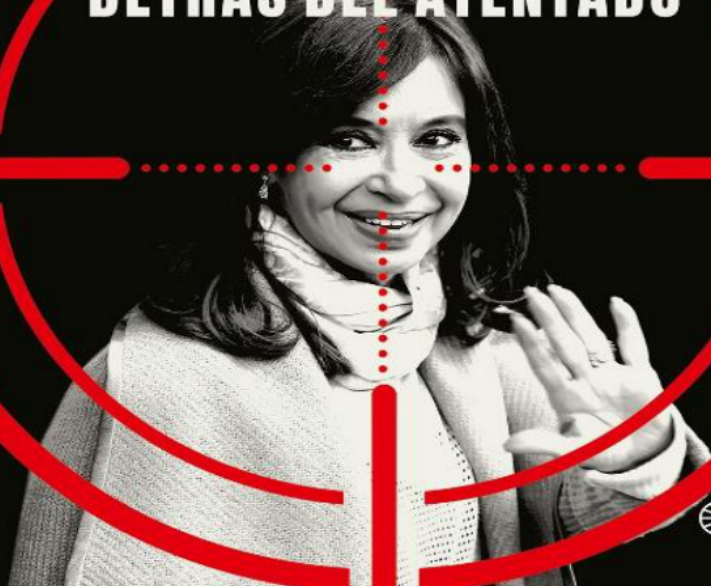



IRINA HAUSER

CON LA COLABORACIÓN DE ARIEL ZAK

MUERTA O PRESA

LA TRAMA VIOLENTA
DETRÁS DEL ATENTADO



 Planeta

Muerta o presa

Muerta o presa

La trama violenta detrás del atentado

Irina Hauser

Equipo de investigación:
Ariel Zak, Emilia Delfino y Franco Mattiello

Índice de contenido

Portadilla

Legales

1. La bala que no salió
2. Necesito un novio que me haga caso
3. Mal comienzo
4. “Naciste de vuelta”
5. Brenda y la fuga que no fue
6. El día después
7. “Quiero a Luciani”
8. Los copitos
9. a pista Milman
10. “Borren todo”
11. Caldo de cultivo
12. “Dejalos chorreando sangre”
13. Los millones de Caputo
14. Muerta o presa

Epílogo

Agradecimientos

Hauser, Irina

Muerta o presa : la trama violenta después del atentado / Irina Hauser ;
Contribuciones de Ariel Zak. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Planeta, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-950-49-8365-1

1. Política Argentina. 2. Liderazgo Político. I. Zak, Ariel, colab. II. Título.
CDD 320

© 2023, Irina Hauser

Colaborador: Ariel Zak

Todos los derechos reservados

© 2023, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Publicado bajo el sello Planeta®

Av. Independencia 1682, C1100ABQ, C.A.B.A.

www.editorialplaneta.com.ar

Digitalización: Proyecto451

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del
“Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o
total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el
tratamiento informático.

Inscripción ley 11.723 en trámite

ISBN edición digital (ePub): 978-950-49-8365-1

A mis hijas, Dana y Rocío

A mis viejos, Silvia y Luis

*Ese era el ejemplo de democracia
que se daba a nuestra juventud.
Se sembró violencia.*

OSVALDO BAYER,
en su prólogo a *Operación Masacre* (20a ed.), de Rodolfo Walsh

1

La bala que no salió

Debajo de un gazebo blanco montado frente a una entrada alternativa del edificio donde vive la dos veces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hay un hombre parado en un costado. Está esposado, con los brazos hacia atrás. Tiene el pelo castaño oscuro, barba rala, lleva puesto un jean roto, campera de cuero y gorro negro de lana. Se nota que es joven. La policía lo dejó ahí adentro para evitar el asedio de las cámaras de televisión y para que nadie se le acerque. Con un pie, sigue el ritmo del cántico que afuera corea en un *loop* la multitud detrás del vallado: “¡Si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar!”. Pero él no es un militante cristinista ni peronista. Sus manos amarradas permiten adivinar un tatuaje en cada dorso. Son símbolos nazis. En la derecha tiene dibujado un martillo de Thor. En la izquierda, una cruz de hierro: esa mano fue la que utilizó para empuñar el arma que puso a pocos centímetros de la cara de Cristina, ahora vicepresidenta y principal líder popular del país. Gatilló una vez, pero la bala no salió. Alguien vio que intentó corregir su maniobra, accionar la corredera, pero no lo logró.

Todavía es 1 de septiembre, ya cerca de medianoche, y está fresco. Su pie continúa un buen rato con la percusión en el pavimento de la calle Juncal, a una cuadra de la plaza Vicente López, en Recoleta, aun después de que lo hicieran desnudarse para verificar que no llevara explosivos adheridos a su cuerpo. La cara parece petrificada; el ojo derecho, ensangrentado. La Policía Científica está por hacerle una prueba de parafina para detectar restos de pólvora y tomarle las huellas dactilares.

Se llama Fernando André Sabag Montiel. El acta de su detención revela que tiene 35 años. Nació en Brasil y vive en Argentina desde los tres. Se presenta como remisero y vendedor de copos de azúcar. De ahora en más será “el hombre que intentó matar a Cristina”. Que estará preso quién sabe hasta cuándo, solo, aislado en un pabellón del

penal de Ezeiza, donde no recibe visitas, ni siquiera la de su defensor oficial, porque no quiere ver a nadie. Cada tanto alguien de la Defensoría General o de Cáritas le llevará ropa. Según la descripción que ofrecerá de sí mismo pocas horas después de su detención, a las primeras personas que deben evaluarlo, dirá que él es el “hombre gris” de una de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, conocido como el “Nostradamus argentino”. Ese artista habría vaticinado lo que ocurriría en el siglo siguiente, en el texto que acompaña uno de sus dibujos de 1941, a los que llamaba “psicografías premonitorias”: “La Argentina —decía— tendrá su ‘revolución francesa’, en triunfo, puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris”.

Sabag Montiel se había metido entre la marea humana que desde hacía diez días esperaba a Cristina, al atardecer, en las inmediaciones de su casa para darle apoyo. Se acomodó entre los militantes como si fuera uno más. Era algo que ya había hecho antes. Cerca de las 9 de la noche, cuando había logrado acercarse a ella hasta tenerla casi frente a frente, levantó una pistola Bersa calibre .32, modelo Lusber 84, e intentó disparar. Pero ningún proyectil ingresó a la recámara del arma. “Dios no quiso que muriera”, dijo en un examen psíquico, sin arrepentimiento.

El punto de partida de aquellas movilizaciones populares había sido el alegato del fiscal federal Diego Luciani, quien pidió doce años de cárcel para la vicepresidenta e inhabilitarla para ejercer cargos públicos de por vida. Era un juicio sobre supuestas irregularidades en obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, que había pasado desapercibido durante tres años de audiencias orales. La oposición política y los medios enfrentados con el kirchnerismo volvieron a prestarle atención justo cuando la fiscalía comenzó su último acto: nueve jornadas de enardecida exposición, transmitida por YouTube, para finalmente pedir que CFK, como llaman a la dirigente, fuera condenada.

El asesino fallido está convencido de que será sobreseído por “aclamación popular” y que el pueblo “lo sacará en andas”. Cree que gracias a él se llegó a una condena tres meses más tarde. Tiene conciencia del acto criminal que cometió y se jactó ante psiquiatras y psicólogos de la notoriedad lograda. Su satisfacción parece dedicada al clima de odio exacerbado y violencia que reinaba al momento de estos hechos en sectores y fuerzas antipopulistas y antiperonistas. Fue la persona que se lanzó a materializar lo que otros agitaban con palabras

amenazantes. Después del atentado, *Clarín* tituló: “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.

* * *

“¡Tiene un fierro! ¡Tiene un fierro!”. Los gritos brotaban del tumulto. Marcelo Fernández, conocido como “Jirafa” por su metro noventa y cinco, agarró al tipo del pecho en una fracción de segundo, estrujó su ropa y tironeó para acercarlo hacia él. Le sujetó una mano con fuerza, pero no tenía nada. Lo palpó, y nada. Otros habían visto lo que él no. “Jirafa” era uno de los militantes que formaban un cordón todos los días para proteger a la vicepresidenta cuando llegaba a su casa. “¡No le peguen! ¡No le hagan nada!”, imploraba para que nadie tocara a Sabag Montiel. Tenía claro que estaba lleno de cámaras y que había que ahorrarse cualquier acusación o versión tergiversada de lo ocurrido.

Con una sincronización intuitiva y perfecta, Federico García, un robusto concejal del municipio Presidente Perón, atrapó a Sabag Montiel desde el otro costado. Tampoco había visto el arma. Pero estaba seguro de que debían entregarlo a la Policía Federal. Le pasó un brazo por delante, a la altura de los hombros. Al levantarlo con fuerza, la espalda del tirador frustrado casi rozaba su cara. Los pies le colgaban. Lo llevó a la vuelta, a la calle Uruguay, y lo acorraló contra una pared con ayuda de otro compañero. En los interminables tres o cinco minutos que pasaron hasta que llegaron a buscarlo los agentes, no opuso ningún tipo de resistencia. Acomodó su cara inicial de desesperación y se tiró un lance con tono de falso enojo: “¡No hice nada, déjeme!”, “¡Soy compañero!”. García lo entregó a los uniformados pero no se quedó tranquilo. Por lo que pudiera pasar con Sabag y porque sería problemático que no apareciera la pistola, una prueba elemental.

Como si le leyeran la mente, al regresar a la esquina un señor bajito, corpulento y de pelo blanco comenzó a indicar con efusividad que ahí, muy cerca del semáforo, había un arma en el piso. “Fede” García le puso el pie encima y pidió que fuera pronto alguien de la custodia policial. Había tanta confusión que el primero en llegar preguntó con fastidio, como quien reta a un niño: “¿Qué pasa?”. Excepto el propio Sabag Montiel, los pocos que vieron y avisaron a los alaridos que tenía “un fierro” y los camarógrafos que estaban arriba de un puesto de diarios, nadie comprendió lo que había sucedido

hasta que se difundieron las imágenes por televisión y empezaron a llegar los videos a los teléfonos celulares a través de Whatsapp.

Cristina Fernández de Kirchner ni siquiera se había dado cuenta de que algo extraño pasaba. Acababa de llegar desde el Senado, se había bajado del auto gris y saludaba de cerca a la gente. Solo notó que alguien había revoleado un ejemplar de su libro *Sinceramente* para que lo autografiara y que cayó al piso. Guillermo Federico Gallo, uno de sus custodios, lo retuvo con su pisada y ella se agachó espontáneamente para agarrarlo. Gallo le advirtió que debían salir de ahí pronto. “Es solo un libro”, respondió la vicepresidenta con toda la intención de quedarse ahí. Ninguno de los dos notó que justo cuando estaba por descender para recuperar el libro, el arma se acercaba a su cabeza. La mano de Sabag Montiel en primer plano con el tatuaje hasta la base de sus dedos.

* * *

Un recorrido personal, político y gremial de los últimos años de su vida había llevado a “Jirafa” a estar ahí. En el lugar indicado, en el momento justo. Con sus brazos tatuados: en uno el Che Guevara, en el otro Superman.

Poco después del final de su segunda presidencia, CFK había impulsado la creación del Instituto Patria, un búnker de formación política del kirchnerismo, que tiene como referente a Oscar Parrilli, su exsecretario presidencial y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Está ubicado en una casona antigua en Rodríguez Peña 80, a metros de la Plaza de los Dos Congresos. Apenas se ingresa hay una imagen gigante de Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007, de quien Cristina enviudó el 27 de octubre de 2010. Desde abril de 2016, cuando fue inaugurado, ella lo adoptó como lugar de reunión y trabajo. Tiene una amplia oficina propia en el primer piso con vista a la calle, llena de cuadros de todos los colores y tamaños, imágenes de Evita y líderes latinoamericanos, libros y recuerdos. Entre ellos se destaca la máquina expendedora de boletos de colectivo de su papá, que fue chofer.

“Jirafa” había trabajado desde 1992 en la empresa Intercargo, que asiste a las líneas aéreas en los aeropuertos, donde fue desde maletero hasta señalero. Empezó a colaborar con “El Patria” de manera voluntaria, a partir del día en que fue a llevar un cuadro de regalo del gremio al que pertenece, la Asociación del Personal Aeronáutico

(APA). Era una remera enmarcada y con vidrio que decía: “APA no boicotea, banca”. CFK eligió un lugar para colocarla a la vista, en una pared cerca de donde termina el hall, en un pasillo que desemboca en un salón-auditorio. Además de organizar charlas y eventos, “Jirafa” — fortachón, moreno con barba y pocas canas a sus 53 años— asumió la función de cuidar a la expresidenta, que se había quedado con una custodia policial pequeña, con la que él entabló una relación cuasi cooperativa.

Eran los inicios del gobierno de Mauricio Macri que, en las antípodas del kirchnerismo, venía a manejar el país con lógica empresarial, contraria a la distribución de la riqueza y regresiva en las políticas de derechos humanos, sociales, laborales, de las mujeres y de toda índole. Para eso, apostó a asegurarse la pleitesía no solo del poder económico sino de un sector amplio del Poder Judicial. Con ese norte, su primer paso fue intentar nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto. El rechazo masivo y dentro de su propio equipo a esa medida lo obligó a enviar los pliegos al Senado, pero igual logró su objetivo. Era, a la vez, el inicio de una ofensiva judicial contra Fernández de Kirchner que escalaría durante los cuatro años de gobierno.

Unos cuantos jueces federales se sentían tan cómodos durante el macrismo que fueron a jugar al fútbol y al paddle a la residencia presidencial de Olivos, o entraban a la Casa Rosada como si fuera lo más habitual del mundo. Los visitantes más asiduos fueron integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país. La alianza de Macri con un sector de la Justicia y algunos grandes medios de comunicación fue la base de la estrategia de desgaste sobre la expresidenta para obturar su regreso al poder y su liderazgo expansivo. Así, empezaron a proliferar y avanzar a una velocidad inusitada causas judiciales en su contra. Una muestra de lo que sucedía la dio un ya fallecido juez, Claudio Bonadio, quien la citó a ocho indagatorias, en distintos expedientes, en un mismo día. “Jirafa” estuvo al lado de CFK casi todas las veces que debió presentarse en los tribunales de Comodoro Py. Pero hubo una en particular que para él marcó un antes y un después, y que traza una parábola entre ese día y el del atentado. Fue la primera ocasión en la que sintió que la había protegido.

Cristina debía declarar como imputada, citada por el juez Julián Ercolini, en el caso de las obras viales en Santa Cruz, el mismo que

transitaba su recta final el día que Sabag Montiel trató de asesinarla. Se presentó en la mole de cemento donde están los juzgados de Retiro, el 31 de octubre de 2016. Cientos de manifestantes fueron a darle aliento y respaldo. La esperaban afuera mientras la Policía Federal, por entonces bajo el mando de la ministra Patricia Bullrich, se acomodaba con ansias de reprimir. Los efectivos empezaron a tirar patadas entre la gente amontonada cuando la expresidenta ya se había subido al auto para retirarse, después de saludar y agradecer agitando los brazos. Algunos empezaron a lanzar piedras. “Jirafa” apoyó su antebrazo sobre la ventanilla del lado de Cristina, un recurso que solía utilizar. Ahí advirtió que la escena era amenazante, porque los cascotes volaban erráticamente, algunos hacia el vehículo. Cuando se dio vuelta descubrió que la expresidenta se había bajado. Desplegó su enorme cuerpo para cubrirla.

—¡Péguenme a mí, cobardes! —empezó a gritarles ella a los uniformados.

Al día siguiente, “Jirafa” volvió a verla en el Instituto Patria. Nunca habían intercambiado más que saludos formales.

—¿Cómo estás vos? —lo sorprendió CFK con la pregunta.

—¿Yo? —quiso confirmar él, desorientado.

—Gracias por lo que hiciste ayer —sonrió la exmandataria.

—Como dijo Néstor (Kirchner): siempre para cuidarla —fue la respuesta.

Casi seis años más tarde comenzaba a cerrar un círculo. Algo se repetía: la militancia y muchas otras personas surcaban las calles de Recoleta. Reaccionaban a la exaltada acusación del fiscal Luciani, que era reproducida en miles de pantallas y en cercanía de una sentencia cantada. El caso “Vialidad”, como lo nombraban los medios de comunicación —porque de la Dirección de Vialidad del gobierno de Macri había salido la denuncia central—, tenía todo para convertirse en la primera condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Sucedió en un momento particular: otros expedientes se caían a pedazos, cuestionados por la falta de pruebas o la inexistencia de delitos, por tribunales que se diferenciaron de la ola acusadora. Pero, además, era la antesala de un año de elecciones presidenciales.

* * *

“Fede” García también había llegado al lugar indicado, en el momento justo. E incluso antes. A sus 40 años, además de concejal bonaerense

es secretario de organización a nivel nacional de SATSAID, el sindicato de televisión que, junto con otros gremios de la Corriente Federal de Trabajadores, estuvo siempre cerca de CFK, más aún después de su última presidencia. El inicio de su militancia se remonta a los 17 años, en el Club 25 de Mayo del barrio donde sigue viviendo, en Guernica. Su historia en el movimiento obrero había arrancado en 2001, cuando entró a trabajar como técnico instalador de la empresa DirectTV.

Hubo un hecho puntual que llevó a los primeros militantes a Juncal y Uruguay, el 22 de agosto de 2022, cuando el fiscal Luciani y su colega Sergio Mola terminaban su pedido de pena por asociación ilícita ante el Tribunal Oral Federal 2. Un grupo de supuestos vecinos y vecinas fueron a rodear el domicilio de CFK con consignas violentas e insultos incesantes. Una mujer amenazaba con la punta de un paraguas, otras personas se mostraban decididas a golpear a la vicepresidenta si la veían llegar. No era la primera manifestación de esas características en ese lugar, pero había crecido la concurrencia en relación a las convocatorias anteriores, en las que se destacaba la presencia de mujeres de avanzada edad que hacían sonar la marcha militar.

Algunos de los gremios más cristinistas se declararon en alerta y la Corriente Peronista 13 de Abril, liderada por Walter Correa — secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, y para ese entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires—, organizó un esquema de seguridad. Comenzaron a comunicarse entre grupos sindicales, que se sumaron uno tras otro. Percibían un clima enrarecido. Tomó las riendas también La Cámpora, mientras llegaban al lugar otros sectores de la militancia, como la Agrupación Lealtad y el Frente Social Peronista.

García se sumó a las guardias y pasó horas atento, sentado en el coqueto bar de la esquina, junto con otros compañeros, adonde solía llegar, en esos días particulares, a las tres de la tarde. Desde el ventanal vio de todo, en especial un despliegue constante de policías de la Ciudad de Buenos Aires (del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, refractario al kirchnerismo), que, a sus ojos, parecían espiar más que cuidar. En lugar de monitorear a los ciudadanos y ciudadanas que destilaban gestos amenazantes y mensajes de odio contra CFK, les estaban encima a los militantes cristinistas. Algunos de civil les sacaban fotos; otros vestidos de obreros repetían todos los días el

mismo trabajo; hubo quienes pintaron varias veces el mismo puesto de diarios; entre la muchedumbre había agentes de tránsito y controladores urbanos cuya misión era incomprensible.

Federico jamás imaginó, aun en ese contexto perturbador, que aparecería un hombre decidido a asesinar a Cristina, que él lo atraparía con sus propias manos y que lograría evitar que se escapara.

Aquello que había comenzado como una guardia de sectores sindicales y jóvenes “camporistas” para cuidar a la vicepresidenta se convirtió en un masivo acto de todos los días con cientos de manifestantes. Esas movilizaciones duraron once días, en muchos de los cuales ella repetía el ritual de bajarse del auto y acercarse a la gente a saludar mientras caminaba hasta la entrada de su casa. Para que pudiera hacer ese trayecto, los militantes generaban un corredor. Ahí estaban “Jirafa” y “Fede”, como eslabones cruciales de esa cadena protectora. Donde hacía falta que estuvieran.

Hubo medios de comunicación que hablaron de ellos en los días posteriores. Se los veía en varios videos. A “Jirafa” le quedó una satisfactoria sensación de que tendría algo importante para contar a sus siete nietos, y por el resto de su vida a quien quisiera escucharlo. Sus compañeros querían fotografiarse con él. Sus “amigos de la vida” lo aplaudían cada vez que se juntaban a comer asado cada quince días.

A Federico, junto con las felicitaciones y el agradecimiento que recibía todo el tiempo desde aquel entonces, le tocó atravesar situaciones agresivas que pintan la facilidad con la que se reproducen discursos que promueven la violencia y la deshumanización. La peor tuvo que enfrentarla cuando estaba de vacaciones en Santa Teresita. Una mujer lo reconoció mientras paseaba por la peatonal y lo encaró: “Por culpa tuya esa hija de puta sigue viva”. Se quedó helado. Su foto con una remera con un enorme escudo peronista había paseado por todos los canales de televisión mientras algunos comunicadores la mostraban despectivamente. Después de eso lo marcaron en un shopping como “el que cuidaba a la yegua”, pero a esa altura ya le parecía algo menor.

* * *

“Yo no entiendo nada. Fue como un flash. Como si apagaran la luz”, les dijo Sabag Montiel a los primeros médicos legistas y psiquiatras que vio a la madrugada, casi ocho horas después del intento de

asesinato. Les aseguró —ante la consulta— que no consumía drogas ni alcohol. Luego tendría entrevistas sucesivas con un equipo interdisciplinario y su defensor oficial, Juan Martín Hermida.

—¿Querías hacer lo que hiciste y fallaste? —le preguntaron.

—Sí, pero no importa —contestó.

—¿Cuál era el plan de fuga? —le insistieron.

—No había ninguno —fue tajante.

Al comienzo no quería hablar del intento de magnicidio que había quedado a la vista —literalmente— de todo el mundo, ya que las imágenes de ese instante viajaron por todo el planeta. En cambio, pedía que fuera identificado el hombre “morochó” y “petiso” que lo había golpeado, como si eso pudiera ayudarlo en algo. “No fue la policía”, remarcaba. Tenía apenas unos raspones.

Cuando aceptó decir algo más en ese mismo ámbito, que no es el de una declaración judicial como imputado, describió lo que había hecho: “El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta mística. Estoy muy tranquilo ahora”. Pretendía, según explicó, “ajusticiar a una chorra” y generar una “reacción en el pueblo”. Repetía palabras y conceptos que tomaba de la televisión, que vomitaban sin filtro dirigentes políticos de la oposición y que se venían reproduciendo hasta ese día en encuentros y redes sociales de grupos extremistas. Él creía que había cumplido su misión y no importaba cómo había terminado.

Cristina, en cambio, está convencida de que las cosas fueron distintas. Que Sabag falló y no había plan de fuga porque no lo necesitaba. Si la bala hubiera salido, se habría podido escapar en medio de la conmoción y podría haber huido a Brasil, país del que es natural y no extradita a sus ciudadanos. Además, sospecha que le prometieron plata y, por ende, que hubo alguien detrás.

El perfil de “Nando”, como apodan al asesino fallido sus conocidos, es el de un vanidoso que quería hacerse notar para complacer a ciertas personas que lo rodeaban y que replicaban ese discurso de violencia extrema, a menudo dirigido contra el kirchnerismo. Entre ellas había alguien en particular que estuvo con él en Recoleta cuando intentó abrir fuego. En el momento nadie advirtió su presencia, pero había tenido un papel fundamental. Tal vez determinante.

2

Necesito un novio que me haga caso

10 de agosto de 2022, veintiún días antes del intento de magnicidio.
Hora: 22.52.

Fernando Sabag Montiel saluda con entusiasmo a los integrantes de un grupo de Whatsapp.

—Tengo que darles una noticia. Oficialmente, estoy en pareja, me junté. Estoy conviviendo con mi novia desde el 2 de agosto. Brenda se llama.

—¿Bella? —le pregunta un tal Christian Cortez.

—Brenda es muy buena persona. Es amorosa. No es muy lógica, pero es buena. Tiene sus defectos, pero es mi compañera desde hace meses —la describe Sabag con aire de enamorado. Como tenía otra novia, Sheyla, busca la manera de excusarse ante sus amigos. Les dice que ya “no es nada” para él y que es “una psicópata”. Cierta vez Sabag Montiel escribió ese nombre formando cada letra con balas, puso su pistola Bersa al lado y le sacó una foto.

Brenda Uliarte tiene 23 años. Es bajita y su pelo se ve castaño rojizo. Para agradar y parecer seria, dice que estudia medicina, que le gusta leer a Jorge Luis Borges y a Gabriel García Márquez. Alardea con otras lecturas sobre filosofía y la Biblia. En rigor, no terminó la secundaria. Iba a la Escuela de Enseñanza 6, Juana Manso. Se rateaba y cuando estuvo cerca de quedarse libre en tercer año, su padre, Leonardo Uliarte, un kiosquero de 44 años, la sacó y la mandó a trabajar. Con Sabag se conocieron siete años antes de formalizar el noviazgo, según la historia que cuentan cuando alguien les pregunta. Fue en una fiesta de la que se fueron juntos en un auto de él. Si aquel encuentro fue real, ella tenía 14 años y él, 26. Desde entonces, se supone, pasaban tiempo sin verse y se volvían a encontrar de manera intermitente.

Brenda vivía en San Miguel con su papá, la pareja de él y su abuelo. A la casa se llegaba por un pasillo que desembocaba en

distintos departamentos, contruidos uno encima del otro, por la familia. La mamá, Máxima, la había abandonado cuando era pequeña. La abuela se convirtió en la persona más importante para ella y en buena medida, un tío también. Eso es lo que siempre les contó a sus amigos y conocidos. La rama familiar paterna practica la religión evangélica. Como se peleó con casi todos, se fue a vivir con “Nando” a un monoambiente alquilado, en el partido de San Martín, donde él estaba instalado desde hacía ocho meses.

Fernando había vivido antes en una casa en Villa del Parque, en la calle Terrada 2315. La había comprado su mamá, Viviana Beatriz Sabag, una judía perseverante que logró salir adelante con la venta de ropa y zapatos que tenían fama de ser especiales. Compró al menos dos autos que su hijo usaría como remises. La mujer padecía obesidad mórbida y pasó los últimos tres años de su vida en una cama, en su propio hogar. Después de su muerte, en 2017, la vivienda se convirtió en un desfile de gente, fiestas, drogas y alcohol. Las tres habitaciones estaban siempre sucias, llenas de polvo y pelusas. Las paredes de color crema satinado, manchadas. El baño era distinto a todo, se veía más agradable y tenía una ducha rodeada de un vidrio circular. Había instrumentos desperdigados por los ambientes, que pocos le habían escuchado tocar a “Nando” alguna vez.

De más chico le decían “Tedi” y era fanático del heavy metal en una de sus variantes sórdidas, el death metal, que incluye entre sus temáticas desde asesinos seriales hasta canibalismo. Con su padre, Fernando Ernesto Montiel Araya, no tenía relación. De Brasil lo habían deportado a Chile, su país de origen, porque tenía seis causas penales abiertas, entre ellas una por falsificación de documentos. Vive en Valparaíso desde 2021.

Los vecinos veían a Sabag con aspecto andrajoso. El dueño de una remisería para la que prestó servicios contó que iba a trabajar cuando quería y que le había llamado la atención que se jactara de poder ver el futuro. Se mostraba místico. Hacía gala de supuestos conocimientos de numerología y astrología ante sus conocidos. Algunos de ellos contarán, después del intento de asesinato, que notaban que era alguien desesperado por caer bien y tener pertenencia. Pagaba los tragos, las pastillas (drogas de diseño), y pese a todo, era maltratado por los demás. Hay una anécdota que pinta algo de ese rasgo de Sabag, que figura en una causa judicial en Mar del Plata: había viajado a esa ciudad balnearia en grupo y, cuando llegó la hora de

pagar el hotel, los amigos huyeron sin dejar ni un peso. Pero él se quedó y se hizo cargo. Como no tenía dinero, ofreció pintar el hospedaje. Y lo hizo.

* * *

15 de agosto, dieciséis días antes del atentado. Hora: 15.48.

Sabag Montiel vuelve a sacar pecho en el chat al hablar de Brenda.

—Le hicieron una entrevista a mi novia en Crónica —avisa con orgullo. Comparte el video. Quiere que la vean y le crean.

En la nota televisiva están juntos frente al Teatro San Martín, sobre la avenida Corrientes. Es domingo y hay bastante movimiento en la calle. Gente que sale a pasear. Un joven movilero de anteojos y camisa a cuadros se acerca primero a Sabag, con un micrófono rojo y la letra “C” que identifica al canal. “¿Hay que sacar los planes sociales? Planes sí - planes no”, es la consigna que le propone. Alude a los programas de ayuda social estatal destinados a personas en situación de vulnerabilidad social y económica, que son denostados por la derecha política.

Sabag no lo sabe, pero la vicepresidenta justo había visto la nota y la había comentado con su hijo Máximo. Se había detenido a mirarla porque tocaba un tema al que ella se había referido en junio, en un discurso en Avellaneda, y que generó mucho debate. “El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”, es lo que había dicho. En ese momento, le pareció que las respuestas de la chica que aparecía en la pantalla no eran propias, sino que estaba todo armado.

—Mi novia, supuestamente, tenía planes sociales. Dejé de tenerlos porque la verdad que no da sacar la misma plata... —responde Sabag Montiel al cronista, que lo interrumpe para saber cuál de los planes cobraba.

“Nando”, que lleva una remera negra con arabescos amarillos, no sabe qué decir. Se voltea y le pregunta a Brenda, que está fuera de cuadro.

La cámara se aproxima a la chica, que sostiene un palo con copos de azúcar de color rosa, esos que les gustan a niños y niñas.

—¡Mirá, ahora se las rebusca vendiendo algodón de azúcar! —se muestra sorprendido el notero.

Ella, con una amplia sonrisa, le confirma que había cobrado un plan “dos o tres meses”.

—Prefiero salir a trabajar, me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia —responde Brenda con un discurso automatizado, que repetirá, a pesar de que no aparecerá constancia alguna que indique que cobró algún plan social.

—¿Qué opinás de Mariana, “la planera”? —avanza el reportero.

Se refiere a una mujer llamada Mariana Alfonzo, que se había hecho famosa en las redes sociales por jactarse de no trabajar y defender los planes sociales.

—Me parece una vaga, es mejor que salga a trabajar vendiendo copitos o lo que sea —insiste Uliarte con el mismo repertorio. De paso, cuenta que gana más dinero con la venta de copos—: Con el plan ganaba 18 (mil pesos), pero eso lo hago en tres días (de venta), prefiero salir a trabajar.

“Nando” dice al grupo que le parece “un poco racista” lo que había dicho su novia en televisión, “pero —acota— en parte tiene razón con lo de los planes”. Algunos coinciden con la apreciación, otros no. Él aclara que, pese a sus diferencias, la respalda.

—Qué linda tu guacha. Es Mary Jane (la novia de *El hombre araña*). Nando, firmá contrato con Crónica —bromea un usuario de Whatsapp que figura como Juan.

No es descabellado lo que dice, teniendo en cuenta que no era la primera vez que les hacían una entrevista para Crónica TV. La anterior había sido el 29 de julio en Tigre cuando, quien por entonces era presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estaba por ser nombrado ministro de Economía. El funcionario fue intendente de ese municipio, donde vive. Esta vez la pregunta que el canal llevaba a sus entrevistados callejeros era “Massa sí o Massa no”.

—No, ni a palos —responde Sabag. Brenda permanece parada a su lado, en la puerta de un cine, aferrada al soporte de madera en el que se exhiben los copos, que está vacío.

Así, el dúo Sabag Montiel-Uliarte fue entrevistado dos veces por el mismo medio televisivo, con dos semanas de diferencia, sobre consignas políticas y en lugares separados por 32 kilómetros de distancia. Una enorme casualidad, si es que lo fue. En una tercera ocasión Brenda fue al estudio de Crónica TV y la sentaron al lado de Mariana “la planera”. Ahí dijo, mientras mascaba chicle con movimientos ampulosos y el pelo más colorado, que le molestaba mucho que “venga gente del extranjero a cobrar un plan, me parece muy injusto”. “Hay que salir a patearla para ganarse el mango”, se

puso como ejemplo.

El diálogo de Sabag con sus amigos se transforma en una mezcolanza de comentarios. Ellos le advierten que alguien le va a querer sacar a Brenda. “Te la van a buitrear”, es la frase que usan para prevenirlo. “Ya sé, olvidate que atrae buitres”, concede él. Confiesa que en la entrevista en el centro porteño “todos le tiraban onda”, le decían “me caso con vos” y hasta el notero “le pidió el número de teléfono”. Dice que a él no le importa, pero es evidente que sí le importa, y mucho.

La conversación hace foco ahora en cuestiones políticas. Sabag Montiel cuenta al resto que no le gustan las ideas libertarias de ella, quien adula al líder de ese espacio (La Libertad Avanza), Javier Milei. Se trata de un dirigente de apariencia “antisistema”, que dice que quiere terminar con la casta política y pone el eje de su discurso en privatizar las empresas públicas, la educación, eliminar el Banco Central, dolarizar, eliminar la Educación Sexual Integral (ESI), promover la libre portación de armas, mano dura para todo, eliminar el sistema jubilatorio estatal, entre tantas cosas, además de reivindicar —a su manera— la figura de José de San Martín.

Brenda lo quiere conocer. Se lo dice varias veces a su novio. A él le parece que Milei y el expresidente Mauricio Macri son casi lo mismo y que “detrás de la ola de los libertarios van a venir los macristas, que son hermanos de los libertarios, los peronistas van a quedar afuera...”. Quiere mostrarse conocedor, pese a que dice que no le interesa. Habla de estos temas de manera superficial y con datos sueltos. Enreda nombres y conceptos. “Si ella es libertaria, es tema de ella, me vivo peleando”, comenta. Se esmera en describirla mejor: “Tiene ciertas ideologías raras, es fan de Eva Perón pero no le gusta Perón. Y es libertaria”. “Yo soy antipolítico, no me vendo y ella sí”, se explaya.

De repente, Sabag cambia la tónica y cancherea.

—Yo no soy como mi novia, que tiene esas ideas. Yo quisiera conocer a Cristina, hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo.

Nadie reacciona frente a lo que dice. Ni bien ni mal. Nada. Solo Juan le vaticina que “va a ser un héroe”. “Nando” sigue como si hubiera dicho algo de lo más habitual y propone al grupo que se sumen a la venta de copos de azúcar: “Se gana buena guita, es real, facturamos 12 lucas por día”.

Brenda solía tener dos o más novios a la vez. Andrés Diante fue uno de ellos. Se conocieron por Facebook en 2019. A él no le agradaba esa situación poligámica. Por eso experimentó una gran satisfacción cuando ella cortó las relaciones con otros dos hombres con los que salía simultáneamente. Se sentía halagado porque la chica valoraba su performance sexual, aunque todo el tiempo temía que apareciera otro.

Mientras tanto intentaba, sin éxito, alentarla para que retomara los estudios. Un día aterrizaron en una de las fiestas que se hacían en la casa de Sabag Montiel. Entre los dos hombres se pusieron a charlar, se cayeron bien y el dueño de casa le preguntó si conocía a alguien que quisiera alquilar una de sus habitaciones. Andrés le dijo que a él le interesaba y se mudó allí, a la calle Terrada, donde pasó unos meses. Se encontró con que Sabag no limpiaba, no pagaba los servicios, dejaba la cocina encastrada con comida y en cierto momento enfermó. El inquilino se ocupó de él, que casi no podía salir de la cama. En cuanto se recuperó, le rescindió el contrato. Le tenía tanta bronca que, cuando se enteró de que había sido él quien intentó matar a la vicepresidenta, salió a hablar con los canales de televisión. Su pelo teñido completamente de azul lo hizo conocido. Lo usaba así en homenaje a Spiritbox, una banda canadiense de heavy metal, cuyo primer disco se llamó *Eternal Blue* (Azul eterno).

La relación entre Andrés y Brenda terminó cuando concluyeron que se llevaban mejor como amigos, aunque valoraban sus encuentros sexuales. En 2022 se vieron cerca de mitad de año. Él la fue a buscar a San Miguel, a la estación General Lemos y de ahí fueron a otra, Martín Coronado. Tomaron un café al lado de una estación de servicio y luego un remise los llevó a un hotel alojamiento. El encuentro tuvo para él momentos sorprendidos. Por primera vez ella le hablaba obsesivamente de asuntos políticos y, en especial, de su simpatía por Milei. A la inversa, hablaba pestes de Cristina Fernández de Kirchner. De pronto, ella extendió el brazo y le mostró un anillo finito y dorado:

—Mirá, me comprometí con Agustina —le actualizó sus novedades.

Agustina Díaz era la mejor amiga de Brenda. Andrés se la había cruzado alguna que otra vez, sabía del fuerte vínculo que traían de la escuela secundaria, pero no había tenido demasiado trato.

Luego Brenda lo sorprendió con otra noticia. También se había vinculado sentimentalmente con un Youtuber conocido como “El Presto”, que tiene miles de seguidores, cuyo nombre real es Eduardo

Miguel Prestofelippo.

—Tampoco es que te cogiste a Brad Pitt —se rió Andrés.

* * *

“El Presto” es un odiador de ultraderecha, libertario, militante contra la cuarentena por el coronavirus y antikirchnerista, que atesora una foto junto al genocida Jorge Rafael Videla. Forma parte de un grupo que se dedica a amenazar y diseminar mensajes en esa línea, que se autodenominó “Ministerio del Odio”. Casualmente, o no tanto, otro integrante de esa organización que se hace llamar Emmanuel Dannan publicó en su cuenta de Twitter la primera vez que apareció Brenda en televisión: “Condecoren ya mismo a la vendedora de algodón de azúcar”.

Brenda y “El Presto” se conocieron por Instagram en noviembre de 2021, cuando él participaba de la campaña que llevó a Milei a ser diputado nacional. Ella le enviaba mensajes del estilo “te vi con ese traje azul, estabas hermoso”. Él le decía que, cuando estuviera por Buenos Aires, se podrían encontrar.

Prestofelippo no conocía a Brenda por su verdadero nombre sino como Ámbar, el que usaba en algunos de sus varios perfiles en las redes sociales y para vender contenido erótico en la página para adultos conocida como Only Fans, a la que se accede con pagos electrónicos. Es el mismo nombre con el que se presentó en la tevé. Tenía 32 cuentas de Instagram, ocho correos electrónicos, tres cuentas de Twitter y una de Google, y también estaba en Facebook. Usaba nombres como Ámbar Uchiza, Liz Manzo, Ámbar Elisa, Daki Yubel, además del real.

El 22 de mayo de 2022, “El Presto” la invitó a una reunión con amigos en el barrio de Caballito y después pasaron la noche juntos, pese a que él desconfiaba y grabó todo lo que hablaron. Al día siguiente se mandaron mensajes acaramelados. Ella: “Me encantó verte y, sobre todo, sentirte”. Él: “Muchas gracias, Ámbar, yo también la pasé muy bien y bueno, espero que se repita cuando vuelva”.

Mientras estaba con Prestofelippo en la cama, Brenda le mandaba mensajes a su amiga Agustina Díaz, a quien tenía agendada en su celular como “Amor de mi vida”. Le venía contando sobre esa relación desde que había empezado a intercambiar mensajes con él en abril. Pasadas las dos de la madrugada le dijo: “Estoy con mi crush”, “es muy hermoso”. En charlas posteriores le dio detalles de esa noche de

pasión y le dijo: “los chongos llaman o mandan mensajes y los rechazo”. Con el correr de los días, ella intentó volver a provocar un encuentro, pero él se escabulló. En todo ese tiempo llamó a “El Presto” de distintas maneras: “el periodista”, “mi crush”, “el pelotudo”. Estaba decepcionada, además, porque él no hubiera dicho nada de sus apariciones estelares en Crónica TV. Tan enojada que decía que contrataría a alguien para hackear sus redes sociales.

A comienzos de agosto, Brenda le contó a Agustina que había empezado a salir con Sabag Montiel. “Me trata como una reina, me compra todo, trata hasta bien a mis gatos, pero no siento nada, él quiere un futuro conmigo. Tiene autos, está cagado en plata, pero no se le para, es impotente. En cambio, por el periodista sí siento y quiero que vuelva pero no le importo, solo quiere coger...”. Con todo ese desapego, Brenda también le hablaba a Sabag Montiel de “El Presto”.

Un día le dijo que notó que el youtuber había empezado a seguir en Instagram a mujeres con su mismo color de pelo, y que no le parecía casual. Del mismo modo, cuando vio que él publicó en su cuenta una foto en la zona de La Boca o Barracas, supuso que era porque sabía o intuía que ella andaba por ahí asomada a un balcón. Allí, en la avenida Montes de Oca 1209, se juntaban los vendedores de copos de azúcar, en la casa del hermano de Sergio Orozco, uno de ellos.

Ciertos aspectos del comportamiento de Brenda son esenciales para entender su ascendencia sobre Sabag Montiel.

“Nando” y Brenda conocieron al dueño del negocio de los copos de azúcar, llamado Nicolás Gabriel Carrizo, a mitad de 2022, en una fiesta en la casa de Barracas que organizaba él mismo. Al día siguiente volvieron con la excusa de que se habían olvidado una campera, pero ella iba a tener sexo con el dueño de casa a cambio de 10.000 pesos. Poco después se encontraron otra vez con Carrizo en la casa de una amiga en común. Ahí fue cuando les ofreció trabajo. Él les armaba los copos con una máquina destartada de color azul, pero ellos tenían que llevar los ingredientes. Luego salían a venderlos. Les cobraba 600 pesos por 50 copos. Siempre el punto de encuentro era en Montes de Oca. Carrizo diría después que ambos eran poco cumplidores y que trabajaban días salteados.

Brenda venía siguiendo con interés a los grupos libertarios y de odiadores antigobierno. Se metía donde podía. Pero llegó un punto en que dijo estar harta de que los libertarios no llevaran sus discursos “a

la acción”.

* * *

—Tengo un fierro porque mi ex está gede —le dijo Brenda a su amiga Serena, el 22 de abril de 2022.

“Gede” se usa para indicar que alguien es denso o insoportable.

—Es mío el fierro. Lo compré para asustar a un ex que bardeó, que se burló de mi hijo —le dice Brenda el mismo día a otra persona, Fran. Se refiere a un bebé que perdió, al parecer por muerte súbita.

La chica le sacaba fotos al arma y posaba con ella. Un día de junio, le mandó una a Agustina Díaz, pero la borró. Ella llegó a verla y le envió un mensaje con carcajadas. Brenda le dijo: “El fierro es de un amigo, no digas nada”.

—Estoy organizando para ir a hacer bardo a la Casa Rosada con bombas molotov y todo. Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina. Me dan los ovarios para hacerlo —le adelantó Brenda sin ningún prurito a Agustina, el 4 de julio.

—Por eso te amo —respondió Díaz.

—El tema es cómo, porque la vieja tiene seguridad —explicó Uliarte su encrucijada.

—Y sí —le siguió la corriente la amiga.

—No es joda, boluda. Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro, todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, sé usar el fierro —escaló Brenda.

Al día siguiente, le contó el mismo plan a un amigo, “Nacho”.

Brenda: Para limpiar Argentina hace falta que corra sangre. De poder, se puede; hay que encontrar la manera.

Nacho: Y, no te veo como francotiradora o jefa de una organización con capital extremo para pagar un sicario.

Brenda: No necesito pagarlo, puedo hacerlo yo. Sé usar un fierro, no soy francotiradora, pero algo es algo. Hay que encontrar un hueco, ser estratega.

Nacho: Después te agarran, posiblemente en el acto, y o sos boleta o te pudrís en cana. Viene otro boludo al gobierno.

Brenda: Si mataron a (John Fitzgerald) Kennedy, ¿no los van a matar a estos?

Nacho: Arruinaste tu vida.

Brenda: No voy a ser boluda de automandarme al muere, y no

voy a ir sola.

Ella se fastidió. Algo de la charla dejó de gustarle. Tildó a su amigo de “blando”. Nacho le respondió que era una delirante, aunque dejaba entrever cierta preocupación al notar que hablaba en serio.

Brenda: Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya. Y bueno, buscate una tibia como vos. Yo no soy tibia. Estoy hirviendo.

Estaba tan obsesionada con el tema que, en una ocasión, en agosto, cuando ya se desplegaba la movilización en favor de CFK, le comentó a Carrizo, una suerte de “jefe” en la venta de copos:

—Hace falta alguien que vaya con un fierro y le pegue un corchazo.

—Sí, ¿no? —se enganchó él.

* * *

Los algodones de azúcar de color rosa empezaron a aparecer cerca de la multitud alrededor de la casa de CFK, en Juncal y Uruguay, en los días previos al atentado. Era una imagen extraña teniendo en cuenta que allí había pocos niños y niñas.

Brenda tenía un plan, según hablaba con amigos y amigas. Y Sabag Montiel quería impresionarla.

Se pusieron a buscar un departamento en Recoleta. Transcurría el segundo día de marchas a favor de Cristina. Brenda le dijo a “Nando” que había encontrado uno, aunque después notaría que no estaba tan cerca de la casa de la vicepresidenta. Había que dejar una seña. A través de mensajes de Whatsapp, trató de convencer a Sabag de trabajar toda la semana y pagarlo.

Utilizó todos los recursos que tenía a mano para obtener una respuesta positiva. Como se estaba tiñendo el pelo mientras charlaban, le mandó una foto del proceso de decoloración. Se veía rubia.

—Así voy a quedar, jaja, ya me decidí, quiero ser rubia como Evita —puso en el texto con el que acompañó la foto.

Y luego siguió con otro mensaje:

—¿No te gusta el depto?

—No me gusta el depto. El pelo sí. Cristina y la gente está reunida en Recoleta... para pegarle un corchazo —respondió Sabag, pero

luego ella le explicó que el pelo le quedaría cobrizo y que aún se pensaba teñir las cejas.

—Cristina vive en Recoleta, estamos recerca de la mina, la podemos hacer pija, eh... Sí, hay que ir y pegarle un corchazo. ¿Sabés qué hace falta? Un francotirador. Viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda — intentó envolverlo.

Brenda le insistió: “Un lugar soñado”. Él se mostró desconfiado, remarcó que tenía temor de no llegar a cubrir los gastos, más aún teniendo en cuenta que adeudaba el pago de un tatuaje. Entre idas y vueltas, supuestamente alguien llegó con la seña antes que ellos. La idea de Uliarte se debilitó. Y, para entonces, ya le costaba dejar pasar el hecho de que había perdido interés en la relación con “Nando”.

—¿Y si volvemos a ser amigos? Estábamos mejor. Me hacías caso —le dijo Brenda a Sabag Montiel sin piedad—. Esto no sirve. No me sirve una pareja que no me haga caso.

Sabag siguió intentando todo. En unos días se acercaría a pocos metros de la vicepresidenta como si fuera un militante. Le apuntará con el arma que viajó en fotos por chats de Whatsapp, y fallará. Brenda estará muy cerca de él, vestida de negro, con una bolsa blanca en la mano. El pelo rojo, atado en un rodete. Cuando atrapen a su novio, no dirá nada. Lo dejará solo, caminará con la mirada hacia abajo y atravesará la multitud hasta perderse.

3

Mal comienzo

Fernando Sabag Montiel permanecía sentado en una camioneta policial, a una altura y en un lugar que permitía que la gente pudiera verlo desde afuera. No tenía los vidrios polarizados. Se sonreía, lo que volvía locos de furia y desconcierto a algunos manifestantes que permanecían cerca. Habían pasado las diez de la noche, una hora desde que intentó cometer el magnicidio. Los militantes que lo habían atrapado lo dejaron en manos de un pequeño grupo de policías. Uno de ellos era Augusto López Rinaldi, el jefe del Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal. Sabag Montiel le había dicho: “Me pegaron, no hice nada”. Se señalaba el golpe en la cara para victimizarse. Todavía reinaba cierta confusión y algunos efectivos no sabían lo que había pasado con CFK. Subieron a Sabag al vehículo pensando que había sido agredido en una trifulca. Lo trataban como un damnificado, una víctima.

El jefe de la custodia de la vicepresidenta, Diego Carbone, se encontraba en Tigre, a punto de entrar al consultorio del kinesiólogo por una lesión en la rodilla, cuando un oficial le mandó a su celular el video del momento en que aparece el arma cerca de ella. Tuvo que mirarlo cinco veces porque no entendía la escena.

—¿Qué me estás mandando? —preguntó.

—Miralo en cámara lenta —le sugirió el hombre de su equipo.

Puso el video en pausa y avanzó manualmente, arrastrando el dedo por la parte inferior de la pantalla del celular. Cuando vio la escena con nitidez, subió a su auto y en veinte minutos estuvo en Recoleta. Completó el trayecto en tiempo récord. Lo primero que hizo fue ir a ver dónde y cómo estaba Sabag Montiel. Abrió la puerta de la camioneta y se agarró la cabeza al advertir que no estaba esposado. Le corrió la capucha para ver si la cara coincidía con la del documento que ya le habían enviado. López Rinaldi acababa de recibir el mismo video en el que identificó las manos tatuadas. No había dudas de que

estaban frente al hombre que había tratado de matar a Fernández de Kirchner. Le pusieron las esposas y lo llevaron a un patrullero blindado, que fue trasladado a la calle Juncal y estacionado junto a una de las entradas al gazebo. A todos les llamaba la atención su tranquilidad. Estuvo dentro del vehículo más de tres horas, ya sin público al acecho.

Algunos funcionarios habían regresado del trabajo a sus casas y vieron todo por televisión. Juan Martín Mena, secretario de Justicia y hombre de extrema confianza de la vicepresidenta, interrumpió su cena, estrelló su celular contra el piso y empezó a gritar con desesperación ante las imágenes. Había visto a CFK un rato antes en el Senado. Era inevitable imaginar que podrían haberla matado. Y que no ocurrió por milagro. Lo que se veía por tvé era descontrol. Sintió que iba a descomponerse. Fue hacia el baño, se lavó la cara y se activó. Dejó todo y manejó como un rayo hasta la esquina de Juncal y Uruguay. En medio de la angustia, les comentaba a sus conocidos que no podía sacarse de la cabeza el canto de los tenores del Teatro Colón que el día anterior habían entonado, en dirección a la ventana de la vicepresidenta, un famoso coro de la ópera *Nabucco*, “Va pensiero” (Vuela, pensamiento), de Giuseppe Verdi, y que justo esa noche estaban en el estudio de C5N en el momento en que se conocía la noticia del atentado. Se le mezclaba todo. La pieza operística se convertía en la cortina musical del instante del disparo que no fue.

Llegó agitado, forzando su cuerpo grandote, y se zambulló en el departamento de Cristina. Ella estaba serena, sentada en el living. La televisión permanecía encendida. Los funcionarios que iban llegando e incluso sus secretarios Diego Bermúdez y Mariano Cabral estaban todos en estado de shock.

—Bueno, “presi”, mi función es abajo —le dijo Mena después de un rato. Quería ir a controlar el procedimiento y ver a Sabag Montiel. Se despidió y salió.

En el gazebo se amontonaron algunos funcionarios. Uno de los policías abrió la puerta del patrullero y levantó la campera de Sabag para mostrarle al secretario de Justicia que estaba esposado. En un bolsillo del abrigo, le señaló, tenía guardado el teléfono celular.

—¿Cómo estamos? ¿Está todo bien? —preguntó Wado de Pedro, el ministro del Interior, que también había bajado.

—Sí, quedate tranquilo —le dijo Mena.

—Mirá el teléfono, por favor, no lo pierdas de vista —le advirtió

De Pedro mientras le apretaba el brazo a un funcionario del Ministerio de Seguridad, en señal de que estaba diciendo algo importante.

El celular del detenido podía ser una prueba crucial para reconstruir cómo había llegado hasta ahí con el objetivo de matar a la vicepresidenta. Era imperioso saber con quién había hablado o chateado en los últimos días. ¿Alguien lo mandó? ¿Alguien le había llenado la cabeza? ¿Era un sicario? ¿Tenía conexiones políticas? ¿Le pagaron? ¿Le pagarían? ¿Quiso ser el “héroe” ejecutor de lo que pregonaban agrupaciones violentas y dirigentes políticos? Ante semejante hecho de violencia política, lo que todo el mundo esperaba era encontrar respuestas a esos interrogantes. Que hubiera una investigación judicial eficaz, que no dejara escapar ni un detalle ni desperdiciara un segundo.

Ya era casi de madrugada cuando la policía hizo bajar a Sabag del vehículo para completar el procedimiento de rigor dentro de la carpa. Llevaron testigos para presenciarlo. Había uno que no podía disimular en su cara la furia que le despertaba ver al detenido. Mena tuvo que pedirle que se tranquilizara porque podía ser problemático. Los celulares de los funcionarios no paraban de sonar, entre llamados y mensajes. Esa misma noche, varios recibieron los videos de las notas que les habían hecho a “Nando” y a su novia Brenda en Crónica TV.

A Sabag Montiel le tomaron las huellas dactilares, le realizaron la prueba “dermotest”, le quitaron las esposas solo para que se sacara la ropa —menos los calzoncillos— y entregase lo que tenía encima. Quedó todo expuesto en el suelo: dos comprobantes de pago de infracciones a su nombre, una tarjeta “SUBE” de las que se usan para abonar el transporte público, un certificado de discapacidad a su nombre, una tarjeta del local de tatuajes “Yeyo Tattoos” que queda en Quilmes, un par de auriculares inalámbricos de color negro con su estuche, un cargador blanco para el celular, cinco anillos, dos llaves doradas, tres pulseras y dos cadenas plateadas, un barbijito celeste. Tenía, además, 28 pesos en monedas, que depositó dentro de sus zapatillas.

Carbone tiene 53 años, un físico trabajado para practicar artes marciales y corte de pelo entrecano rapado en la nuca con jopo adelante. Trabaja con CFK desde 2004, aunque había comenzado al lado de Néstor Kirchner dos años antes. Subió al departamento con preocupación después de ver a Sabag. Ella lo recibió sin estridencias y

le señaló la pantalla:

—¿Viste? —le dijo. Luego le explicó que pensó que solo se había tratado de una escaramuza. Acto seguido, le pidió que verificara si el arma tenía balas en la recámara.

La pistola secuestrada estaba preservada debajo de otra carpa más pequeña sobre la calle Juncal, entre un pilar de electricidad y un árbol. Tenía parte de la numeración gastada, aunque asomaba el número 250 en la base de la empuñadura. Sabag Montiel no tenía credencial de legítimo usuario y el arma había pertenecido a un vecino suyo, César Bruno Herrera. No está claro cómo llegó a sus manos. Cuando finalmente se presentaron los peritos, movieron la corredera y notaron que no había cartuchos en la recámara. Tampoco tenía el seguro colocado y había cinco balas calibre .32 en el estuche cargador que tenía colocado. Los expertos notaron que el resorte que da impulso a la munición estaba gastado. Es una pieza muy barata, de unos 15 pesos al momento de los sucesos. Un peritaje posterior daría cuenta de que, aun así y pese a que era vieja, la Bersa estaba apta para disparar. “Dicha falencia no afecta el ciclo de disparo del arma (alimentación de munición en recámara, disparo, extracción y eyección de la vaina servida resultante)”, confirmó el informe pericial final. La pistola semiautomática que empuñó Sabag Montiel, incluso, había sido disparada con anterioridad y también funcionó —con los mismos componentes que tenía el día del hecho— cuando la probaron durante la investigación.

* * *

A las 00.23 del 2 de septiembre, a Sabag Montiel le incautaron —finalmente— el celular, un aparato marca Samsung modelo SM A50 5G, con 64 gigabytes de memoria, que estaba apagado, según quedó asentado en el acta del secuestro. No era un aparato sofisticado. Aún en el lugar, un especialista del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal extrajo la tarjeta SIM y la memoria. A esa altura, cuando habían pasado más de tres horas del ataque, comenzó la cadena de custodia de la preciada evidencia, que fue colocada dentro de un sobre de papel madera, y por fuera, otro llamado Faraday, que bloquea señales.

El aparato fue trasladado un rato más tarde en un auto policial, desde la escena del hecho hasta el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. A ella le tocó intervenir en el caso porque

estaba de turno. Llegó a destino y fue recibido a las 2.49. A esa hora de la madrugada, desde la amplia avenida Comodoro Py, solo se veían las luces encendidas de sus oficinas, en el tercer piso. El resto del edificio permanecía a oscuras. La magistrada iba y venía, hablaba con secretarios, averiguaban datos y domicilios. A ella se la veía acelerada, con el pelo rubión, largo y lacio, intacto. Quienes la frecuentan saben que tiene un estilo ansioso y verborágico. Afuera, la quietud era absoluta.

Capuchetti fue nombrada jueza federal porteña en mayo de 2019. Había quedado segunda en el concurso. En primer lugar figuraba Agustina Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las Mujeres (UFEM). Pero el gobierno de Mauricio Macri eligió a “Capu”, como la llaman en tribunales, y mandó su pliego al Senado, que el kirchnerismo rechazó con votos en contra. En su jura hubo otros exponentes afines al macrismo: el exministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo, el procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand y el entonces representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques. Logró una amplia concurrencia de jueces y fiscales federales, aunque aquel acto de asunción quedó inmortalizado en una foto: la que se sacó mientras saludaba al fiscal Carlos Stornelli, el gran impulsor del caso “Cuadernos”, sobre supuestas coimas en la obra pública, con el que logró su objetivo, junto con Bonadio, de mandar a juicio a CFK, exfuncionarios y empresarios.

También aplaudía con ganas su padre, el comisario general Carlos Capuchetti, que hasta 2003 fue jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, donde cultivó un buen vínculo con el comisario favorito de Mauricio Macri, Jorge “Fino” Palacios. Luego se hizo cargo de la Seguridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre los hermanos de la jueza está María Cecilia, exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La magistrada venía de trabajar en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el procurador que lo encabezaba era Martín Ocampo, exlegislador porteño del PRO. Dirigía la oficina de Enlace con Organismos Oficiales. Desde 2014 se incorporó como docente e investigadora al Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), un organismo que tiene como autoridad política al Ministerio de Seguridad porteño, que al momento del atentado encabezaba Marcelo D'Alessandro. La función de ese instituto es ayudar a la

conducción política del sistema de seguridad pública y formar cuadros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Los tribunales de Retiro eran territorio conocido para Capuchetti, ya que desde 1993 fue auxiliar del fallecido Jorge Urso, y luego, secretaria letrada de Sergio Torres, quien pasaría más tarde a integrar la Suprema Corte bonaerense. Es la segunda jueza mujer en los tribunales federales porteños. La primera es María Romilda Servini, que ocupa ese cargo desde 1990, cuando la nombró el entonces presidente Carlos Menem. El juzgado para el que concursó había sido el del finado Norberto Oyarbide. Al llegar, la flamante jueza hizo reformas y barrió con el estilo barroco, con alfombras y cortinados pesados, que cultivaba su antecesor, sacó los crucifijos y desarmó el living donde cada tanto el histriónico juez servía champán. Ella pintó todo de blanco y puso un simple pero cómodo sillón enfrente con su escritorio.

Dentro de su propio despacho estuvieron largas horas esa madrugada Carbone, el fiscal Eduardo Taiano —en reemplazo de Carlos Rívolo, que se encontraba de viaje, pero aparecería pronto— y Mena. Llegaron también el comisario general Carlos Alejandro Ñamandú, que es jefe de Investigaciones Federales de la Policía Federal, más policías, funcionarios del Ministerio de Seguridad y el fiscal Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Consumieron litros y litros de café. El jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, se encontraba fuera del país, camino a una reunión de Interpol en Singapur. No volvió de inmediato.

—Hay que cuidar mejor a la vicepresidenta —encaró la jueza a Carbone, cuando lo vio llegar.

Perplejo, el comisario inspector intentó explicarle cómo era el dispositivo de cuidado de CFK. Policías en la puerta de la casa, un grupo que va delante de ella cuando vuelve del Senado o cualquier otro lugar, un anillo de agentes a su alrededor, motos que abren paso, una “cápsula de seguridad”, como le dicen al auto blindado que la lleva...

—Bueno, no sabía —lo cortó Capuchetti.

En el pasillo había un solo periodista y bastante policía. De a poco, llegaban los testigos del atentado. Se acumulaban pequeños grupos de personas. Dentro del juzgado la investigación daba sus primeros pasos:

la jueza ordenaba allanamientos, averiguación de líneas telefónicas a nombre del acusado, se tomaban las primeras testimoniales. No todos estaban ocupados por igual. Capuchetti se mostraba activa. Los equipos de secretarios del juzgado y la fiscalía avanzaban con lo que se les ordenaba. El fiscal Taiano aprobaba cada una de las directivas que daba la magistrada. El teléfono de Mena no paraba de recibir información y consultas, sobre todo del entorno político de la vicepresidenta.

Cerca de las cuatro de la mañana, Carbone miró a Mena y soltó un comentario vinculado a las expectativas que tenía sobre la investigación judicial. “Espero que esto lo investiguen bien”, fue lo primero que dijo, para luego cuestionar cómo se investigó el caso de la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, quien también había denunciado a CFK. El viceministro aprovechó que nadie lo había escuchado y le hizo un gesto como para que cerrara la boca, pero su interlocutor no lo captó.

—¿Vamos a fumar? —le propuso entonces Mena.

—No fumo, ya sabés, ¿qué me estás diciendo? —retrucó con sorpresa el coordinador de los custodios.

—¡Vamos a fumar! —le ordenó el funcionario.

Atravesaron juntos la secretaría privada del juzgado, que separa el despacho de la jueza del pasillo, abrieron la puerta y se ubicaron a unos metros, en busca de un poco de privacidad. Mena encendió un cigarrillo armado y miró fijo a Carbone, al borde de la risa aun en ese momento trágico. El policía no había notado que despotricaba frente al fiscal a cargo de la investigación del caso Nisman, Taiano, que de causalidad no escuchó el comentario. Como otros en Comodoro Py, este fiscal sostiene que a Nisman lo mataron, aunque no hay indicios en el expediente de que alguien hubiera ingresado al baño del departamento que habitaba en Puerto Madero, donde apareció el cuerpo sin vida y con un tiro en la sien. El problema es que, en más de nueve años, nadie pudo explicar quién y cómo lo habría asesinado.

—¿Qué hacés acá? —le preguntó Mena al periodista solitario, que permanecía sentado en una silla frente al tribunal, en horas de la madrugada.

—¿Qué hacés vos acá? —fue su contraataque.

Mena había ido a ver a Capuchetti para decirle que ponía todos los recursos del Estado a su disposición. Esa misma noche se había comunicado con algunos ministerios y dependencias para que

estuvieran atentos. Habría mucho por hacer, desde chequear datos del detenido hasta rastrear el camino que hizo con su tarjeta SUBE. Aunque nadie se lo había pedido, era el enviado de Cristina en tribunales. Era clara su doble función: colaborar y controlar una causa de extrema gravedad, donde no se podía perder ni un segundo, ni un rastro, ni una prueba. En ese instante, una de las grandes obsesiones era el celular de Sabag Montiel.

* * *

El juzgado parece un departamento con varios ambientes que desembocan en el principal, que ocupa Capuchetti. En el escritorio de uno de los secretarios quedó el sobre que guardaba el teléfono. Los testigos que presenciaron su apertura fueron dos de los que habían estado en el momento del atentado contra CFK y habían sido convocados a declarar sobre el hecho. Uno de ellos era Federico García, el mismo que había aprehendido a Sabag Montiel.

La jueza pidió la asistencia de algún especialista de la Policía Federal para descargar el contenido del aparato, algo que podía llevar horas. Se presentó el cabo Alejandro Heredia, del departamento de Cibercrimen, que llevó un dispositivo “UFED” (Universal Forensic Device) de la marca israelí Cellebrite, para extraer los datos. A simple vista parece una notebook. Lo acompañaba otro agente, Adrián Eduardo Acosta. Ninguno era personal especializado de la Superintendencia Federal de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Policía Federal, que es la que hace ese trabajo específico.

Nadie les preguntó a los policías cuáles eran sus conocimientos ni cuántas veces habían realizado antes una operación de ese tipo, o usado el sistema necesario. Ni la jueza, ni los fiscales presentes, ni los funcionarios indagaron en el asunto. Cuando encendieron el teléfono, encontraron que la forma de acceder era mediante una clave. Lo conectaron al equipo con un cable USB, pero no lograron desbloquearlo. Por el contrario, “se brickeó”, como se suele decir en la jerga informática. Quedó en “modo ladrillo” y era imposible obtener algo. Los técnicos le iban explicando el procedimiento al secretario del juzgado, Federico Clerc.

Solo lograron extraer información de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria. Después de varios intentos, ante el fracaso casi total, elaboraron un informe técnico que firmó Heredia, mientras que Acosta

suscribió una nota donde constaba que dejaban el celular y el resto de los elementos en un sobre color madera, cerrado, al igual que el sobre en el cual el aparato había llegado, porque así funciona la cadena de custodia. El informe de la operación solo dirá que no fue posible extraer información del dispositivo porque se hallaba “bloqueado con patrón”. El teléfono quedaba al cuidado del juzgado, en el sobre, dentro de la caja fuerte.

En un principio, la jueza evaluó esperar a que Sabag Montiel prestara declaración indagatoria y les diera el patrón para acceder al contenido del teléfono. Pero recibió un aviso de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tenía un sistema actualizado y personal especializado, y decidió enviarlo a esa fuerza.

En medio de todo esto, cerca de las seis de la mañana llegó el fiscal Rívolo, que venía de Río Grande, Tierra del Fuego, donde había participado de una capacitación sobre la implementación del sistema acusatorio, en el cual los fiscales asumen mayor protagonismo en las investigaciones.

Cuando por fin pisó Comodoro Py, todavía permanecían en el juzgado aquellos que habían pasado ahí toda la madrugada. Antes de entrar, se reunió con su secretario Javier Fontenla, que lo puso al tanto de todo. A esa hora ya sabían que la PFA no había conseguido abrir el teléfono del atacante y que había tecnología más actualizada en la PSA.

Tras los saludos de rigor, el fiscal mantuvo un intercambio con la jueza sobre los ejes en los que se enfocada la causa en esas primeras horas.

—¿Hay una línea de investigación sobre el accionar de la custodia? —preguntó Rívolo.

—No, para el juzgado por ahora eso no es una línea —le respondió la jueza.

—Entonces, la fiscalía la abrirá por su lado —tensionó Rívolo.

Esa línea, que sigue abierta, no arrojó nada útil para la causa. A la par se abrió, además, un sumario administrativo.

* * *

El celular de Sabag Montiel pasó todo el día en el juzgado de Capuchetti, que recién lo envió a la PSA entrada la noche del 2 de septiembre, cerca de las 23. La sede se encuentra en Ezeiza, dentro del Instituto de Formación de la Fuerza Aérea. Allí, todo el mundo estaba

convencido de que iría la jueza en persona a llevar el aparato con una fuerte custodia. La guardia estaba avisada. Pero se llevaron una sorpresa. En medio de la neblina de una noche fría bajó sola del auto una mujer, Priscila Santillán, la custodia policial del juzgado. Uno de los secretarios, Leandro Noguera, había viajado un tramo con ella y se bajó en el camino. Sabía que el itinerario pasaba cerca de su casa. Llevaba un día en el juzgado y le pareció una buena forma de salir de Retiro a esa hora.

“Es como que mande el teléfono con un hijo”, intentó justificarse la jueza ante comentarios en Comodoro Py. Pero era inexplicable y extremadamente riesgoso transportar una prueba crucial de ese modo, sin resguardos y sin nadie del juzgado, en una causa de enorme trascendencia institucional. Capuchetti insistió con el argumento de que Priscila es la persona en la que cada día deposita toda su confianza. ¿Qué hubiera pasado si alguien se interponía en su camino? ¿Si chocaba? ¿Si se descomponía?

Pero no fue todo. El perito de la PSA, Pablo Kaplan, recibió el sobre y quedó atónito.

—¡Está abierto! —exclamó.

Miró dentro del paquete y se potenció su gesto de horror.

—¡Y está prendido!

El aparato estaba en su pantalla de inicio: fondo negro y el cartel de Samsung Galaxy A50. Y arriba de todo, en letra roja muy pequeña, la frase “Warning: CMDLINE Parameter”. Era un código de error.

Junto con Kaplan se encontraban otra perito, Camila Seren, y el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINICRI), Damián Neustadt. De inmediato, llamaron a un secretario, enfurecidos, porque se había roto la cadena de custodia, al llegar el sobre abierto.

—Está en el ámbito del juzgado —fue la respuesta.

Para no perder más tiempo, conectaron el celular al UFED, intentaron salir de la leyenda de alerta y tuvieron otro sobresalto. El teléfono decía “¡Hola!”. Eso indicaba que se había reseteado de fábrica. Traducido: quería decir que el teléfono estaba vacío. (Aunque no se sabe si le queda algún resto de la información que supo contener). Eran casi las doce y media de la noche.

Le avisaron a Juan Martín Mena, que se encontraba con CFK y su hijo Máximo.

—No le puedo decir esto a Cristina —se desesperó el viceministro

de Justicia.

El subinspector Kaplan y la principal Seren tuvieron que declarar en la fiscalía por la extracción que terminó con el celular en blanco. Relataron la secuencia y advirtieron que tuvieron que trabajar sin información ni documentación que explicara qué había hecho la Policía Federal con el teléfono y cómo había procedido el juzgado. Indicaron que el “pin de carga” por donde se conecta estaba sucio y deteriorado. La mujer dijo que podía haber un daño o modificación en el software.

Desde el gobierno armaron una reunión informal con peritos de todas las fuerzas de seguridad para intentar entender qué había pasado. Aunque no lograron una conclusión definitiva, cargaron las responsabilidades en el juzgado, que tenía el dispositivo bajo su custodia. Instalaron una duda venenosa: ¿qué pasó durante todas las horas en que el aparato estuvo en el juzgado?

Capuchetti le encomendó un peritaje a Gendarmería, cuyo informe dice que el reseteo de fábrica se había producido a las 00.19, cuando el teléfono se encontraba en la Policía de Seguridad Aeroportuaria — algo que ya se sabía—, pero no atribuyó responsabilidad alguna. La jueza presentó una denuncia, que recayó en la jueza María Servini y el fiscal Federico Delgado. Tomaron algunos testimonios de quienes habían intervenido en los intentos de extracción de datos y concluyeron que el asunto no se podía escindir del intento de asesinato. Por lo tanto, la propia Capuchetti debía investigarlo, algo difícil de entender teniendo en cuenta que los procedimientos estuvieron a su cargo.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, viajó a Estados Unidos por este asunto y recibió ofrecimientos de asistencia del FBI y de un organismo llamado “Homeland Security”, pero nunca se avanzó. Habría una última alternativa, mediante la técnica de microsoldadura, conocida como “chip-off”, que conlleva el alto riesgo de terminar de destruir el teléfono y que se utiliza solo ante fracasos de técnicas menos invasivas.

De la tarjeta de memoria de Sabag se pudieron obtener algunas fotos suyas y de Brenda Uliarte posando con la pistola Bersa, y se rescató parte de un chat de Telegram que no decía mucho. Participaba en un grupo de cientos de integrantes llamado Kill Illuminati, que compartía teorías conspirativas, y veía películas por esa aplicación. No había nada en el material disponible que pudiera arrojar una pista

sobre si hubo alguien detrás del atentado. Para cualquier espectador, los contratiempos con los que había empezado la investigación sembraban inevitablemente una gran duda: ¿querían encontrar la verdad?

Así, Sabag sería enviado a juicio oral diez meses más tarde, sin que se hubiera esclarecido que pasó con su teléfono, a esa altura deteriorado.

4

“Naciste de vuelta”

Diego Bermúdez, un moreno de 40 años, barba levemente puntiaguda y sonrisa contagiosa, es uno de los tres secretarios de Cristina Fernández de Kirchner. Es un militante apasionado y trabaja con ella desde 2014. Se ocupa de su agenda, reuniones, papeles, trámites, llamados, viajes, y la acompaña a todas partes. Ese 1 de septiembre de 2022 había decidido caminar más cerca suyo, casi pegado, para hacer el recorrido desde que bajaba del auto oficial hasta su casa, cuando volvía del Senado. Unos días antes, CFK se había tropezado en un pozo que no vio porque estaba concentrada en las caras de los simpatizantes, a quienes saludaba con dedicación. A partir de ahí se convenció de que tendría que ir mirando hacia el piso para evitar otro accidente. Había tanta gente que no era fácil avanzar, pero ella no tenía ningún apuro. Disfrutaba de ese abrazo colectivo mientras esperaba el final del juicio por la obra pública, aunque, decía, sabía que la condena estaba escrita de antemano.

A las 20.52, Diego sintió en una de sus rodillas el golpe de un ejemplar del libro *Sinceramente* y un sonido metálico le resonó en el oído. No vio el arma, solo un brazo que descendía. Apenas giró hacia atrás, encontró a pocos centímetros la cara de Fernando Sabag Montiel. Tenía la mirada enajenada. Era distinta a la de todos y todas los que estaban ahí. Era la mirada de la muerte, la describiría después. Supuso que algo había hecho ese sujeto, pero no imaginó qué. Enseguida escuchó a un hombre de remera roja, Walter Oscar Ruales, gritar que Sabag tenía “un fierro”. Bermúdez se puso nervioso y se arrojó a la altura de su cintura, para palparlo y saber si realmente estaba armado, pero ya había tirado la pistola. Volvió a mirar en dirección a la vicepresidenta, que estaba sonriente y acomodándose el pelo, con el libro para firmar en la mano.

—Tranquilo, fue solo un libro —se dirigió a Diego uno de los custodios, que repetía lo que ella acababa de decir.

—No, no, algo pasó, hay que sacarla de acá —insistió el secretario y se posicionó, literalmente, cuidando su espalda.

Hasta que logró que ella entrara al edificio pasaron cerca de diez minutos. Seguía firmando un libro tras otro. No paraba de repartir saludos.

El encargado estaba en el hall y le dio un regalo que alguien había dejado para ella. Diego cerró la puerta del ascensor. Estaban los dos solos.

—¿Qué fue lo que pasó? —preguntó la vicepresidenta.

—¿No escuchaste un clic? —le respondió el secretario con otra pregunta.

—No, para nada.

—Me dijeron que uno tenía un fierro.

—Un fierro... ¿Un arma? —se sorprendió CFK.

—Me dijeron un fierro, claramente es un arma —siguió él, algo incómodo.

—Naaaa... —subestimó ella como quien dice “no puede ser”.

Llegaron al quinto piso. El secretario abrió la puerta, encendió las luces y le anunció que bajaría para averiguar qué había pasado. Cristina se quedó sola en el amplio departamento. Fue hasta su dormitorio para ponerse más cómoda, como cualquier otro día.

El canal C5N transmitía en vivo desde Recoleta. En el instante en que Sabag Montiel entraba en acción, el periodista Gustavo Sylvestre entrevistaba al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La pantalla estaba dividida en tres: el conductor, la esquina de Juncal y Uruguay, y Quintela. El riojano hablaba sobre el reparto de la coparticipación, cuando en la imagen del medio comenzaba un tumulto. El conductor lo interrumpió.

—A ver, a ver, me permite... Permítame, permítame, perdón... Rafa, ¿qué pasó? —le consultó al cronista Rafael García Palavecino, que estaba conectado en vivo desde las cercanías de la casa de la vicepresidenta.

—Se produjo un forcejeo, no vemos bien, fue enfrente, en la vereda del domicilio de Cristina. Intervinieron los custodios. No sabemos bien si hubo una pelea entre las personas que estaban queriendo acercarse. Tampoco vemos si hay una persona reducida o detenida.... —trató de explicar el movilero.

En medio del bullicio, Ruales, el militante de la remera roja, tenía claro lo que había visto y oído: la mano en el segundo exacto en que

apretaba el gatillo. Lo contaría en el juzgado.

* * *

Para evitar que notaran su presencia, Diego salió por la puerta principal, la de la calle Uruguay, que jamás usaba. Apenas dio unos pasos, vio que dos militantes tenían a Sabag contra una pared y al lado estaba parado un policía. Avanzó y preguntó dónde estaba Guillermo Gallo, el custodio a cargo ese día.

—Está con el arma —le dijo otro agente al oído y le indicó el camino.

—¿Es posta? —preguntó Diego a Gallo.

—Es posta y parece que gatilló.

Caminó otra vez hacia el edificio y en el trayecto llamó a Máximo, el hijo de la vicepresidenta, que no respondía. Intentó con el más antiguo de los secretarios, Mariano Cabral, que estaba en su casa.

—Vení urgente —le pidió.

—¿Qué pasó? —quiso saber su compañero, pero Bermúdez no le daba precisiones.

—¡Vení urgente! —le imploró, y no le quedó otra opción más que adelantarle algo—. Parece que le gatillaron en la cabeza y la bala no salió —justo ahí Máximo le devolvió la llamada. Estaba en un asado en Parque Leloir con el músico y compositor Indio Solari, con quien tiene una gran amistad.

Por esas increíbles coincidencias, en una comida anterior en la que había participado la propia Cristina, el Indio les dijo a los presentes: “Cuídenla, que la van a querer matar”.

Máximo emprendió el regreso rápidamente, el auto en el que viajaba tomó la autopista del Acceso Oeste. Se puso a mirar los videos del hecho, que ya le iban llegando a su celular. Él mismo, ese día a la mañana, había dicho en una entrevista con Roberto Navarro, en El Destape Radio: “Están compitiendo a ver quién mata al primer peronista”.

Diego corrió nuevamente hacia el departamento de CFK. Mientras subía en el ascensor, buscaba las palabras para explicarle lo que había sucedido. ¿Cómo decirle que quisieron matarla y se salvó de casualidad? ¿Cómo decírselo a *ella*? A ella, que le parecía invencible. O una marciana. Que a él, como a muchas otras personas, lo ayudaba a aferrarse a la política y la imaginaba eternamente en su lugar de liderazgo.

Cristina estaba en el vestidor de su habitación, al fondo de un largo pasillo que, quienes integran su equipo, estaban acostumbrados a recorrer cada vez que querían decirle algo o avisarle que debía salir. A veces los hacía esperar, otras eran convidados a entrar.

—Pasá —invitó a Diego, que debió hacer un esfuerzo para darle la noticia sin trabarse.

—Naciste de vuelta —fue lo primero que se le ocurrió—. El fierro era un arma y parece que te la gatillaron, pero falló.

—¿Cómo que un arma? —preguntó Cristina con los ojos inmensos, pero sin conmoción, y como si la conversación anterior no hubiese existido.

Atravesaron otra vez el pasillo y fueron al comedor diario, donde encendieron la televisión.

El presidente Alberto Fernández estaba en la quinta de Olivos. Tenía la tevé de fondo, clavada en *Minuto 1*, el programa de Sylvestre, quien todavía decía con vehemencia que algo había pasado pero no tenían precisiones. Pronto confirmaría: “Detuvieron a una persona armada”. Hablaba de “un atentado”. El mandatario reconoció a “Jirafa” en las imágenes, que, además de cuidar a CFK, algunas veces lo cuidaba a él. Estaba agarrando a un hombre, tironeando de su ropa. Intentaba retenerlo. Luego se sabría que era Sabag Montiel. El mandatario hizo alguna averiguación y llamó a Cristina.

—¿Qué pasa, por qué tanto lío? —preguntó ella, todavía sin plena conciencia de la situación.

—¿No viste lo que pasó?

—Me dicen que un tipo estaba con una pistola.

Cristina prestó atención a la tele y se desaceleró.

—Esto es una locura. Quedate tranquilo, mañana vemos qué hacemos —trató de tranquilizarlo.

El departamento de la dos veces presidenta era el mismo que había allanado el juez Bonadio en su afán de encontrarle algo —en especial billetes—, en las múltiples causas que acumulaba en su contra, por medio de artilugios que evitaban que las tuviera otro juez o jueza. En aquel procedimiento, que se difundió en forma masiva, como para que lo viera todo el país, hizo que le rompieran las paredes. No había nada de lo que buscaba.

Máximo fue uno de los primeros en llegar. CFK estaba comiendo una ensalada, y actuaba con tal normalidad que se puso a hacer una

videollamada con sus nietos, que no estaban al tanto de lo que había pasado.

El lugar empezó a llenarse de gente de su núcleo más cercano. Pronto llegaron Mariano, Wado de Pedro, Juan Martín Mena (el viceministro de Justicia), Carbone (jefe de la custodia), Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires), Andrés “Cuervo” Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense), el senador Oscar Parrilli, Mayra Mendoza (intendente de Quilmes) y María Luz Alonso (secretaria administrativa del Senado). Había una premisa contundente en el aire, casi una orden: nadie llora.

—¿Quién es el pibe? —quiso saber CFK.

Quería bajar a la calle a toda costa. Quería entender por qué había querido matarla. La tuvieron que frenar entre todos los que estaban ahí. Si era por ella, se mandaba. Máximo ya lo había intentado al llegar, pero se lo impidieron.

A Florencia, su hija, se ocupó de contarle todo ella misma, a pesar de que se enteró rápidamente porque el hecho había sido televisado. Es que el vínculo es distinto al que tiene con Máximo. “Mi hija Florencia sí depende de mí (...). Mi hija es una mujer extraordinaria que está enferma, que tiene una patología, como puede tener cualquier mujer (...). Ella sí me necesita a mí”, diría medio año después en la única entrevista televisiva que dio tras el atentado.

Cristina durmió en su casa, en compañía de una de sus asistentes, y rodeada de custodia en el quinto piso.

* * *

El presidente estaba reunido esa noche con Victoria Tolosa Paz, por entonces a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Política Sociales, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Con ellos analizó cómo seguir. Fernández propuso hablar por cadena nacional.

—Me parece insuficiente —dijo Olmos.

Evaluaron que había que tratar de canalizar el malestar general, evitar que creciera y pudiera derivar en otras situaciones de violencia, ante un hecho que representaba un golpe a la democracia. Al mandatario se le ocurrió decretar feriado y convocar a una movilización a Plaza de Mayo.

Muy cerca de la medianoche, Alberto Fernández dio un mensaje de cuatro minutos por cadena. Dijo que era el hecho más grave “desde

que hemos recuperado nuestra democracia”. Pidió “el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos” y también de “los medios”. Sostuvo que la “convivencia democrática” se rompió con el “discurso de odio que se ha esparcido desde distintos espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina”.

“Podemos disentir —continuó—, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar, porque engendran violencia, y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada...”. Dijo que había hablado con la jueza Capuchetti para “que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos” y que “asegure la vida del acusado”. Entonces, anunció el día no laborable e invitó “al pueblo argentino a expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra presidenta”.

Las provincias de Mendoza y Jujuy, ambas gobernadas por dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), decidieron no adherir al feriado. El mendocino Rodolfo Suárez difundió una explicación retorcida: dijo que el anuncio había sido muy tarde y las “familias” mendocinas estaban “desconcertadas”; entonces, mejor repudiar yendo a trabajar. El jujeño Gerardo Morales hizo una publicación escueta: “El gobierno de Jujuy no tomará ninguna medida en el día de la fecha. La actividad escolar y administrativa será normal”. Los dos mandatarios, de todos modos, repudiaron el atentado, como la inmensa mayoría de la dirigencia política. La única excepción fue Patricia Bullrich —presidenta del PRO—, que escribió en su cuenta de Twitter: “El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable”.

La misma noche del ataque, a los pocos minutos de conocerse la noticia, ya había en los medios quienes lo ponían en duda. Fue el caso de Débora Plager. En el canal La Nación+ sostuvo que la información que daba cuenta de la detención de una persona armada en la puerta de la casa de Cristina provenía de referentes del kirchnerismo, lo que sugería que era una versión interesada. “Para ellos, es un atentado contra la vicepresidenta”, “están tirando de esa cuerda con la idea de

que hay gente que está allí para atentar contra la vida de Cristina, porque, si no, se termina este relato absurdo al que nos obligan”, comentaba Plager. Su colega Jonatan Viale le dijo que debía haber una confusión con una situación del día anterior, cuando un repartidor de Rappi se detuvo en la puerta del edificio donde vivía CFK y comenzó a insultar y agredir con una llave inglesa. “Yo lo vi en vivo. Era un chico que está mal”, dijo Viale. “El tipo sacó algo, pero no le iba a hacer nada (a Cristina)”, minimizó. Pronto quedó claro que eran dos hechos de violencia distintos. El segundo casi se lleva la vida de CFK.

Al día siguiente, todos los diarios del país y muchos del mundo dieron la noticia, con matices, pero estuvo en las portadas como un hecho indiscutible y de enorme impacto político. Algunos hablaban de que habían intentado “matar” o “asesinar” a la vicepresidenta; otros usaban la palabra “magnicidio” o “atentado”, o ponían el acento en que “un hombre” “quiso dispararle en la cabeza” y fue detenido; también usaban el agregado de que era “brasileño”.

Las imágenes del intento de asesinato eran clarísimas y pronto se confirmaría que Sabag Montiel había gatillado, que el arma era real y tenía capacidad de disparar, aunque la bala no hubiera salido. Sin embargo, se daba un particular fenómeno, alentado por algunos comunicadores y medios que dedican mayor cantidad de tiempo y páginas a las críticas al kirchnerismo que a otros espacios: había quienes insistían en poner el hecho en duda. Esa idea fue alimentada con la difusión de encuestas en diversos portales, que decían que más de la mitad de la gente “no cree en el ataque” o cree que fue “un hecho violento usado por Cristina Kirchner para victimizarse”. Estuvo presente en las columnas estelares de *Clarín* y *La Nación*. Joaquín Morales Solá directamente tituló dos semanas después: “Cuando muchos no creen en el atentado” y hasta deslizó la idea de un “autoatentado”. Con el correr de los meses, la causa judicial jamás manejó una hipótesis de esas características.

* * *

“Lo malo (es) que no la mató”, escribió en Twitter, un rato después del intento de magnicidio (del que adjuntó un video), el mismo repartidor de Rappi que la noche previa se había lanzado a atacar a militantes y custodios en Juncal y Uruguay. Aquel episodio fue el último de una serie de sucesos inquietantes que marcaron los diez días de

movilizaciones en apoyo a la vicepresidenta. El hombre, de 21 años, se llama Gastón Toledo y es un exintegrante del Ejército, de donde había sido destituido. Cerca de las 10 de la noche se detuvo a la altura de la casa de CFK, se quitó la mochila donde cargaba los pedidos y lanzó su ofensiva. La policía lo aprehendió, quedó esposado boca abajo en el suelo y lo llevaron detenido. La justicia contravencional porteña le labró un acta y lo dejó en libertad. Después, negaría tener vínculos con Sabag Montiel y Uliarte. Tampoco le encontraron nada. Pero, con su ataque, puso a prueba el esquema de defensa de la vicepresidenta.

Todo aquel agosto, los medios quedaron inundados de frases, audios, imágenes y recortes del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en el juicio bautizado como “Vialidad”, que prometía la primera condena para CFK. Lograron convertir sus nueve audiencias de exposición en un espectáculo masivo, transmitido por YouTube desde sus despachos, que miles de personas seguían como un culebrón. El 22 de ese mes, llegó la hora de pedir la pena, pero antes desplegaron expresiones políticas que parecían estar destinadas a compensar baches probatorios.

“No fue magia, fue corrupción”, se despachó Mola con una alusión irónica a una expresión que acuñó CFK para dar cuenta de los logros de su gestión. “El *lawfare* no existe”, rebatió el fiscal a la defensa de la vicepresidenta, que había mostrado que el juicio era una construcción con fines político-persecutorios. “Señores jueces, es corrupción o justicia”, bramó Luciani y se lanzó a opinar que Cristina “defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron”. Fueron horas y horas de consignas que envalentonaron al público antikirchnerista. Luego pidieron 12 años de cárcel por asociación ilícita para la vicepresidenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ese mismo lunes, al elenco habitual de mujeres vestidas de negro que iba a insultar a CFK, se sumaron más vecinos y vecinas. Eran un centenar esta vez, golpeando cacerolas, cuidados por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Pronto llegaron los militantes para contrarrestar esa situación, y fueron cada vez más. También apareció, para provocar, un grupito ultraviolento, que resultó estar integrado por dos referentes de una organización a la que nadie en el gobierno había observado como verdadera amenaza hasta entonces, llamada Revolución Federal. Estaban sus líderes Jonathan Morel y Leonardo Sosa, que sacudían con agresividad las maderas de un cerco que rodeaba un pozo. Con ellos iba un joven, Natanael Reinstein

Menin, que llevaba una bomba molotov en su mochila.

Por esos días los secretarios de Cristina, algunos custodios y otros colaboradores percibieron un clima extraño y tenso, pese a que cada vez llegaba más gente a acompañarla. Algunos hasta tenían la impresión de que algo —no sabían qué— podía pasar. Se sentían en riesgo. En una ocasión comenzaron a caer huevazos en dirección a la vicepresidenta, desde un balcón. La custodia indicó que era necesario bajar la valija de la manta antibalas que suelen llevar en el baúl del auto oficial, que sirve para colocar cerca de la persona a la que se quiere proteger. La escena generó suspicacias y empezó a correr el rumor de que algo dudoso pasaba con la custodia vicepresidencial.

El sábado 27 de agosto, la cuadra donde vivía la vicepresidenta amaneció vallada y rodeada de policías del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Era una provocación explícita, en un día en que estaba convocado un acto, el “Cristinazo” le decían, en Parque Lezama, a la vez que estaban previstos otros en otras plazas de la ciudad y de varias provincias. Era cantado que el alto cerco negro se convertiría en un llamado para que quienes pensaban movilizarse en lugares diversos fueran para Recoleta. El jefe de Gobierno y su entonces ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, habían dejado un cordón policial, carros hidrantes e infantería listos para la acción. La explicación era que la gente de la zona se quejaba del ruido, había que cuidar la seguridad del lugar y ya era hora de “recuperar el espacio público para los vecinos y devolverle la vida normal al barrio”. Hablaban de situaciones de violencia inexistentes, que no podían precisar, porque quienes se movilizaban estaban muy tranquilos/as. Era obvio que alguien intentaría tirar el vallado y empezaría la represión.

La falacia de aquella explicación quedó expuesta: el mes anterior un grupo de violentos y violentas, liderados por la organización Revolución Federal, había ido a amenazar a la vicepresidenta, incluso de muerte, en la puerta del Instituto Patria. El fiscal que intervino, Leonel Gómez Barbella, sabía que la situación podía empeorar. Por eso les pidió en una nota a D'Alessandro y al jefe de policía de la ciudad, Gabriel Berard, que reforzaran la presencia policial en los alrededores. La respuesta fue nula.

Esa tarde-noche pasó de todo. La policía porteña tiró agua y gases. Hasta el jefe de la custodia de CFK, Carbone, quiso hablar con quien estaba a cargo de ese operativo y se ligó gas lacrimógeno en la cara.

Entre todos los devotos de CFK movilizados, empezaron a llegar dirigentes y funcionarios cercanos a ella y se sucedieron escenas que, de no ser porque había imágenes que las mostraban, hubiesen parecido *fake news*. Los policías de Larreta anunciaban por el sistema de modulación quiénes iban llegando. Los marcaban. A Máximo Kirchner lo golpearon e insultaron cuando quería alcanzar la puerta de la casa de su madre.

—¿Querés pasar, Máximo? La concha de tu madre. ¿Querés pasar, puto? ¡La concha de tu madre vas a pasar! —se escuchó con nitidez la voz de uno de los agentes. En las filmaciones caseras y profesionales se ven muchísimos más policías con escudos que civiles.

Cuando finalmente Máximo logró superar la barrera de policías y subió a la casa de su madre, la vicepresidenta se sorprendió por la palidez de su rostro. Pero eso tenía una explicación: se había puesto en la cara una suerte de antídoto, la sustancia que un grupo de militantes de La Cámpora con especialización en farmacia creó para repeler los efectos de los gases lacrimógenos.

En cuanto la policía vio arribar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los oficiales avisó por modulación a sus colegas: “Se hizo presente el gobernador de la provincia”.

—Mire, señor, el gobernador de la provincia es un manifestante más en este momento. El gobernador es un manifestante más —enfaticó otro efectivo, como quien avisa que ahí no tenía fueros—. Vamos a trabajar con el personal urbano de la manera correcta, está formada la línea y vamos a aguantar. El hidrante va a tomar posición por detrás del personal policial —continuó como si estuviera en una guerra imaginaria.

El despliegue era grotesco. Otro rasgo notorio de ese día fue que había efectivos de civil en varios lugares, que filmaban y sacaban fotos: en un balcón de la cuadra, en la terraza de un edificio de la esquina, y desde la plaza Vicente López. Tres diputados del Frente de Todos —Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés— hicieron una denuncia por posible espionaje, como integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Terminó archivada con el argumento de que un fiscal porteño había avalado su presencia. Parece que a los agentes de la ciudad no les había llamado la atención en esos días agitados que en la esquina de Juncal y Uruguay se asomara un enorme ramillete de copos de azúcar rosados, pese a que no circulaban niños o niñas.

Uliarte y Sabag Montiel merodeaban por la zona desde comienzos de agosto, pero la policía de la ciudad no vio nada raro. Esto nadie lo investigó.

Larreta dio una conferencia de prensa flanqueado por el ministro de Gobierno porteño Jorge Macri (más adelante candidato a sucederlo) y por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Dijo que los militantes kirchneristas debían irse a sus casas y que la vicepresidenta tenía que garantizar que eso sucediera “pacíficamente”. Él había mandado a poner vallas, a su policía a sacar a los manifestantes, pero la culpa de “los disturbios” —responsabilizaba— la tenía CFK, a quien además cuestionaba que sus seguidores ocupaban hacía días “el espacio público”. Como broche, Mauricio Macri acusaba en Twitter a CFK de promover “el caos”. No querían más muestras de apoyo hacia ella ante la vista de todo el mundo, y menos en un barrio de clase media acomodada como Recoleta, donde vislumbran a sus potenciales votantes.

Entrada la noche, la gente no se iba y sostenía cánticos como “Cristina presidenta, Cristina presidenta...”. A las 22.43 ya se veía armado un pequeño escenario improvisado, desde donde CFK hablaría al final de ese día infernal. Cuando subió, se la veía expuesta.

Contó que desde que terminó su segunda presidencia sufrió “el permanente hostigamiento” de gente que iba a insultarla o amenazarla de muerte. “Nunca vi —aseguró— a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intervenir para evitar ese hostigamiento. Soy ciudadana también y pago mis impuestos igual que todos los que están acá. Tengo el mismo derecho que todos, ninguno más, pero sí el mismo. Y después dicen que los violentos somos nosotros”. Recordó las manifestaciones con bolsas mortuorias en la pandemia, y luego con horcas y guillotinas, donde coincidieron dirigentes y grupos extremistas a quienes nadie les impidió protestar. Lo que quieren, sostuvo, es “exterminar al peronismo, que fue lo que quisieron desde siempre”. Le reclamó a la oposición (de Macri, Larreta y Bullrich), a las puertas de una campaña presidencial, “que dejen de competir entre sí para ver quién odia más y quién les pega más a los peronistas. (...) esas competencias para ver quién es más duro, quién castiga más las manifestaciones populares, nunca llegaron a buen puerto en Argentina...”.

Después de aquel breve acto, la propia CFK sintió que se había puesto en una situación peligrosa en esa tarima despojada. Conocía el

barrio y se imaginó atrapada entre los edificios, desde donde podían tirarle cualquier cosa. Por primera vez en bastante tiempo, su pensamiento coincidió con el del presidente Alberto Fernández.

* * *

Lo que CFK no sabía, mientras hablaba ante la multitud, era que Fernando Sabag Montiel ya merodeaba por la zona. Tampoco lo preveía su custodia. No tenía “una hipótesis de conflicto”, ya que la masa de gente movilizada no era hostil, le dirían luego a la justicia. Pero ese mismo día, ese hombre estaba ahí con la idea de matar a la vicepresidenta. Era el primer intento.

Esa noche, Brenda Uliarte le mandaba mensajes a su amiga Agustina Díaz y le anunciaba: “Hoy me convierto en San Martín. Voy a mandar a matar a Cristina... Me repudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo”.

Desde Recoleta, Sabag Montiel le reportaba a Brenda, que estaba viajando hacia su casa y quería saber qué pasaba.

—No, ya se me... metió adentro y el escenario y el anfiteatro lo sacaron, y estuvo... le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, no traigas nada —le informó él.

—Estoy llegando a casa —le avisó ella.

—Al pedo que vengas... No va a salir... Ya se metió adentro —insistió él.

—Qué hija de puta la Cristi... Se da cuenta —dijo Brenda.

—No, no es que se da cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente, y la gente ya se está yendo, y el momento era ese, ahora ya es tarde, o sea ya son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora —explicó él y dijo que analizaría las imágenes de la televisión después.

Sabag Montiel le decía a su novia que los manifestantes le daban “gracia”, los trataba de “putitos ahí sacándose fotos, cholulos, haciéndose los peronistas con la V”, pero se ponía a pensar en lo que podía pasar si disparaba y todo le parecía complicado.

—¿Vos sabés cómo salen todos corriendo? Pánico, el caos que se genera. O sea, es muy difícil... O sea, si yo disparo, después de los tiros van a saber que yo tengo el fierro, voy a tener que sacar el

cargador y me van a tener que sacar el fierro, pero no van a tener las balas, entonces eh me van a cagar a piñas, pero más de uno, a ver, me pueden agarrar entre varios, pero otros van a correr y va a ser muy difícil, qué sé yo.

—Ya llegué, amor... ¿Vos decís que no te van a agarrar? La onda es que metas el corchazo y te escapes —fue su respuesta fantasiosa.

Agustina no había respondido todavía el mensaje de Brenda, que veinticinco minutos después le volvió a escribir: “Qué hija de puta, se metió adentro antes de que le meta el tiro”, le comentó. Pero su amiga no entendía mucho.

Amor de mi vida (Agustina): ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Brenda: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca, te juro, la tenía ahí. Los liberales ya me tienen repodrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo, basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

Amor de mi vida: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Brenda: No me cobró, lo hizo porque también está recaliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene repodrida que ande robando y quede impune.

Amor de mi vida: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta.

Brenda: Por eso mandé a alguien.

Amor de mi vida: Aunque sí, quién no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra.

Brenda: Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo repensada.

Amor de mi vida: ¿Sabés cuánta guita necesitás para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites.

Brenda: Tengo algo de *money*, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país.

El 30 de agosto Sabag le pasa un reporte a Uliarte, como si estuviera cerca de la casa de CFK: “Cristina está a las 8 en Recoleta, firmó libro y no había vallado policial”. Brenda le responde con soberbia: “Era el momento de ir y pegarle el corchazo”.

Un día después, el 31 de agosto, Sabag cuenta en un grupo de Whatsapp llamado “Hoy Arkham” (hallado en el celular de uno de vendedores de copos de azúcar) que había conseguido balas sin necesidad de ir a una armería, porque “en algunas villas venden”. “Ya tengo 100 municiones. Un arsenal de balas”, se hace el presumido, manda una foto y dice que se va a practicar tiro. A un tal Duncan (que en realidad se llama David Ricciardone) le pide consejos para hacer “ráfaga doble acción”, “tiros repentinos sin cargar” y le da detalles sobre el arma que posee, la pistola Bersa, la misma que se encontró. Era evidente que no tenía claro cómo utilizar el arma.

En esa misma conversación, una mujer llamada Joana le pregunta por audio: “¿A quién querés matar vos, eh?”. La respuesta fue directa: “A Cristina quiero matar, jaja”. Faltaban pocas horas para eso.

5

Brenda y la fuga que no fue

1 de septiembre

Brenda Uliarte estaba parada en la vereda, cerca de una vidriera. Desde ahí podía ver a su novio, Sabag Montiel, que había quedado atrapado entre militantes kirchneristas que tironeaban de sus ropas mientras arrojaban golpes para evitar que se escapara. La turba pasó delante de la chica, que no se inmutó. Como si no conociera al asesino fallido, esperó hasta que se despejara un poco la calle y se preparó para abandonar el lugar. Relojeó la zona, se cruzó con un custodio que iba y venía, miró dónde llevaban al atacante y caminó por Juncal sin mirar hacia atrás. Sobre el hombro izquierdo le colgaba una mochila. Se iba del lugar al que muchos y muchas llegaban.

Eran las 20.53 del 1 de septiembre. Sabag Montiel había sido capturado. Brenda se alejaba de la escena del hecho en busca de un refugio. Sostenía una bolsa blanca y un paraguas largo con la mano izquierda. Con su ropa negra y el pelo atado, se esfumó en la oscuridad. Antes de llegar esa tarde a Recoleta, ya sabía dónde pasaría la noche.

En las horas previas, mientras paseaba con Sabag Montiel por el shopping Abasto, se comunicó con Lucas Ocampos, su exnovio, un joven albañil de 33 años que le guardaba mucho cariño y que luego se presentaría a declarar como testigo en la investigación judicial. Quedaron en que ella iría a su casa. Eran las 18.30 cuando concretaron una videollamada, que molestó a Sabag Montiel. “¿Otra vez hablando con este?”, rezongó.

El siguiente contacto se produjo a las 22.20, después del atentado. “Estoy yendo para tu casa”, le escribió Brenda en un mensaje al que él respondió con un llamado.

—Parece que mi pareja quiso matar a la vicepresidenta —soltó la chica en la breve conversación telefónica que mantuvieron. Lucas no

le creyó. Todavía no había encendido la televisión. No estaba al tanto de las noticias.

A poco de cortar, Brenda se comunicó con Gabriel Carrizo, el hombre de 28 años, melena negra por el hombro y cara pálida, que manejaba el grupo de vendedores de algodón de azúcar, del que formaban parte ella y Sabag. Quería avisarle dónde estaría.

Se habían conocido hacía pocos meses, pero les había alcanzado el tiempo para compartir la idea de matar a la vicepresidenta. “Hace falta que alguien vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina”, le había dicho ella el 23 de agosto en medio de una charla vinculada a lo que estaba ocurriendo en la puerta de la casa de la vicepresidenta después del alegato del fiscal Luciani.

—Sí, ¿no? —se hizo eco Carrizo.

—Sí, rehace falta —insistió ella.

La noche del atentado, Carrizo estaba reunido con el resto de los vendedores de copos de algodón de azúcar en la casa de la avenida Montes de Oca, uno de los puntos frecuentes donde se juntaban a ranchear. Estaban “los copitos” Leonardo Volpintesta, Sergio Orozco, Lucas Nahuel Acevedo y Miguel Castro Riglos. Miguel llevó la noticia de que Sabag había intentado matar a CFK; lo acababa de ver en Facebook. Volpintesta intentó comunicarse con Brenda, pero no tuvo suerte. Carrizo finalmente la llamó. Ella le dijo que estaría en San Miguel.

A las 22.26 volvieron a contactarse, esta vez por Whatsapp.

“Gabyy. Por favor, lo que pasó no lo difundan, hagámonos los pelotudos. Vos no sabés nada”, le pidió Brenda a Carrizo. Le advertía que estaban en riesgo de “caer todos en la volteada” si alguien hablaba. Ella estaba dispuesta a intentar sacar a “Nando” de la cárcel, decía. Carrizo le discutió: “Te van a investigar a vos”. Después intentó mostrarse más empático.

—Estamos todos juntos. A la mierda esa Cristina —dijo.

—No lo creo. La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano —se jactó Brenda.

Para ella el asunto no estaba cerrado.

El jefe de “los copitos” le pidió que fuera urgente a Barracas, pero Brenda le dijo que ya estaba muy lejos. “Está todo bien, chicos. Háganse los pelotudos”, insistió.

—¿Me hacés caso? Te están investigando —se enojó Carrizo. Tres veces le imploró que pegara la vuelta.

—Igual, no voy a estar en mi casa. Tranqui, no pasa nada. Gaby, te lo pido por favor. Deciles a los chicos que no digan nada del tema porque pueden caer ustedes en la volteada. Mel (un amigo en común) es boca floja —reiteró su preocupación.

—Ya saben todo, igual, lo que hizo Nando. Lo aplaudo. Estuvo a un segundo de ser un héroe nacional —se cebaba Carrizo.

—Sí, yo también. Me parece el San Martín Moderno. Él quiso liberar a un país de la esclavitud. La puta madre, ¿cómo le pudo fallar el tiro?

A las 23.30 Brenda apareció en la casa de Lucas, en la calle Mateo Bootz al 2300, en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Llegó “asustada”, describiría Ocampos días después en el juzgado. Se fue directo a la habitación, sin emitir comentarios. Apoyó la bolsa que llevaba consigo al costado de la cama, donde también dejó el paraguas, y se derrumbó sobre el colchón.

Tendida allí, agarró el celular y retomó su conversación con Carrizo. Se mostraba obsesionada con terminar lo que Sabag Montiel había iniciado. El país estaba convulsionado. Su novio preso. Pero ella seguía con la idea fija.

—¿Querés hacerlo? —le preguntó Carrizo.

—Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarla bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica, le tembló el pulso.

—Te vincularon en el caso. Te diría que vengas acá.

—¿Posta se saben mis datos? Estoy en un lugar seguro, tranqui. Ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos, que quede acá —decía Brenda con cierta ingenuidad.

—Si saliste por todos los medios. Sos la novia —como si pudiera arreglar algo.

—Sí, pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar, yo sé por qué te lo digo —comentó su plan mientras daba a entender que tenía alguna clase de protección misteriosa.

2 de septiembre

A la madrugada, en la casa de Lucas, Brenda seguía con el Whatsapp. Esta vez chateó con su íntima amiga Agustina Díaz. El atentado no era un tema nuevo en sus conversaciones. Uliarte le había contado cómo tenía pensado lograr el magnicidio.

Agustina: ¿Che, pero qué onda que falló el tiro? ¿No practicó

antes o le falló la adrenalina del momento? ¿Vos dónde estás?
¿No sería conveniente que vayas a tu casa?

Brenda: En lo de una amiga. No, boluda, andá a saber si me allanan.

Agustina: Ya le allanaron la casa —le avisa—. La puta madre. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabías lo que él iba a hacer. Y te contentaste.

“Amor de mi vida” le hablaba con terminología de tribunales. Le daba consejos.

Brenda manda un mensaje y lo borra.

Agustina: Ya también como que caés vos.

Brenda manda más mensajes y los borra. Pareciera que hablan de una estrategia de huida que no se aplicó. Comentan que mandar un flete para sacar cosas también tenía sus riesgos.

Agustina: Tengo un cagazo de que te agarren y te periten el celu (...). Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo.

* * *

Cuando ya era de día, Lucas Ocampos acompañó a Brenda hasta la plaza de San Miguel. Desde ahí, él se iría a trabajar y ella, “a Barracas, a arreglar el asunto”, le dijo. Hablarían nuevamente el domingo. Pero ya no volvería a ver a la mujer que había conocido en Facebook bajo el seudónimo de Liz Manson, con la que en agosto de 2020 había tenido ese hijo que murió a los dos meses por un paro cardiorrespiratorio.

Brenda completó el trayecto hasta Barracas sin que nadie la reconociera, aunque su cara ya se multiplicaba en las pantallas de televisión y los portales de noticias. A la noche, con una llamativa velocidad, habían comenzado a circular en redes sociales y por Whatsapp las apariciones de ella y Sabag Montiel en Crónica TV. Alguien, no está claro quién, había conectado rápidamente la cara del hombre que quiso ser asesino con la del joven del móvil de televisión. De la misma forma llegaron a Brenda, que hasta ese momento era más

conocida como Ámbar, uno de los seudónimos que usaba en el mundo virtual. Esto puso en alerta a algunos funcionarios del gobierno, que iban uno o varios pasos más adelante que la jueza Capuchetti.

Sin seguir el consejo de su amiga, Brenda no se deshizo del celular. Su estrategia para evitar que la encontraran era prender y apagar el teléfono de a ratos. Suponía que eso complicaría el trabajo de cualquier investigador que accediera a sus comunicaciones en tiempo real o que intentara rastrear por dónde había estado con el análisis del impacto de la señal de su teléfono en las antenas de la ciudad y del Gran Buenos Aires.

Era peculiar su comportamiento: se mostraba estratega, decía que sabía cómo esconderse o escapar, daba a entender que tendría recursos y, a la vez, escribía barbaridades en los mensajes que mandaba; entre ellas, que seguía pensando en matar a Cristina.

* * *

El grupo de vendedores de copos que se había juntado en Barracas esa noche decidió tirarse un lance para ver si los entrevistaban en Crónica TV. El argumento era que querían defenderse, ya que por las redes sociales los asociaban a Sabag Montiel. Fueron caminando a los estudios, pero rebotaron. Castro Riglos contaría después que les dijeron que mejor fueran a la mañana siguiente, pero que de todos modos querían “bajar la tensión” porque estaban vinculando al canal con el ataque por las entrevistas con “Nando” y Brenda.

Uliarte viajó hasta Constitución y desde ahí fue a la casa de Montes de Oca, donde la esperaban los “copitos”. “Estoy abajo”, le avisó a Castro Riglos a las 13.56. Enseguida quiso aclararles que no tenía la menor idea de lo que haría Sabag, ni sabía que tenía un arma y balas en su casa. Que en realidad no estaba siempre en el departamento que él alquilaba. A alguno le sonó contradictorio con su comentario de que se había quedado sin ropa porque se la habían llevado en el allanamiento del monoambiente en San Martín. Brenda pasaba de decir que lamentaba que la bala no se hubiera disparado a que estaba deprimida porque la atacaban por Twitter y los medios la ligaban a Sabag por las notas en tevé.

Sus visitas anteriores a Crónica también sirvieron para que comenzaran a llamarla de otros canales por ser “la novia de Sabag Montiel”. Carrizo, Acevedo, Volpintesta, Orozco y Castro Riglos estaban empeñados en que querían decir que no tenían nada que ver

con Sabag y que era pura mala suerte que les hubiera tocado de compañero de trabajo “un terrorista”. Uliarte recibió un llamado de la producción de Telefé. Le dijo a Carrizo que no quería ir. Él no quería perder la oportunidad, y propuso una entrevista grupal. Brenda aceptó esa opción. Desde el canal les mandaron dos remises a buscarlos por plaza Herrera, en Barracas, pasadas las 18. La nota se realizó a las 20, con un móvil y los periodistas Rodolfo Barili y Cristina Pérez desde el piso. El foco estaba puesto en Brenda, que se presentaba como Ámbar, igual que en las entrevistas callejeras pasadas. Le había dicho al notero que conocía a Fernando desde hacía cuatro meses, que llevaban dos trabajando juntos y uno conviviendo.

La escena era bizarra: Brenda tenía puesto un tapado de piel, una camisa negra y un gorro adherido a la cabeza que impedía ver su color de pelo. Carrizo vestía una chaqueta blanca y guantes negros, sin dedos. Ambos llevaban la voz cantante. Los demás también vestían prendas negras, algo blanco y gris.

—Ámbar, ¿cómo estás? —preguntó el cronista.

—Con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y nos están culpando de algo que no hicimos. Dicen que somos un grupo terrorista y no tuvimos nada que ver —contestó, apelando a la temática laboral, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Dijo varias veces “nos buscamos el mango, somos gente laburadora, queremos laburar”.

Carrizo, que se presentó como “Nico” —ya que Nicolás es uno de sus nombres— intercedió y dijo que habían ido a hablar porque estaban recibiendo amenazas. No se entendía muy bien, pero insistía con ese punto.

—¿Cómo te enteraste? —le preguntaron a la chica.

—Me enteré en la tevé, con mucho miedo, no pensé que iba a hacer algo así.

También le preguntaron por el arma, y otra vez dijo que no la había visto, que no estaba al tanto, que no lo imaginaba, que llevaba dos días sin verlo.

—Ninguno pensamos que iba a hacer algo así —insistió Carrizo y Brenda explicó que era el jefe.

Cuando volvieron a Barracas, el hermano de Orozco, Marcelo, estaba enojadísimo. Ya les había dicho que tenía quejas de los vecinos. Se tuvieron que ir de ahí. Se subieron al colectivo 148 y pasaron la noche en la casa de Acevedo, en Quilmes, todos menos Volpintesta.

3 de septiembre

La entrevista en televisión permitió identificar a todos los integrantes del grupo por el sistema de reconocimiento facial de la Policía Federal. De Brenda se obtuvieron datos a partir de los videos de Crónica y del número de celular que había proporcionado en ese canal, que estaba a nombre del padre. No fueron hallazgos del juzgado, sino piezas que movían funcionarios de Seguridad y de Justicia, que fueron aportando.

Una vez que todos los “copitos” se despertaron ese sábado, fueron otra vez hacia Montes de Oca. Se reunieron en una habitación, desayunaron y empezaron a conversar sobre cómo salir adelante.

De pronto, cerca de las 15.30, Brenda tuvo “una crisis emocional”—así la describiría Riglos en el juzgado—: “Comienza a sufrir depresión y dice que quiere suicidarse”.

—Me voy a pegar un tiro, no les quiero joder la vida a ustedes.

Al atardecer empezó a vomitar. Los “copitos” primero pensaron que estaba embarazada. Se tiró al suelo y su cara quedó blanca como un papel. A la noche Carrizo, Acevedo y Riglos decidieron llevarla al hospital Fernández. Al salir de la casa se desmayó. Llamaron al SAME, pero les dijeron que había tres horas de demora, según lo que declararon ante la justicia. La subieron entre los tres al colectivo 102. En el Fernández les informaron que no tenían el aparato necesario para hacerle estudios por posibles “piedras” o cálculos. Carrizo creía que tenía una infección urinaria. La llevó al hospital Rivadavia, donde les anunciaron cuatro horas de espera. Así, volvieron a Barracas.

4 de septiembre

El juzgado de Capuchetti había mandado policías a Montes de Oca para realizar tareas de inteligencia. Interveníá el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA). El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, le pedía por favor que allanara la casa. En el gobierno creían imperioso detener a Brenda. Los agentes decían que no tenían certeza de que estuviera allí. Pese a que la chica prendía y apagaba su celular, la antena volvía a impactar en la zona. El radio de cobertura era de unas pocas cuadras y resultaba difícil creer que estuviera en otra parte. Pero la magistrada se negaba a requisar el domicilio con un criterio garantista llevado a niveles absurdos, completamente atípicos en Comodoro Py.

Remarcaba que si Uliarte estaba en ese sitio, no se iba a escapar porque, justamente, la estaba vigilando la Policía Federal, quizá su fuerza de seguridad predilecta por tradición familiar.

Ese domingo, Capuchetti ordenó intervenir el celular de Uliarte para hacer escuchas directas. Habían pasado cuatro horas, pero ningún policía había ido a sentarse al box correspondiente para hacer el seguimiento. Un empleado del juzgado se comunicó con la DUIA para preguntar qué novedades había de la escucha. Ahí se dieron cuenta de que la línea todavía no había sido pinchada.

Brenda se había despertado en la casa de Montes de Oca y estuvo ahí al menos hasta las 19.17. Sergio “Checho” Orozco la acompañó a tomar el tren a la estación Retiro. Le dijo que se quedara tranquilo, que tenía dónde ir, pero debía viajar. Uliarte salió de la casa lo más campante, sin que ningún policía se diera cuenta. Después dirían que se había cambiado el color de pelo y por eso no la reconocieron. Todo sonaba ridículo a esa altura. Pero estaba ocurriendo. Era una calamidad.

Cuando finalmente el error fue enmendado e interceptaron la línea, la DAJuDeCO (la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), el organismo que realiza las escuchas, notó que el celular de Brenda revelaba que se estaba moviendo. De pronto, vieron que su antena impactaba en Avenida de los Inmigrantes. Un secretario letrado del juzgado, Federico Clerc, dedujo que podía tratarse de la terminal de Ómnibus de Retiro y fue hacia allí. Pero no la encontraron. Entonces, supuso que podría encontrarse al lado, en la terminal de trenes. Recién salía uno de la línea San Martín. El GPS del celular determinó que efectivamente estaba ahí, rumbo a la provincia de Buenos Aires. Clerc, de 24 años, ordenó que la formación se detuviera en cuanto llegara a la siguiente parada, Palermo, y que nadie descendiera de ella.

Dos oficiales mujeres que participaban de la investigación fueron las primeras en llegar. Varios móviles policiales y el secretario Clerc iban en camino. En una primera recorrida, las oficiales no la identificaron. En una segunda pasada, a una de ellas le llamó la atención que, mientras todos los pasajeros curioseaban para saber qué buscaban, una mujer joven miraba por la ventanilla del tren hacia el exterior, abstraída de la situación, o aparentando estarlo, con la cara cubierta. Llevaba el pelo anaranjado y largo, una mochila, suéter gris con rayas negras, pantalón de jogging bordó y zapatillas blancas.

La oficial se le acercó y le preguntó si su nombre era Brenda. Uliarte asintió. Le pidieron que bajara del tren, la requisaron, la palparon y la esposaron en el andén. Ya era de noche.

Ese día, previo a su detención, Brenda hizo un extraño vivo en Instagram, con la cara aplastada contra lo que parecía una almohada o una manta. Lanzó frases como: “No hay reconciliación con los corruptos. No, chicos. Basta de corrupción, sea de quien sea, de cualquier bando político. Basta de corrupción. De cualquier país, de donde sea. Basta de corrupción”. “Lo que dijo Milei, que los políticos no tendrían que tener más derechos que los civiles, es cierto. Estoy muy de acuerdo”, agregó. Leía preguntas de la gente. Aclaró que no le manejaba las redes a Sabag. “No éramos tóxicos”, dijo. Un comentario del público sobre el arma que había empuñado su novio decía: “El chorro de agua se vio claro”. Ella contestó: “Sí, tal vez era una pistola de agua. ¿Quién sabe?”.

* * *

Ya esposada, la trasladaron a la sede de la Policía Montada, en la calle Cavia, en el barrio de Palermo. Allí también estaba detenido Sabag Montiel. Al ingresar, no se la veía preocupada. Miraba a los policías a los ojos. Le sacaron la fotografía de rigor. Posó con las manos en los bolsillos del pantalón. Le tomaron las huellas dactilares y aguardó su destino en el Casino de oficiales del edificio, que funciona como comedor. Le preguntaron dónde había pasado la noche y respondió que había estado en la casa de un exnovio.

A diferencia de Sabag Montiel, con el paso de las horas, Uliarte comenzó a entender la magnitud de su nueva situación. Pero trataba de pensar que la explicación de que solo había acompañado a su novio a Recoleta, sin saber lo que iba a hacer, podía ser convincente.

—Me cagué la vida, ¿no? —le dijo a un interlocutor en esa sede policial.

6

El día después

—Hola, doctora, ¿cómo le va? —le tendió la mano CFK a la jueza Capuchetti, que acababa de entrar a su casa, con traje negro y tacos altísimos y finos. Eran las 11 de la mañana del día posterior al atentado.

—Hola, Cristina, ¿cómo estás? —sorprendió la magistrada al tutearla. Estaba acompañada por su secretario Federico Clerc, que cargaba un maletín blanco. La vicepresidenta lo saludó con un comentario sobre lo joven que lo veía. Era el mismo que dos días después mandaría a detener un tren para evitar la huida de Brenda Uliarte.

—Usted es Rívolo —miró al fiscal, cuyo nombre tantas veces había escuchado.

—Sí, yo soy Rívolo —le dio la mano.

Capuchetti y parte de su equipo habían pasado la noche sin dormir, igual que los secretarios de Rívolo, quien, al llegar a la madrugada, propuso tomarle declaración testimonial a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio lo antes posible, y aprovechar la visita para realizar una inspección ocular en la zona. Acordaron el horario con Mena, que también había trasnochado en Comodoro Py. El comisario Ñamandú acompañó al equipo judicial hasta el departamento, en el barrio de Recoleta. Allí, atravesaron dos puertas hasta llegar donde aguardaba la vicepresidenta.

La declaración transcurrió alrededor de una amplia mesa de vidrio del comedor. Cristina se ubicó en la cabecera. La jueza y el joven secretario, a su derecha, y a la izquierda el fiscal. Por decisión de Capuchetti, la dejarían hablar sin interrupciones. En un rincón del living, alejados, quedaron Mena, el jefe policial y el secretario de CFK, Diego Bermúdez.

Capuchetti hizo una introducción formal y luego Cristina, como víctima, empezó su relato, que fue transcrito textual en el acta:

Cuando vine acá, luego de salir del Senado, la gente me estaba esperando a la salida de casa, con cánticos, apoyo y libros para firmar. Cuando bajo, hago un trayecto y la gente se forma en un semicírculo en la calle Juncal. Yo comienzo a caminar, saludo a la gente y muchos de ellos traen libros para que se los firme. Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro. Es la primera vez que me pasa desde que presenté el libro. Nunca me pasó que me revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho para agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona. Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar. Luego, termino el círculo, firmo unos libros más y entro a mi domicilio. Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido. Ahí me empiezo a enterar (de) lo que había pasado, que esta persona es brasilero y seguí obteniendo información de esa manera, es decir, a medida de lo que iba surgiendo.

La jueza consultó si alguien quería realizar alguna pregunta, y el fiscal asintió.

—Al momento del tumulto, ¿escuchó algún comentario del círculo de la custodia que le indicara alguna actividad a seguir?

—En ese momento, personal de mi custodia me dijo “vamos, vamos” porque me quería alejar del tumulto y ahí terminé el círculo, firmo los últimos libros y subo. Reitero: solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión —así concluye el testimonio.

La inspección ocular pretendía verificar cámaras de seguridad de la zona que tuvieran registros, para reconstruir lo sucedido (se detectaron 32), el punto exacto del intento de magnicidio y otros detalles del lugar que pudieran ser útiles. La cuestión de las cámaras cercanas a la casa de CFK había sido un punto de fricción en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri. En julio de 2016, la Policía Federal, al mando de la ministra Patricia Bullrich, puso un domo de 360 grados y una cámara pequeña llamada “pinhole”, exactamente en la puerta de su casa. Así lo denunció CFK en las redes

sociales y mandó sacarlas. Para ella, era una evidente señal de que la querían observar. La historia del espionaje sobre Cristina tiene su relevancia en esta trama porque corrió en paralelo con la multiplicación de causas judiciales en su contra.

En noviembre de 2018, cuando todavía el macrismo estaba en el poder, la vicepresidenta denunció otro intento de vigilarla con cámaras en la cuadra de su casa. Ese año, con la excusa de que la reunión del G-20 (un foro internacional de coordinación económica y financiera) se hacía en Buenos Aires, fueron espiados propios y extraños, utilizando como pantalla expedientes judiciales. Tres meses antes, “Jirafa”, el militante que la cuida y que trabaja en el Instituto Patria, descubrió que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espiaba a la institución. Un día, a la noche, “Jirafa” salió del edificio y vio un auto solitario, estacionado en la cuadra, con gente a bordo. Era un Renault Megane celeste metalizado. Se subió a su camioneta, encendió las luces para iluminarlo y enceguecer a quienes se encontraban dentro y les sacó una foto. Se la pasó a un compañero suyo, quien confirmó que se trataba de un auto de la AFI. Días después apareció otro vehículo, un Volkswagen Voyage Gris con vidrios polarizados, otra vez con dos hombres adentro. Les avisó a los agentes de la policía porteña que custodiaban la cuadra. Se acercaron al auto y, a su regreso, le dijeron con franqueza: “Che, son de la AFI, nos dicen que están caminando a alguien”. Fue parte de una denuncia penal, que dio pie a una causa judicial, que confirmó los seguimientos fuera de la ley, y hasta julio de 2023 no había llegado a juicio oral.

Más allá de las cámaras removidas y del temor por la posible falta de registros de videovigilancia que sirvieran de prueba, la Policía de Seguridad Aeroportuaria entregó al juzgado un informe con imágenes de buena calidad donde se ve el arma de fuego apuntando a la cabeza de CFK y otras de Sabag Montiel al ser atrapado por manifestantes.

* * *

Al mediodía del 2 de septiembre, cuando Cristina terminaba de dar su testimonio, empezaron a concentrarse cientos de manifestantes en la avenida 9 de Julio, para marchar a Plaza de Mayo. Luego fueron miles. Había fotos de ella por doquier. Carteles caseros que remarcaban que era una marcha “por la democracia”: “Cristina no se toca”, “El amor vence al odio”, “Cristina es a prueba de balas”. Llegaban columnas de organismos de derechos humanos, sindicatos,

pueblos originarios, organizaciones sociales, feministas, distintos sectores del Frente de Todos y el peronismo. El aroma a choripán lo inundaba todo y había cierto paradójico clima festivo, que se produce cada vez que el pueblo —particularmente en Argentina, donde hubo 30 000 desaparecidos en la última dictadura cívico-militar— sale a poner un límite al horror. Se vivió algo similar en 2017, cuando una multitud protestó en las calles ante el intento de la Corte Suprema leal a Macri de liberar genocidas con el fallo conocido como el “2 × 1”. Esta vez expresaron su repudio al atentado desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta la Unión Industrial Argentina (UIA), también Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, pero señalaron que no acordaban con el feriado. Las movilizaciones se multiplicaron en la mayoría de las provincias.

La Corte Suprema de Justicia, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, también sumó su repudio. En su mensaje destacaba el “compromiso de la Justicia para esclarecer este lamentable hecho”. Después se tomó casi tres meses para autorizar refuerzos para el equipo de la jueza Capuchetti. Le otorgó tres nuevos contratos con fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2023. El pedido de la jueza tampoco había sido expeditivo: esperó tres semanas desde el inicio de la investigación del atentado y, cuando lo presentó, planteó que su problema era que tenía muchas causas complejas y de alto impacto político, entre las cuales citó la del intento de magnicidio como una más. Habían querido matar a la vicepresidenta, pero era tratado como un caso más del montón.

En un escenario enorme, montado delante de la Casa Rosada, estaban la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; funcionarios como Juan Manzur (jefe de Gabinete), Sergio Massa (ministro de Economía), Horacio Pietragalla (secretario de Derechos Humanos) y Jorge Taiana (ministro de Defensa); sindicalistas como Roberto Baradel (secretario general de SUTERBA provincia) y Héctor Daer (secretario general de la CGT); Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, y gobernadores como el bonaerense Axel Kicillof y el chaqueño Jorge Capitanich, entre muchos otros. Se veía gente asomada desde la terraza de la Casa de Gobierno, como el canciller Santiago Cafiero.

La convergencia de sectores tan diversos daba fortaleza al repudio colectivo. Acordaron un documento al que la DAIA (Delegación de

Asociaciones Israelitas Argentinas) no quiso adherir porque le parecía un “alegato político partidario”.

La actriz Alejandra Darín, presidenta del Sindicato de Actores y Actrices, leyó el texto al atardecer, mirando hacia la plaza repleta. Ponía en primer plano un problema al que tal vez no se le había dado suficiente dimensión, y mucho menos a sus posibles derivaciones. El texto era una interpelación para “cuidar el consenso democrático construido desde 1983”.

“Desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia y sus medios partidarios repiten discursos de odio, de estigmatización y criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo y cualquier simpatizante”, se plantó Darín ante la multitud con su pelo entrecano atado, jeans gastados y un tapado negro. El texto aludía a las marchas violentas con bolsas mortuorias, ataúdes y guillotinas que habían comenzado a recrudecer a partir de la pandemia del Covid-19. “No es gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión”, advirtió. “No hay manera de relativizar o minimizar un intento de magnicidio”. La lectura de Darín terminaba así: “El pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo. En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional, pero no a cualquier precio: el odio afuera”.

La palabra “odio” —que alude a discursos que apuntan a estigmatizar o destruir— fue motivo de discusiones cuando se reunió la Cámara de Diputados para aprobar un texto de rechazo al intento de asesinato y pedido de pronto esclarecimiento. Hasta que no se eliminó ese término, la oposición se negó a votar. Finalmente se aprobó un repudio por unanimidad. Una semana más tarde, el 8 de septiembre, el Senado aprobó su propio repudio: lo hizo con los votos del oficialismo y aliados, y sin la presencia de la oposición en el recinto.

* * *

Alberto Fernández volvió a llamar a Cristina ese día y le dijo que iría a verla, algo que ocurriría cerca de las 14 horas.

En la mañana, ella había recibido un llamado del papa Francisco para solidarizarse. También le mandó un telegrama que decía: “Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos contra todo tipo de

violencia y agresión”. Enviaron su repudio también los mandatarios de toda la región.

Al presidente le costó llegar a la puerta del edificio de CFK. Le hicieron dar una vuelta con el auto oficial para que no cayera en el embudo de policías, medios y militantes que seguían ahí. Debía entrar en contramano, pero se topó con una valla. Para colmo, ya más cerca de la entrada había una faja enorme de color naranja con letras negras que decía: “No pasar PFA. Escena del crimen”.

Cuando por fin llegó, la abrazó y se quebró al instante. Se le escaparon unas lágrimas. Ella se esmeró en tranquilizarlo. Lo tomó de la mano.

—Vamos a cuidarnos —le dijo la vicepresidenta.

Hablaron de algo vital para ella en su vida política y que el atentado venía a arrebatarle, o la obligaba a replantear: el contacto con la gente, la cercanía física, la mirada a los ojos, la conexión directa con el calor de la militancia. Néstor Kirchner había hecho un culto de esa proximidad.

El oficial que operativamente estaba a cargo de la custodia el día del intento de asesinato, Guillermo Gallo, declaró en los comienzos de la investigación judicial que quería dejar “expresa constancia (de) que la forma de trabajo y profesionalismo del cual estamos totalmente capacitados a realizar, y a solicitud de los secretarios de Cristina y de la mandataria, no se nos permite realizar el diagrama de cobertura de 360 grados debido a que ella solicita el contacto con la militancia constantemente”. Por jerarquía, quien estaba al frente de la estructura de protección era el comisario Jorge Vicente Pellegrino, se limitó a describir en su testimonio.

La Policía Federal abrió sumarios internos por las eventuales responsabilidades o ineficacia de los seis integrantes de la custodia que estaban esa noche. También, por las increíbles fallas en la investigación posterior: el reseteo de fábrica del celular de Sabag Montiel y lo que pudo haber sido la fuga de Brenda, ya que los agentes de la Unidad de Investigación Antiterrorista que la vigilaban no hicieron nada cuando salió de la casa de uno de los “copitos”. Cerca de cumplirse un año del hecho, esas investigaciones administrativas aún no habían concluido.

Con respecto a la custodia, era controvertido acusarla teniendo en cuenta las características de las manifestaciones de esos días y lo que pedía la vicepresidenta. Además, era un hecho difícil de prever por

una combinación de factores. Por un lado, ni las fuerzas de seguridad ni el Poder Ejecutivo llegaron a captar cabalmente la gravedad de la proliferación de grupos extremistas y violentos que diseminaban consignas de muerte y cancelación, que se potenciaban con discursos del mismo tenor de dirigentes políticos. No se trataba de mensajes inocuos. Algunos juristas y criminalistas consideran que son discursos capaces de atraer o hacer sentir convocados a personajes neuróticos, deseosos de convertirse en héroes, saltar a la fama y salvar a la humanidad (pues creen tener esa misión), incluso a costa de perder su propia vida o pasar años en prisión. Uno de los primeros que lo explicó en esos términos, después del atentado contra CFK, fue Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Se trata, dijo, de personalidades “borderline”, un trastorno que se ubica entre la neurosis y la psicosis. “Son neuróticos muy graves, sujetos que creen en su propia megalomanía”. No necesariamente participan de esos grupos que los inspiran. Pero no son “locos sueltos” desconectados de un contexto político y de financiamiento de grupos de choque. Aunque por esta última teoría, la de los “loquitos sueltos”, se terminaría inclinando el juzgado de Capuchetti. Eso le permitiría esquivar la búsqueda a fondo de terminales políticas y financieras del atentado a la vicepresidenta.

“Lo que pasó —analizó el jurista— es el resultado del ‘ellos o nosotros’, es la destrucción del sentimiento de comunidad”.

“Son ellos o nosotros” fue la frase que había tuiteado el dirigente Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), un aliado de Patricia Bullrich. El posteo fue al atardecer del día en que el gobierno porteño colocó el vallado en la cuadra de Cristina, y que Rodríguez Larreta usó para habilitar a su policía a sacar como fuera a los kirchneristas de la zona. Lo dicho por López Murphy no era precisamente un llamado a comprender la diversidad política, sino a la exclusión por la fuerza. Ese sábado 27 de agosto, tras la polémica desatada por la colocación de las vallas, Macri escribió en sus redes: “La responsable de este desborde y alteración a la paz es CFK, que nuevamente atropella las instituciones, creyéndose por encima de la ley. Se victimiza para promover el caos”.

“Con el kirchnerismo no se habla, no se dialoga ni se negocia. SE LO COMBATE”, escribiría el 29 de agosto Ramiro Marra, legislador y luego precandidato a jefe de Gobierno de La Libertad Avanza (el partido de Javier Milei), en su cuenta de Twitter. Ese día, López

Murphy insistiría: “Son ellos o nosotros. Es orden o es caos (...) tenemos el deber de enfrentarlos sin vacilaciones, por la libertad”. Larreta tuiteaba que Cristina quería arreglar sus problemas judiciales con la gente en la calle. El último día del alegato de Luciani celebraba “cómo avanza el proceso judicial por la obra pública en el gobierno kirchnerista” con “pruebas contundentes”, que no especificó. Ahí avisó que mandaría a sus efectivos a “cuidar” a los vecinos. La sumatoria de todos estos mensajes, en redes sociales, portales y otros medios, ilustra parte del mecanismo de la denominada “violencia mediática” que se puso en funcionamiento, haciéndose eco de ese discurso político.

Después de escuchar a Luciani, el diputado del PRO Francisco Sánchez pidió pena de muerte para CFK. Pocos registraron que después se arrepintió, porque su idea original ya había circulado demasiado. “Exterminar al kirchnerismo”, definición de Milei, o “terminar para siempre con el kirchnerismo”, frase de Larreta, son expresiones que se instalaron en el repertorio de la derecha. Los grupos ultraviolentos más nuevos, algunos de ellos referenciados en dirigentes de ese sector, directamente empezaron a pedir “matar”. Tiempo después, la propia Fernández de Kirchner señalaría que esa literalidad puede rastrearse en la historia argentina en hechos como el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955, protagonizado por la Fuerza Aérea, que pretendía matar al presidente Juan Domingo Perón; en el atentado en Plaza de Mayo, en 1953, durante un acto de la CGT y mientras Perón hablaba desde la Casa Rosada; en los fusilamientos de civiles en José León Suárez en 1956; en la última dictadura cívico-militar iniciada con el golpe de Estado de 1976.

La violencia, es evidente, tiene responsables políticos y económicos. Está movida por intereses. Cristina cree, desde ese ángulo, que es imposible pensar su intento de asesinato sin una planificación y un financiamiento. Sin algún “cerebro”, probablemente vinculado con los agitadores del odio, movidos por la intención de borrarla de la vida política. No subestima el crecimiento de grupos de ultraderecha y odiadores dispuestos a eliminar al otro, que, por cierto, desaparecieron de la vida pública después del atentado. Pero no le alcanza como explicación.

* * *

Ese viernes 2 de septiembre, a la hora del té, la vicepresidenta salió de su casa. Se la vio con un suéter rosa, pantalón de cuero, anteojos

negros y un rosario. Los integrantes de su equipo, que la noche anterior habían visto cómo intentaron matarla, estaban desbordados de nerviosismo. Los colaboradores de CFK miraban para todas partes en su afán de cuidarla. Ella, sin embargo, no mostraba ningún temor. Tan pronto como puso un pie en la calle, esbozó una sonrisa y levantó una mano para saludar a los y las militantes que permanecían allí. Sus asesores respiraron aliviados. El fin de semana lo pasó en un campo en Mercedes. El lugar parecía una fortaleza, pero prefería recluirse allí al menos durante dos días. Habían suspendido un congreso del Partido Justicialista en Merlo, convocado para ese sábado, donde estaba previsto que ella hablaría.

Al comenzar la semana, volvió al Senado, donde tiene su despacho como presidenta de ese cuerpo. Ahí fue a verla Diego Carbone. La tarea de Carbone era diseñar la estrategia y la estructura de las custodias. No estaba con Cristina de modo permanente; se desplazaba con ella frente a eventos puntuales. Se había preparado toda la vida para prevenir lo que no logró evitar, y que por muy poco no fue una tragedia. Llevaba veinte años trabajando con los Kirchner. Cuando llegó el gobierno de Macri prefirió quedarse con ella, ya que existe una división de custodia de exmandatarios. Con la presidencia de Alberto Fernández, asumió la seguridad vicepresidencial y la de Jefatura de Gabinete, Ministerio del Interior y reparticiones como Pami, Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Esa mañana fue a ver a la vicepresidenta con la idea de que toda su carrera podría terminar en ese instante. Apenas ingresó a la oficina y la vio cara a cara, Carbone se largó a llorar como un niño. No podía parar. Ella lo abrazó. Él le pidió disculpas.

—La culpa fue mía, nuestra. Yo me relajé y los hice relajar a ustedes —hizo Cristina su autocrítica.

Él le confesó que sentía que le había fallado.

—Si no confiara en vos te hubiera dado una patada en el traste hace mucho. Borrón y cuenta nueva —le devolvió ella.

Durante algunos meses, el primer piso de la Cámara Alta estuvo colmado de policías federales, y prácticamente nadie podía pasar. Al principio, uniformados; pero a la vicepresidenta le chocaba esa presencia dentro del Congreso: se resolvió con una guardia menor y de agentes de civil. Se fijaron controles diarios para detectar la presencia de explosivos. La vicepresidenta se mudó de Recoleta a Constitución.

Su reaparición en un evento del Senado fue “con curas villeros, curas en opción por los pobres y hermanas religiosas y laicas”. Fue el 15 de septiembre, y el senador Oscar Parrilli se ocupó de los detalles. “Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen”, dijo allí. Y por la militancia. “Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983”. También confesó que se había vuelto “un poco mística”.

Su participación en un acto masivo demoró más. El primero pos atentado fue un plenario en Pilar de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cargado de expectativas, el 4 de noviembre. Se utilizó un formato de charla, con el público a cierta distancia, y refuerzos para su seguridad, pero había resistencia por parte de ella: si Carbone quería subirse al escenario para estar más cerca, CFK le hacía un señá enfática con la mano para que se fuera.

“Después de algunas cosas, no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores”, comenzó. Habló de economía, distribución del ingreso, de la relación precios-salarios. Generó ilusión para quienes tenían ya la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2023, y dijo que haría lo que tuviera que hacer para que el pueblo recupere la alegría. Habían pasado dos meses desde el atentado y apuntó a dos cuestiones ligadas a la investigación penal. Una, que el Poder Judicial es eficaz para investigarla, pero no cuando ocupa el rol de damnificada. “Me quieren de acusada, no de víctima”, dijo. La otra, pidió prestar atención a la organización Revolución Federal, que en el último tiempo había protagonizado violentos escraches contra dirigentes políticos, en su mayoría oficialistas. “No estaban enojados con la política —aseguró—, recibían millones para hacer eso”.

“Quiero a Luciani”

—Quiero a Luciani —exigió Sabag Montiel frente a la jueza y el fiscal. Lo quería como abogado defensor, pero tuvieron que explicarle que Diego Luciani tiene la función de acusar, no de defender. Comprendía el concepto, pero no le importaba.

Desde Recoleta, había sido trasladado a la madrugada al Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal, conocido como “Cavia” porque está ubicado en la calle Cavia al 3300, en el barrio de Palermo. Le tomaron la indagatoria ahí mismo, por la tarde, para evitar moverlo a otra dependencia y dejarlo expuesto a los móviles de televisión y los fotógrafos que hacían guardia en la puerta. También, por cuestiones de seguridad: trasladarlo habría implicado un megaoperativo. Cuando llegaron la jueza y el fiscal, estaba durmiendo sobre un colchón viejo y sucio, en un pequeño calabozo individual. Tenía la misma ropa con la que había sido detenido (remera negra con detalles blancos, jean roto y zapatillas), menos la campera de cuero, que se la habían quitado, junto con el cinturón. Un oficial lo despertó y lo condujo a un pequeño cuarto con rejas, para que se entrevistara con el defensor oficial que le había tocado, Juan Martín Hermida, a quien había visto ya a la madrugada. El letrado trató de explicarle que era conveniente que se negara a declarar. “Quiero a Luciani”, reclamó.

De ahí fue llevado a una sala de reuniones, donde le quitaron las esposas y lo sentaron a un lado de una mesa tan grande que quedaba alejado de Capuchetti, Rívolo y los secretarios Federico Clerc (del juzgado) y Javier Fontela (de la fiscalía), que estaban frente a él. En uno de los extremos se había ubicado el comisario Carlos Ñamandú, que también había permanecido a un costado durante la declaración testimonial de CFK.

El hombre de los tatuajes quería hablar. Solo de algunas cosas, pero quería hablar. Se tomaba la indagatoria como una conversación cualquiera, sin reglas ni formalidad, y trataba de meter un bocadillo

cada vez que encontraba un resquicio. La severidad de los cargos que leyó el secretario Clerc parecía no provocarle ningún sentimiento. El funcionario enumeró: “Haber intentado dar muerte a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner”; haber llevado el arma de fuego con la que apuntó a su cara; carecer de “autorización legal” para portarla y usarla, además de que tenía “la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura”, y “haber acopiado dos cajas de municiones con la denominación Magtech”, con 50 cartuchos cada una, que fueron halladas en su casa.

Sabag Montiel, en cambio, empezó a inquietarse ante la lectura de la lista de pruebas acumuladas en las pocas horas que habían pasado. En el punto en que Clerc mencionó que se había pedido información a empresas de telefonía, entre ellas Movistar, y registros de la compañía Uber, el detenido lo cortó. Quería hacer aclaraciones sobre eso. Estaba obsesionado. El secretario le pidió que terminara de escuchar la lectura del acta, que incluía el detalle de las evidencias comprendidas en las 2159 fojas acumuladas en las primeras horas de investigación. Cuando le dieron la palabra, le remarcaron que podía negarse a declarar, optar por hacer una declaración general o responder preguntas concretas de la fiscalía, el juzgado y su defensa.

Dijo que quería declarar. Su abogado se llevó la mano a la frente, en un gesto de desesperación. Pero lo único que quería su defendido era seguir con acotaciones: que nunca había usado líneas de Movistar, y que nunca había sido chofer de Uber, sino que era propietario de dos autos que usaba como remises y que ya no estaban en circulación.

—Debe atenerse a declarar sobre los hechos. La defensa supervisará la prueba —lo frenó Rívolo con severidad.

Hermida trató de explicarle que una consulta a una empresa de telefonía, dentro del expediente, no quería decir nada en sí misma, e incluso le comentó que todavía, como defensor, no conocía la prueba que le habían enumerado. Por eso buscó que entendiera de todas las maneras posibles que era mejor que en ese momento no declarara.

Sabag amagó, igual, con avanzar en un relato, lo que aumentaba el nerviosismo de Hermida. Comenzó describiendo su trayecto hasta lograr acercarse a Fernández de Kirchner, mezclado entre la multitud. Pero cuando se aproximaba el momento de hablar de cómo apuntó con la pistola Bersa hacia la vicepresidenta y gatilló sin éxito, se desvió y cambió de tema. No dio precisiones sobre su motivación para intentar matarla. Ni sobre el instante exacto del fallido disparo. Su

último fracaso.

—Por el momento, me niego a declarar —dijo, finalmente, para alivio del defensor oficial.

Pero siguió hablando y volvió con sus preocupaciones y reclamos.

—Quiero aclarar que el barbijo que dijeron que me secuestraron no era mío —señaló Sabag Montiel.

Luego pidió que vieran las cámaras para constatar que lo habían golpeado. Su defensor solicitó que lo revisara un oftalmólogo.

Todavía faltaba algo crucial. Preguntarle si aportaría la contraseña de su celular.

—Por el momento, no.

* * *

En el grupo de los vendedores de copos de azúcar, a Sabag Montiel lo llamaban “vende humo”. Cuando hablaban a sus espaldas, comentaban que lo veían como un “soberbio” y que buscaba ser famoso de alguna manera. Era evidente que algunos no lo aguantaban. Otros decían que era un inseguro, que quería captar la atención de los demás.

Esa forma de describirlo, propia de charlas cotidianas, tenía puntos de conexión con lo que vieron en él quienes le hicieron el primer examen médico legal, que incluía aspectos psíquicos. Fue ese 2 de septiembre a las 4.30 de la madrugada, al rato de llegar a “Cavia”. Le diagnosticaron “presencia de ideación mística con tendencia a la megalomanía”. La definición, en términos más sencillos, alude a una persona que cree tener contactos con Dios o alguna divinidad, o que es portador de una misión salvadora, y que —además— tiene delirios de grandeza, de poder y una enorme vanidad.

El informe decía que mostraba “ideas delirantes con temas hipocondríacos”, como que padecía “arteriosclerosis” por haber fumado tabaco armado durante dos meses. Se sentía víctima de robos y maldades de personas cercanas. Las médicas legistas de la Policía Federal le atribuyeron “asociación de ideas anormal”, pensamiento disgregado y un discurso difícil de entender, por más fluido que hablara. Señalaron que no tenía conciencia de la situación. Anotaron que estaba “desaseado”, o sea, sucio y desalineado.

Casi en simultáneo, en la provincia de Buenos Aires, tres agentes de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal allanaban el monoambiente que Sabag alquilaba en Uriburu 727/9, en la localidad

de San Martín. El dueño del departamento había ido corriendo a la comisaría de la zona cuando vio en las noticias que su inquilino era quien había intentado matar a la vicepresidenta. Se encargó de abrirles la puerta a los policías apenas llegaron. Al ingresar, lo primero que observaron fue un pequeño baño a la izquierda y muy cerca, un placard de madera blanco. Apenas lo abrieron, encontraron las dos cajas (una dorada y otra azul con dorado) con municiones “Magtech” y cien cartuchos intactos. Eran las mismas que él había fotografiado. Se llevaron una notebook, plantillas de tatuajes, tarjetas (Mercado Pago, débito, SUBE) de él y de Brenda Uliarte. Los agentes no revisaron demasiado.

Cinco días después, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó a cabo un nuevo allanamiento y sus efectivos hicieron un relevamiento de todo lo que veían. Habían quedado muchas cosas ahí adentro. Las remeras y suéteres eran casi todos de los mismos colores: negro y dorado, más algo de rojo. Los pantalones tenían colores más variados. Había uno camuflado, tipo militar. Encontraron un disco rígido, cuatro celulares viejos con algunas roturas o sin pantalla, papeles de estudios médicos tanto de Fernando como de Brenda, un currículum de ella, un papel de rechazo a la vacuna contra el Covid-19, un documento de identidad auténtico de un hombre llamado Francisco Antonio Almada, anillos, pulseras, un reloj, un carnet de vacunación y un chupete que habrían pertenecido al bebé que la chica perdió, además de una gasa con restos biológicos.

* * *

La descripción del lugar donde vivía Sabag (y al que Brenda se había mudado), tal como se encontraba al ser allanado, complementa una pericia psiquiátrica que se le realizó a comienzos de noviembre. Las y los investigadores encontraron tanta ropa tirada que casi no se podía ver el piso (parte, quizás, producto del primer allanamiento). Entre la maraña había un oso de peluche y calzados de distinto tipo. En la cocina, tipo kitchenette, había ollas con restos de comida llenas de hongos y mal olor. En ese rincón guardaba libros con temáticas relacionadas entre sí: *Simetría y supersimetría*. *Orden y equilibrio en las leyes que describen el universo*, *Universos paralelos*, *Universo holográfico*, *La posibilidad de viajar en el tiempo*, *La flecha del tiempo*. Ahí mismo había cajas de medicamentos. En el baño, el lavatorio estaba desprendido de la pared y el inodoro tenía líquido amarronado. La

cama de dos plazas, tipo sommier, estaba sucia y manchada, sin sábanas. La heladera tenía la puerta rota. Había bolsas adentro y alimentos podridos. En la parte de arriba se veía un rosario de material similar a la madera. El parte de la inspección daba cuenta de un lugar nauseabundo que olía a pis de gato.

El estudio más profundo sobre Sabag estuvo a cargo de seis profesionales (dos psiquiatras y cuatro psicólogas). Se prestó a las entrevistas y dejó ver sus rasgos. El equipo concluyó que se trataba de una “personalidad anormal” con “rasgos de trastorno narcisista”. Señalaron un “patrón dominante de grandeza”, “necesidad de admiración” y “falta de empatía”. Otras palabras y frases que usaron para definirlo fueron: vanidad, grandilocuencia, tendencia a la exageración, fabulación, escasa autocrítica e indiferencia afectiva. Se jactaba de su fama por haber salido en televisión y creía que le sería útil. Lo notaron manipulador, en la charla misma, y con escasa capacidad de reflexión pese a sus intentos por mostrar elaborados razonamientos. Lo pescaron mintiendo en pavadadas, como cuando dijo que hablaba tres idiomas. Le pidieron ejemplos y enmudeció.

Las especialistas advirtieron que era alguien “influenciable”, cuya “personalidad psicopática” explica su falta de miedo y búsqueda de aventuras: así como puede ser victimario o infractor, podría ser víctima.

A la hora de hablar de su salud física y mental, dijo que nunca padeció depresión. Solo se sintió triste por alguna ruptura amorosa. No quiso profundizar. Pero volvió a hablar sobre las enfermedades que está convencido que tuvo: en 2021, un dolor en el pecho y un malestar que lo dejaron postrado, todo agravado por “un accidente isquémico”. En enero de 2022 relató que fue a Rosario, provincia de Santa Fe, a ver a un sacerdote, el Padre Ignacio, y dijo que lo curó con solo tocarle el pecho. Lo mencionó con convicción. Cuando las especialistas tradujeron todo, al aspecto hipocondríaco le agregaron “ideas de carácter mágico”.

Se refirió a sus padres. A su papá, dijo que lo había encontrado por Facebook. No tenía contacto desde muy chico. “Era pesadito, loco y chorro, golpeador y drogadicto”, lo pintó. “La pérdida de mi mamá fue normal. No lloré jamás. Soy muy frío”, agregó. A sí mismo se describió como una persona “tranquila”, “valiente” y “no materialista”.

Dejó claro que no tenía preocupación por los hechos que le

imputaban ni por las limitaciones propias de estar preso. “Estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar”, dijo. Por un tiempo, siguió con la fantasía de que un sector de la sociedad lo aplaudiría, pediría por él y lo salvaría, en especial porque lograría la condena de Cristina Fernández de Kirchner. “Odio la política”, espetó.

Esquivó, una vez más, detalles sobre su intento de magnicidio.

—No sé tirar —respondió cuando le preguntaron sobre su relación con las armas. Incluso dijo que no tenía ninguna.

Un video extraído de la tarjeta de memoria de su celular mostraría cierta deficiencia de su parte al manipular el arma que le fue secuestrada: se lo ve llevar la corredera hacia atrás para luego acompañarla hacia adelante en lugar de soltarla.

“Logré no ser hipócrita a base de mentiras”, había sorprendido previamente, en las mismas conversaciones.

Las conclusiones del informe fueron taxativas: “Al momento del hecho, el sujeto ha podido comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.

* * *

“Brenda no tuvo participación”, les dijo Sabag Montiel a Capuchetti y Rívolo. Fue el 6 de septiembre, durante su segunda indagatoria. Lo habían citado porque, con el correr de los días y desde la detención de Uliarte, se había ampliado la imputación. Había pruebas de que habían planificado juntos el intento de matar a CFK y que ella estaba cerca suyo cuando intentó disparar. Desvincularla era su mayor preocupación y lo único que quiso decir. “Con respecto a la defensoría de ella, que la libere de cualquier cargo”, pidió. También agregó un comentario para negar su propia culpabilidad. Pero sabía que no tenía que decir más nada. “Me niego a declarar y no voy a contestar preguntas”, agregó, con el discurso aprendido.

Más adelante, con los análisis completos de ubicación de los teléfonos celulares, quedó en evidencia que tanto Sabag Montiel como Uliarte habían estado por la zona de Recoleta, donde vivía la vicepresidenta, por lo menos los días 2, 3, 5, 6, 7, 14, 20, 21, 24, 25 y 27 de agosto y, finalmente, el 1 de septiembre. Tuvieron tiempo para conocer el barrio y sus movimientos. Durante ese último día, estuvieron juntos en el monoambiente de San Martín (la antena que impacta figura en Florida), en Constitución, Villa Domínico, Quilmes, San Nicolás (zona del centro porteño), cerca de las 19 estaban por el

Abasto Shopping y, finalmente, llegaron a Recoleta.

Uliarte fue indagada ese mismo día. Permanecía detenida en la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria (UOSP), una dependencia de la PSA en el Aeroparque Jorge Newbery. Le asignaron como defensor oficial a Gustavo Kollmann después de que Hermida rechazara el cargo porque podía haber intereses contrapuestos en la pareja. Kollmann tampoco quería que Brenda hablara, o al menos pretendía que no respondiera preguntas. La chica trató de acercar su discurso a lo que había dicho en televisión. Era una misión complicada ya que habían aparecido fotos suyas posando con el arma en la cintura en medio del desorden del departamento, e imágenes de cámaras de seguridad que la ubicaban en el lugar del hecho, a lo que después se sumarían los intercambios por chat. De todos modos, en una indagatoria ninguna persona está obligada a decir la verdad, como sí lo está en una declaración testimonial. Esta fue la explicación de Uliarte:

No tengo nada que ver con el hecho, no fui cómplice. Ese día fue un día normal, habíamos ido a la casa del inquilino de él (de Sabag) a buscar una plata que tenía que buscar en Villa del Parque. Después fuimos a Constitución y estuvimos paseando ahí. Luego de estar ahí, Fernando me dice de ir a Juncal. Estaba el tumulto de gente y él se puso ahí enfrente del tumulto, yo me fui a la esquina porque toda la gente me estaba sofocando, pensé que me iban a aplastar, había demasiada gente, y él se había ido delante de todo. Yo no pensé en ese momento que Fernando tenía el arma encima. Tampoco vi el acto, me enteré recién cuando me fui. Estuve en la esquina y luego de que pasó el acto a Fernando lo patean, lo golpean, me da miedo porque no sabía lo que había pasado. Me da miedo y me voy a San Miguel, asustada, y recién veo lo que pasó en los medios. Quiero aclarar que yo no tengo odio ni rencor hacia nadie por más que no tenga pensamiento político. Por más que piense diferente al kirchnerismo. Respeto las ideas ajenas aunque no las comparto. No tengo odio ni rencor. Jamás sería capaz de hacer algo así, me parece un hecho aberrante. No puedo creer lo que hizo Fernando. La verdad, no lo entiendo, no creía que fuera capaz de hacer algo así. Todavía sigo shockeada por el hecho. No voy a contestar preguntas.

Su exposición dejaba algunas cuestiones en evidencia: había estado todo el día con su novio; no le gustaba el kirchnerismo, a pesar de lo cual acompañó a “Nando” a un lugar donde había una movilización a favor de Fernández de Kirchner; sabía de la existencia del arma (imposible negarlo) y dijo que Sabag la tenía para defensa personal, por vivir en un barrio “inseguro”; relató que a él le pegaron los militantes, pero en lugar de ayudarlo se fue. Solo aceptó preguntas de su defensor, y así dijo que nunca lo había visto usar el arma ni practicar tiro.

Pasadas las 22.30 del día siguiente, un equipo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria partió rumbo a San Miguel para revisar el lugar donde había vivido Brenda: un departamentito identificado con la letra “I”, dentro de una construcción con varias viviendas similares, habitadas por otros miembros de la familia y algunos inquilinos, en la calle Intendente Juan Irigoien 1495, en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Adelante de todo estaba el kiosco del papá, Leonardo Uliarte, con una puerta de rejas de color rojo, quien tuvo que recibir a los uniformados a su pesar, perturbado por la situación, y ante la mirada de los testigos que los efectivos habían buscado al azar por la zona. El hombre se encontraba con su pareja, una mujer llamada Tomasa Vázquez, de nacionalidad paraguaya. Como en el resto de los operativos, el equipo llevaba expertos en explosivos y drogas, y un perro rastreador apodado “Lalo”, que suele acompañarlos.

La vivienda que había ocupado Brenda era un dormitorio, un baño y una cocina. Tenía muebles en mal estado, un sommier sin sábanas, cocina, lavarropas, papeles sueltos y carpetas escolares. En el suelo había una hoja cuadriculada que decía “MILEROTICOS”. Se trataría de una plataforma de citas y servicios sexuales que fue utilizada en otros países para extorsionar. Sobre un mueble de los que se usan para poner un televisor, había una hoja manuscrita con letra imprenta mayúscula donde decía “LA REGLA DE TUELLER (PISTOLA VS NAVAJA)”, junto con un texto explicativo. Los efectivos se llevaron ese papel entre las pruebas, pero no tenían ni idea de qué era.

La “Regla Tueller” es un protocolo que aplican las policías en Estados Unidos, donde también se la denomina “regla de los 21 pies”, la distancia mínima necesaria para tener posibilidades de defenderse de manera efectiva con un arma de fuego frente a un ataque con un arma blanca. El nombre invoca el de su creador, Dennis Tueller, un sargento del estado de Uta. La medida de 21 pies equivale a 6,4

metros. En 2018, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que quería aplicar ese método en Argentina y cambiar el Código Penal con el objetivo de que los policías que disparan y matan en “enfrentamientos” no vayan presos. Por esa época se discutía la situación de un policía llamado Luis Chocobar, que había matado a un ladrón por la espalda, en el momento que huía.

El fiscal Rívolo mandó a peritar la letra de ese manuscrito, cuya presencia en la casa de una vendedora ambulante de copos de azúcar era difícil de comprender, casi once meses después del atentado.

* * *

Brenda fue reacia a que le realizaran un examen psicológico y psiquiátrico en profundidad. Aceptó conversar, pero sus respuestas fueron lacónicas e impidieron sacar conclusiones sobre ella. Contó que se había dedicado a vender ropa, y en el último tiempo, algodón de azúcar. Las especialistas la notaron “decaída y con expresión de tristeza”, “retraída y desconfiada”. Su mirada constante de reojo, por encima del hombro, no era nueva. La tenía incorporada como costumbre.

—¿Sabés por qué estás acá? —le preguntaron.

—Estoy acá por una causa —contestó seca, sin dar pie a una repregunta.

Muchas de sus respuestas fueron “sí” o “no”. Eludió referirse a cuestiones personales y emocionales. Dijo que tenía ideas de suicidio pasajeras. Había tenido un intento de quitarse la vida cuando murió su bebé, según consta en el informe. Las expertas la vieron fría, insegura, abatida, sin disposición, poco empática, con dificultad para expresar sus emociones y hostilidad contenida. El psicodiagnóstico concluyó que, por “su postura más bien reticente y por momentos evitativa, resulta evidente que mantiene conciencia de la situación que enfrenta y de las implicancias derivadas de los diferentes interrogatorios con fines diagnósticos”.

* * *

Uliarte y Sabag Montiel estuvieron alojados en celdas de la PSA en Aeroparque, cercanas pero no pegadas. Hay quienes creen que pudieron haber cruzado algunas palabras. No hay certezas. Sus acotadas declaraciones como acusados no dejaron ni un dato relevante

para desentrañar el caso. ¿Por qué querían matar a la vicepresidenta? ¿Fueron incentivados?

El 23 de septiembre fueron trasladados a la cárcel de Ezeiza: ella, al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres y él, al Complejo Penitenciario Federal I. Cuando estaban por subirlo a la camioneta, con casco y chaleco antibalas, el asesino fallido miró a la cámara que registraba el procedimiento y saludó: “Chau, chicos, gracias”.

8

Los copitos

En su cuenta de Instagram, Fernando Sabag Montiel había compartido una foto suya apoyado contra la ventana de un vagón del subte, mientras sostenía un palo lleno de copos de azúcar de color rosa. Se notaban sus anillos y la cruz de hierro tatuada en la mano. Llevaba puesta una campera de cuero blanca y el resto eran prendas negras. No miraba a la cámara. Tenía un gesto relajado. Debajo de la publicación escribió: “No seré tu sugar daddy pero puedo ser tu sugar boy”. La venta de algodones dulces fue el camuflaje que utilizó para monitorear, junto con Brenda Uliarte, las cercanías de la casa de la vicepresidenta y analizar cómo eran los movimientos. La pareja empezó a merodear la zona a comienzos de agosto, por la misma época en que se pusieron de novios.

Se podían quedar ahí durante horas con la excusa de la venta ambulante —ya que la policía porteña no controlaba— y eso les permitió estudiar cómo concretar el ataque. Era una presencia rara, en especial por la falta de clientela para esa golosina. El mercado de los algodones dulces, además, tiene sus reglas territoriales tácitas. Hay barrios o avenidas que Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores, recomendaba no pisar. La avenida Corrientes ya está repartida entre vendedores históricos. Aun sin pertenecer a ese grupo, Brenda y “Nando” llevaron sus copos hasta ahí; desoyeron todo consejo. Los viejos comerciantes callejeros los miraban mal, pero observaban con extrañeza que a veces andaban por ahí sin tratar de vender nada.

No fueron los únicos dentro del grupo de vendedores de copos que fisgonearon la zona. El 27 de agosto, Sergio “Checho” Orozco envió dos mensajes de voz al “Grupo de Trabajo” que Carrizo había creado, en teoría, para cuestiones laborales. “Auxilio. ¿Dónde me metí?”, decía en el primero, mientras se escuchaba de fondo el cántico “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”. En el segundo repetía el “auxilio” y agregaba: “Estoy con los planeros”. Era el mismo día en

que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había colocado vallas cerca de la casa donde vivía Cristina y mandó una legión de policías desatados. También fue la primera vez que Sabag Montiel estuvo cerca de ejecutar su intento homicida, e incluso llegó a estar parado exactamente al lado del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Aquella foto de Sabag en el subte fue reenviada por Carrizo a algunos conocidos con mensajes del estilo: “El que quiso pegarle el tiro es mi empleado”, o “mi amigo estuvo a punto de convertirse en héroe nacional”, o “tiene los huevos bien puestos”. La misma noche del atentado escribió en su estado de Whatsapp: “Seguro el próximo sos vos, Alberto. Tené cuidado”, en alusión al presidente. En otro texto puso: “El Gobierno es vulnerable, y espero que les quede claro... Nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la nación argentina”.

Después del atentado, Carrizo mantuvo conversaciones en paralelo con varias personas. Decía cosas diferentes según con quien hablara.

A Brenda le escribió un rato después del ataque y le dijo que “Nando” le parecía un “héroe”. Ella le remarcó que coincidía y que lamentaba que hubiera fallado el tiro. Pero estaba preocupada por lograr silenciar al grupo. Que nadie dijera nada.

Carrizo quería convencerla, por el contrario, de salir a hablar para decir que, por más que fuera la novia de Sabag Montiel, no tenían nada que ver con lo ocurrido. “Si vamos, nos meten presos”; “chicos, entiendan que si salgo a la calle o me llevan presa o me matan”, advertía Uliarte, que por entonces sostenía ante sus colegas que no veía a su novio hacía días. Al final aceptó ir a la televisión con la condición de que fueran todos juntos. En sus comentarios pasaba de la preocupación a decir que ella misma quería ejecutar lo que Fernando no había logrado.

Pasada la medianoche, uno de los integrantes del grupo, Leonardo Volpintesta, le escribió a Carrizo:

—Amigo, borra los estados (de Whatsapp) porque mi hermana dice que te pueden hacer una causa, dice que estamos demostrando que tenemos algo que ver. Y que vayamos a laburar como otro día normal.

—Yo no tengo nada que ver. Que abran lo que quieran. A mí solo me jode la condena social —le devolvió.

Volpintesta le insistía que era una mala idea ir a la tele porque era una forma de “hacerse cargo” de algo ajeno. Que confiaba en lo que

decía su hermana, que es abogada. “¿Cargo de qué?”, le discutió Carrizo. Le aseguró que lo estaban amenazando por teléfono. “Que se pongan a investigar y punto”, remató.

Carrizo solía convocar a fiestas y reuniones. Armaba grupos de Whatsapp donde se sumaba gente a medida que se corría la voz. Aparecían amantes del heavy metal, otakus (fans de los cómics y películas japonesas, que incluso se disfrazan de sus personajes, una costumbre conocida como “cosplay”), góticos y “frikis” (desde apasionados por los videojuegos hasta las series de ciencia ficción). Uno de sus grupos más populares se llamaba “Girosos”, y ahí habían llegado Uliarte y Sabag Montiel. “Girosos” se refería a quienes salen de fiesta. Toda esta faceta del jefe de los “copitos” explica la chorrera de mensajes que le llegaban la noche del ataque a CFK y los chusmeríos que se armaban entre algunos miembros de esa exótica comunidad.

A la madrugada, su amiga Morena, que era parte de ese mundo, le escribió.

—¿Pinta joda en lo de Checho por el atentado? —preguntó en referencia a la casa donde vivía Orozco, en la que se juntaban, armaban los copos y hacían esas fiestas a las que asistían unas 40 personas.

—¿Tenés idea de lo que está pasando con nosotros? El atentado lo hizo mi amigo, Nando. El que está saliendo por la tele. Los que trabajan para mí. Estamos jodidos.

—Mal ahí. Contá el chisme entero —pidió la chica.

—Simplemente estoy pensando iniciar una guerra civil con la movilización —respondió.

Su interlocutora le dijo que no quería saber sobre eso, solo “el chisme”. Carrizo le respondió que aguardaban noticias sobre Sabag Montiel.

—Ese es el chisme. Esa vieja puta —lanzó.

—Tu amigo va a ir en cana por un atentado contra la vicepresidenta, es corta —se plantó Morena.

Él volvió con su teoría del héroe nacional. Ella le replicó que no tenía idea de “lo que sería que maten a Cristina”.

—El árbol te tapa el bosque. Tienen miedo. No puedo darte más detalles por acá. Pero la presión va a seguir si algo malo le pasa a él —la previno Carrizo.

Morena se despidió:

—Solo quería jodita en lo de Checho.

A la 1.44 ya del 2 de septiembre, Carrizo recibió un mensaje de su hermanastra, Andrea Posadas, y tuvo una conversación que empezaría a complicarle la existencia.

Andrea: No borres nada, Gaby, del celular. Pero apenas puedas venite. Mi mamá te va a ayudar, dijo. Que cuentes con ella.

Carrizo: Andrea, el arma es mía, ¿entendés?

Andrea: No está a tu nombre, Gaby.

Carrizo: No, pero aparecen mis huellas.

Andrea: Gaby, no quedan tus huellas. No te comas la cabeza. Tiene la huella de otro chabón.

Carrizo: Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo.

La hermanastra le rogaba que fuera a verla lo antes posible. Él se negaba.

Carrizo: Pensamos ponerle frente a esto. Estamos decididos a matarla a la puta esa.

Andrea: Pensá en tu hermano, Gaby.

Carrizo: Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo.

Estaba engolosinado con su propio discurso, su “humor”, diría ante la justicia. Elogió otra vez a Sabag Montiel. No entendía, regañó, cómo había fallado el arma.

A la mañana, Carrizo le volvió a escribir: “Mirá, no sé si es una buena noticia, pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un .22 corto... Recién hablé con la novia y la tiene ella, así que mañana la vamos a ocultar”.

En efecto, el arma que había usado Sabag Montiel era una Bersa calibre .32.

La imagen de Sabag Montiel que había puesto a circular esa noche era una captura de pantalla que había logrado hacer antes de que la empresa Meta (que maneja las redes Instagram, Facebook y Whatsapp) ocultara su cuenta con el argumento de que no admiten personas o grupos que cometan o reivindiquen actos de violencia. El problema colateral de esto es que convierte en una odisea la posibilidad de que la firma y las autoridades competentes en Estados Unidos permitan a

los investigadores judiciales el acceso a las cuentas. El trámite se hace mediante un exhorto y la mayoría de las veces es rechazado por defectos en su confección, o no tiene respuesta. No es un tema menor. Muchas de las personas que aparecen en esta trama, si bien se comunicaban por Whatsapp o Telegram, también lo hacían por las redes sociales. Ese contenido, a menos que se destrabe el trámite, nunca se va a conocer.

* * *

El círculo más estrecho de “copitos” que solía juntarse en Barracas estaba integrado, además de Carrizo, por Orozco (25 años, empleado administrativo en el Hospital Elizalde), Leonardo Volpintesta (20 años, desempleado y vendedor circunstancial de copos), Lucas Acevedo (22 años, vendedor ambulante) y Miguel Ángel Castro Riglos (25 años, vendedor ambulante que venía de estar en situación de calle cuando Orozco lo rescató). En un comienzo creyeron en la versión que les dio Brenda: que no sabía que Sabag tenía un arma, menos aún que tenía un plan para matar a la vicepresidenta y que no había estado con él ese día. Fue la versión que dio cuando, juntos, fueron a una entrevista en Telefé. Esa presentación, en la que mintieron, los dejaría a todos expuestos.

Pero la información real se empezó a filtrar en los medios mientras algunos integrantes del círculo más cercano a CFK enloquecían por la demora en detenerla. Dos inquilinos de Sabag Montiel aparecieron en televisión y contaron que el día del atentado habían ido juntos a cobrar el alquiler.

—Brenda, algunas cosas se están yendo a la mierda —la increpó Carrizo. Le anticipó que estaba pensando en ir a declarar.

—Uh, la puta madre. Bueno, sí, estaba con él pero no estaba en ese momento. Estaba renerviosa. Sí, vamos a declarar, si no, ya fue, me suicido, no banco este bardo. —Reconoció, además, que había visto la caja con balas, pero seguía desentendida de la pistola.

Mara Desireé Mendieta es amiga de Carrizo y fue quien le había presentado a la pareja, a la que le ofreció vender copos dulces. Carrizo le había mandado un mensaje donde se quejaba de cómo lo “jodería” el intento de asesinato “con el trabajo”. Más tarde retomó la charla con un acting.

—Boluda, es una hija de puta esta, no sé, nos remintió, o sea, porque dicen que ella sí tuvo algo que ver con esto de Nando y nos

rechamuyó.

Mara reconoció que había recibido mensajes de Brenda donde le contaba que “había estado presente con Fernando el día del atentado y que estaba orgullosa”. Carrizo enfureció porque Mara no le había dicho nada antes. “Ahora tenemos que ir a la policía a aclarar todas las cosas porque nosotros no sabemos nada, estamos en una nube de pedo nosotros (...) debiste decirme a mí por lo menos, así yo más o menos zafaba”. Ella le contestó que tenía miedo y que había tenido una crisis nerviosa.

—Me arruinaste —le echó en cara Carrizo.

* * *

Después de la cinematográfica detención de Brenda en la estación de tren de Palermo, los “coperos” empezaron a analizar qué hacer. Estaban en una situación complicada: habían pasado largas horas de su vida con Uliarte y Sabag Montiel, compartían grupos y a ella la habían alojado después del atentado, y hasta la llevaron al hospital cuando se descompuso. Orozco, más aún, la había acompañado a tomar el tren.

—La mina nos mintió, ¿me entendés? Brenda mintió y, justamente, la vimos ayer. La vimos pensando que nos dijo la verdad —se lamentaba Volpintesta al hablar con Orozco. Le explicó que Carrizo, Acevedo y Castro Riglos pensaban presentarse en el juzgado de Capuchetti. Él dudaba qué hacer.

—Pero hay un problema grave —lo alertó Orozco cual experto forense—. Si vienen acá, hay pelo de Brenda. O sea, ADN de ella.

—Hay ADN de todos —le respondió su amigo con un emoji de risas—. Escuchame, limpiá todo ahora.

—Ya di vuelta el colchón —dijo Orozco.

Volpintesta le contestó con un audio donde le daba todas las indicaciones sobre cómo limpiar y le decía que, si encontraba pelos, también podían ser suyos, o de Carrizo, ya que cuando están nerviosos tienen el “tic” de acariciarse la melena. Además, se explayó como quien elabora una teoría científica, se les puede caer por el mismo nerviosismo.

—Checho, me parece que hay que ir a declarar —sentenció Volpintesta.

Su hermana abogada, Lucrecia, le recomendó que lo hiciera y le advirtió que su celular podría estar intervenido. Lo mismo le dijo

Castro Riglos en otra conversación. Quería “limpiar” su nombre y el del resto.

En medio de todo esto, apareció otra amiga de Carrizo, llamada Joana Colman, “Joa” en su Whatsapp. Su irrupción generó un quiebre en la conversación. Se jactaba de saber cosas que el resto del grupo no. Dijo: “La única información que sí puedo dar es que Fernando estuvo totalmente negado a declarar. Se le otorgó un abogado privado, no lo quiso, no lo quiso recibir tampoco. Después, por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón, en cuatro años, pónale que sale y sale reacomodado, mal eh...”.

Cuando tuvo que declarar como testigo, “Joa” dijo que sus grandes fuentes eran publicaciones de Facebook. Mencionó una en particular, la de León Taylor, cuyo nombre real es Ezequiel Marcos Español, quien había vivido en la casa de Sabag Montiel. En su declaración testimonial “Taylor” dijo que, “por su forma de manejarse”, lo creía capaz de “matar por dinero”. Le mostraron lo que había escrito él mismo en la red social: “El que atacó a Cristina fue NANDO. Caí hace un rato, no lo podía creer. Paraba en la casa del chabón con otro par de pibes (...). Los que conocemos bien al vago sabemos que lo hizo por guita...”.

—Sigo pensando igual —le respondió al auxiliar fiscal. La pista quedó ahí.

Las conversaciones de esas últimas horas después de la detención de Brenda, y toda la situación en general, eran delirantes en el contexto de una causa judicial tan grave como el intento de matar a la vicepresidenta. Parecía una película de súper acción trucha, con falsos espías, alguien que limpia la escena como vio en la tele, y gente que no sabe mentir.

Había vigilancia sobre “los copitos”. El gobierno, que seguía de cerca el devenir de la investigación, pretendía que se ejecutaran medidas resonantes: allanamientos, detenciones si era necesario. Pero la jueza no dictaba esas medidas. Era 5 de septiembre. Brenda estaba alojada en una celda de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Aeroparque. El grupo de vendedores se presentó en Comodoro Py. Declararon como testigos. Buscaban, como fuera, despegarse de la chica con quien se habían mostrado ante las cámaras, y también de Sabag Montiel. Carrizo evitó mencionar sus conversaciones con Brenda en las que ella hablaba de matar a Cristina y él le seguía la corriente. Menos aún dijo algo sobre la charla con su hermanastra.

Para encastrar a Uilarte, le mostró a la jueza un mensaje suyo donde decía que estaba “orgullosa” de lo que había hecho su novio. Después aportó su celular en forma voluntaria, igual que el resto.

* * *

El 14 de septiembre, Carrizo volvió a Comodoro Py a buscar su celular. Le habían avisado que ya estaba disponible. Cuando llegó, lo sorprendieron agentes de la PSA: “Queda detenido”. Le secuestraron la mochila, ropa (toda negra), un gorro negro, un cargador de celular, papeles para armar cigarrillos, una colita de pelo y un collar, tres billetes de 10 pesos, monedas y un papel manuscrito con números de teléfono.

Ese mismo día a la noche fue allanada su casa, en Morón, donde estaban la madre y el hermano. Los efectivos se llevaron un chip de la empresa Claro, una boleta de impuesto inmobiliario de ARBA (a nombre de Ángela Salvatore), dos DNI de dos chicas, un pendrive, dos celulares, 1,4 gramos de semillas y 16,7 gramos de hierbas (sería cannabis). Pero lo más llamativo de lo que se halló fue otra cosa. Había un cuaderno con una serie de anotaciones: “Francisco Oneto Abogado”. “Celulares”. “Chelo Volpi, Miguel y Gabriel”, más otro que es ilegible. Por último, la pregunta: “Tentativa de homicidio agravado?”. Oneto se presentó como precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, el partido de Milei, junto con Carolina Píparo como candidata a gobernadora. El arma calibre .22 corto nunca apareció. Al día siguiente, la PSA allanó a los demás “copitos”.

El abogado de Carrizo al final no fue Oneto sino un letrado que esperaba en la puerta de la casa mientras se hacía el allanamiento. Se llama Gastón Marano y salió rápidamente a hablar por su cliente en los medios y a decir que el atentado a CFK había sido “obra de dos marginales”. La aparición de Marano en el expediente desató un gran alboroto en el Congreso, ya que en ese momento era asesor en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y actividades de Inteligencia, donde trabajaba para el senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, quien dos días después decidió desvincularlo. Además, se había embarcado en una investigación para Ramiro Marra, del partido de Milei, sobre “chantaje en la asignación de planes sociales”, según él mismo tuiteó. Y había prestado servicios para la Embajada de Estados Unidos. Su socia, Brenda Salva, es abogada y periodista. Al

momento de asumir la defensa de Carrizo, también era asesora de la diputada del PRO Gabriela Bachey, que decidió despedirla.

Así, a diferencia de la pareja detenida por el intento de magnicidio, Carrizo contrató una defensa privada y con vinculaciones en la política. Cuando le preguntaron al abogado quién le pagaría, dijo que su trabajo sería “pro bono”. Subió una explicación a sus redes sociales donde decía que era por “el cobro del mínimo legal”. “Eventualmente me pagará Carrizo o quien resulte condenado en costas al final del proceso”, dijo. Como parte de su estrategia comunicacional, una de las primeras cosas que hizo Marano fue repudiar el atentado. En el plano judicial, trató de invalidar, sin suerte, el uso del celular de Carrizo como prueba en la causa.

El día de la indagatoria, a Carrizo lo acusaron de haber participado en la planificación del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual Sabag Montiel había aprovechado su “estado de indefensión” y de vender carnets de discapacidad falsos (que podían servir, por ejemplo, para viajar en transporte público sin pagar y, por ende, sin dejar registro del viaje en la tarjeta SUBE). Entró enojado y dijo que se había “sentido muy mal”. “Tenían que haber sido sinceros conmigo para decirme que tenían mi celular, para decirme que me iban a llevar detenido. No me hubiese ocultado ni nada”, reprochó. Después de su catarsis, le mostraron los chats con su hermanastra Andrea y le preguntaron por un mensaje que le había mandado a su hermanastro Jonathan, donde le decía: “Estamos pensando en matar al jefe de la Cámpora” (en evidente alusión a Máximo Kirchner).

El jefe de “los copitos” dio una explicación que quedó registrada en el acta de su declaración:

Le quiero explicar para sacar malos entendidos. Yo soy una persona, por mi padre que falleció, le estaba haciendo una joda a mi hermanastra, voy a parecer un gil, le estaba haciendo creer que era parte de esto, no fue real, no estaba vinculado con Brenda ni con Nando, y ahora entiendo por qué estuve en el calabozo por esa mierda que dije, les juro que fue mentira. Me la mandé con esa joda, yo siempre jodo así. Yo les quiero decir que, si voy preso por una pelotudez, es que yo me pego un tiro, nunca pensé que esto iba a terminar vinculándome. Se los juro por Dios. Lo que yo quería hacerles creer a Andrea y a mi hermanastro era que esto fue un plan, con fines de joder, hacer

show, no era en serio, no existe ese arma. No hay nada...

* * *

Cinco día antes de que Sabag Montiel intentara matar a Cristina Fernández de Kirchner, en plena tensión con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por las movilizaciones para respaldarla, el abogado José Manuel Ubeira lanzó una frase premonitoria en el programa *Caníbales* en C5N: “Esto termina mal, empezó a despertar lo que venimos hablando hace rato. No porque soy un fenómeno, sino porque ya lo viví. Lo que más me preocupa es la seguridad personal de Cristina Fernández (de Kirchner), porque matarla ahora sería un logro. Tengo temor por la vida de la vicepresidenta de la nación porque estos animales, cuando van en la escalada, no paran. Sé que es duro lo que estoy diciendo, pero creo que es lo que puede llegar a pasar”.

La vicepresidenta tardó dos semanas en nombrar abogados para presentarse como querellante en la causa sobre su intento de asesinato. Analizó distintas alternativas, incluso pensó en designar un equipo de varios estudios. Quiso esperar, además, para poder observar los primeros movimientos de la jueza Capuchetti, que no arrancó con su mejor *performance* y para todo se tomaba su tiempo. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que monitoreaba la causa desde el comienzo, fue el principal asesor de CFK para definir una estrategia. También aportó sus sugerencias el procurador del Tesoro y exsecretario Legal y Técnico de la presidencia de CFK, Carlos Zannini. Mena sugirió una dupla que nadie esperaba: Ubeira, por un lado, y un joven abogado, Marcos Aldazabal, con quien había compartido estudio y que ejerció su defensa en el juicio conocido como “Memorándum” (basado en una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que achacaba encubrimiento del atentado a la AMIA a CFK y otros funcionarios por la firma de un Memorándum con Irán).

Ubeira es un viejo conocido en los despachos y pasillos de los tribunales de Comodoro Py, cuyo nombre descolló cuando logró la absolución del exjefe de la brigada policial de Lanús, Juan José Ribelli, en el primer juicio por el atentado a la AMIA, donde se declaró nulo todo lo actuado. El policía bonaerense había pasado ocho años y tres meses preso, acusado de ser parte de la conexión local del ataque. Allí se recibió de abogado y Ubeira lo llevó a su estudio. Después fue querellante en un segundo juicio por el encubrimiento en la investigación original. “El Gallego”, como le dicen al abogado

elegido por CFK, siempre tiene algún pie puesto en causas de alto impacto político. En el expediente sobre el intento de magnicidio es el que habla con más frecuencia ante los medios y participa de audiencias orales. Desde el primer día, sostiene que hubo alguien detrás, y financiamiento.

A Marcos Aldazabal, de 32 años, jamás se le había cruzado por la cabeza que algún día podría ser el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Desde chico, jugaba profesionalmente al vóley en Bariloche, donde se crió. Pasó por la selección juvenil y jugó en la Liga Argentina. Cuando empezó la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, tuvo que hacer malabares para compatibilizar todo. Eligió como especialidad Derecho Penal, hizo una práctica en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y se graduó en 2015. Apenas un mes después recibió un llamado de alguien de ese organismo de derechos humanos:

—Che, Marcos, la abogada de Milagro Sala necesita un abogado más. Le sugerimos que hable con vos.

La abogada era Elizabeth Gómez Alcorta, luego ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Asomaba el año 2016 y tenía por delante el primer juicio oral contra la líder de la Túpac Amaru: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la acusaba por una protesta en 2009, en la que ella no había participado. Él era senador y le habían tirado huevazos. Fue un momento bisagra para Aldazabal, que viajó a Jujuy un día después del último partido de la Liga. A la vuelta, terminó poniendo un pequeño estudio con Gómez Alcorta, al que se sumaron Mena y Damián Loreti (uno de los autores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).

En 2018 tuvo la oportunidad de estudiar en la London School of Economics y acordó trabajar a distancia. Allí tampoco se perdió la ocasión de jugar al vóley. Volvió el día que ganó las elecciones presidenciales la fórmula de Alberto Fernández y CFK. Mena y Gómez Alcorta se incorporaron a la función pública y Marcos armó un equipo con dos chicas, jóvenes promesas de la carrera de Derecho: Juana Boggiano se sumó primero, Camila Alvero después. Su oficina está en un edificio céntrico viejo, de esos que tienen ascensor enrejado. Es un lugar enorme, prácticamente vacío, solo para ellos tres.

Mena llamó a Aldazabal para verlo urgente justo cuando se estaban por producir dos detenciones nuevas: además de la de Carrizo, la de Augustina Díaz, la amiga de Uliarte. Cuando le hizo la propuesta

de representar a CFK, casi se desploma. Al día siguiente ya estaba charlando con ella en su despacho en el Senado. El 13 de septiembre, la dupla Ubeira-Aldazabal ingresó al expediente. En Comodoro Py, el joven penalista no pasó desapercibido con sus 2,05 metros de altura. El primer mes fue todo muy amable con la jueza Capuchetti, a quien iban a ver seguido a su despacho y ella les daba larga charla. “Estoy comprometida a investigar”, les dijo. A las pocas semanas los abogados percibieron que ese compromiso no coincidía con la realidad y la relación se empezó a resquebrajar.

* * *

“Yo soy una chica que lo único que hace es estar en su casa, estudiar, ir al gimnasio y ver a mi familia. No tengo nada que ver con esto”, se desahogó, ofuscada, Agustina Díaz, la amiga de Uliarte, cuando la sentaron en el juzgado de Capuchetti para que declarara como imputada. La joven de 21 años había sido detenida el 13 de septiembre a la madrugada, en su casa en San Miguel, mientras circulaba por los medios una imagen suya, tipo foto-carnet, con cara redonda y gesto serio. Llevaban unos ocho años de amistad y tenían un vínculo de mucha confianza, que podía advertirse en los intercambios de mensajes analizados por la PSA. Para la jueza, alcanzó para sospechar de ella, aunque no estuviera vinculada con el grupo de “los copitos”. Le imputó haber participado “activamente” de la planificación del intento de asesinato de la vicepresidenta.

Brenda le había hablado de su intención de “ir con un fierro” y matar a Cristina casi un mes antes del atentado. Le decía que estaba practicando tiro y que sabía usar el arma. “Voy a ser la libertadora de Argentina”, le anunciaba. El día que Sabag Montiel concretó su primer intento de asesinato, también se lo contó, y presumió de haberlo enviado ella. Después que lo detuvieron, Agustina le preguntó si su novio no había practicado o se puso nervioso. Le hablaba del tema con cierta naturalidad. Y le hizo recomendaciones como, por ejemplo, deshacerse de su celular. La línea de teléfono que usaba Díaz estaba a nombre de Uliarte porque, cuando la obtuvo, dijo después, era menor de edad. La pagaban sus padres. Su mamá trabajaba en una empresa de seguridad y su papá, en un supermercado.

“Los mensajes son solo mal interpretados, Brenda siempre fue una persona muy fantasiosa, muy manipuladora, muy mentirosa. Yo le juro que, de verdad, no creí que la fantasía que tenía ella iba a pasar a

hacerla realidad. No pensé que ella iba a querer matar a la vicepresidenta”, declaró la joven, que insistió en que nunca tomó a su amiga en serio y que no tiene “nada en contra de la vicepresidenta”. Aun cuando hablaron después del atentado, creyó que Brenda no tenía nada que ver. Aunque le llamó la atención que había puesto un estado en Whatsapp donde decía que estaba orgullosa de lo que había pasado, pero al rato lo borró. Cuando vio en televisión que la habían detenido, contó que se largó a llorar, sola en su habitación.

“Yo solo quiero irme a mi casa con mi mamá, seguir estudiando, el jueves tengo una prueba de matemática y me vengo rompiendo el lomo para poder darla”, dijo. A Sabag aseguró que no lo conocía personalmente, solo había tomado contacto con él por llamados y mensajes. Alguna vez le propuso sumarse a la venta de algodón de azúcar y ella dijo que no. Sabía que su amiga tenía un arma, ya que le había mandado fotos, pero no la había visto en forma presencial. Cuando vio la foto de la pistola incautada, le sonaba familiar. Pidió varias veces la libertad, hasta que consiguió que la Cámara Federal se la otorgara, el 31 de octubre de 2022, tras un mes y medio de detención.

* * *

A fines de octubre, Capuchetti recibió un nuevo informe impactante sobre el celular de Carrizo. Esta vez lo había elaborado la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal (DATIP), que encontró diálogos y frases violentas y hasta destituyentes del jefe de los “coperos” y su entorno. Para el juzgado, se trataba de más de lo mismo. Aldazabal y sus colaboradoras, en cambio, le asignaron gran importancia.

“Recién intentamos matar a Cristina”, le escribió Carrizo a un tal “Kevin Bargas 2”, a las 23.17 del 1 de septiembre, es decir, dos horas después del ataque fallido a CFK. Igual que a su hermanastra, le decía que el arma era suya. “Para que el gobierno sepa con quiénes se está metiendo. Bueno, amigo, el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordá esta fecha. Esta hdp (sic) ya está muerta”, redobló. Le dijo algo más, que en los meses previos había sido un concepto con el que machacaban las organizaciones violentas: “No sabés qué hicimos con esto. Generar miedo”. Las frases parecían alejadas de alguien que, como había declarado Carrizo, estaba haciendo bromas.

Cada cosa que decía era más grave aún: “Estamos pensando en matar al jefe de la Cámpora y al jefe de la movilización de la izquierda. Matar a Cristina. Para obligar al señor presidente a que renuncie. Él y toda su movilización”. Y otro similar. “Sinceramente, si bajan a Cristina, bajan a La Cámpora; y con esto damos un golpe terrible al gobierno, ya fue avisada”. A una usuaria que figura como Lia, cerca de la medianoche le contó que Sabag Montiel era su empleado, aunque lo criticó porque “no le dio recarga al arma”. “No tenés idea el grupo que formé. Si se dan las cosas bien, el trabajo lo voy a terminar yo”, se envalentonó. A su contacto “Prima Vero” le señaló: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “se va a poner peor”.

La propia Cristina Fernández de Kirchner difundió el hallazgo de estos diálogos en su cuenta de Twitter. “El mensaje que estás viendo (“Recién intentamos matar a Cristina”) surge del celular de Nicolás (Gabriel) Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos prueban su rol como coautor”. Con el posteo, compartió un escrito presentado por sus abogados, que planteaban que el papel de Carrizo había sido de liderazgo, no de cómplice, y que podría ameritar usar la figura de “asociación ilícita”, por tratarse de un grupo que intentaba alterar el orden público. La presentación, además, tenía un compilado de contradicciones entre los testigos de Carrizo que, a su criterio, no habían generado reacción en los investigadores. La hermanastra de Carrizo, por caso, dijo que se había enterado del atentado por la tele, pero el otro hermanastro dijo que había ido a contarle a su hermana tras hablar con Carrizo. Ella, Andrea, trató de explicar que le dijo que no se preocupara por las huellas en el arma porque se quería ir a dormir. Sus conocidos avalaban la teoría del humor negro y repetían que era una buena persona. Un testigo dijo que vendía copos con su jefe a la salida de los colegios, de jueves a domingo, lo que abarcaba días sin clases.

Gabriel Carrizo está preso en el penal de Marcos Paz y recibe muchas visitas. Entre ellas, con frecuencia, lo va a ver todo el elenco estable de “copitos” que se juntaban en Barracas.

9

La pista Milman

El viernes 23 de septiembre de 2022, al filo de las 5 de la tarde, apareció en la mesa de entrada del juzgado de Capuchetti un hombre moreno, robusto, pelado y con un surco vertical en la frente. A esa hora de ese día de la semana no hay un alma en Comodoro Py, porque existe una vieja costumbre judicial de adelantar el comienzo del fin de semana. Sin embargo, parte del equipo de la jueza seguía trabajando, y ella también. La visita inesperada se presentó como Jorge Abello y dijo que tenía algo muy importante para declarar como testigo en el expediente sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Iba a ofrecer la primera pista política fuerte.

Cuando le preguntaron por su ocupación, Abello, de 61 años, dijo que era “periodista”, ya que tiene un portal que se llama “Red Online”. Había trabajado en medios de Santa Fe, su provincia, y fue director del periódico *La Nueva Voz Regional*, que imprimía en un taller propio. Pero al momento de ir a dar testimonio era asesor del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados y colaborador del diputado Marcos Cleri. Por eso, explicó, tenía el hábito de ir a comer o tomar café en el bar de la esquina del Congreso, Casablanca, en la avenida Rivadavia 1901, un lugar donde circulan diputados, senadores, asesores y empleados todo el día. El local, que abre a las 7 de la mañana y cierra a medianoche, es un punto neurálgico de la vida parlamentaria, conocido por sus milanesas “XL” y su decoración, con enormes imágenes de la película que le da nombre.

El 30 de agosto, dos días antes del atentado contra CFK, Abello había ido a una reunión en el anexo de Diputados, a la que lo habían convocado como legislador con mandato cumplido (2010-2015) en Santa Fe. Al dejar aquella banca, se hizo conocido como “el diputado que maneja Uber”, ya que se las tuvo que rebuscar como chofer.

Estaba de visita su cuñado, Sebastián Rende, de la ciudad santafesina Teodelina, que se había quedado esperándolo y tenía

hambre. Fueron a Casablanca. Abello eligió la misma mesa de siempre, que está debajo de una escalera. A no más de dos metros, en una mesa cercana —relató en el juzgado— vio al diputado nacional Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio, y le llamó la atención la forma en que estaba vestido, con un jean “todo rasgado, como de una onda moderna”. Su cuñado le comentó que en otra mesa estaba Mario Leito, diputado nacional y presidente del Club Atlético Tucumán. Milman, describió el testigo, “estaba con dos chicas muy bonitas, jóvenes y muy bien vestidas”. Contó que charlaban entre risas y que de pronto él les dijo: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. Al instante —agregó— una de las mujeres le preguntó por su chofer. “Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo”, le respondió el legislador opositor, según declaró.

Milman, de origen radical, a quien apodan “Jerry”, había sido el número dos de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Su cargo era el de secretario de Seguridad Interior. Era la mano derecha de ella, alguien de su absoluta confianza. Habían hecho buenas migas ya en 2009 en la Cámara de Diputados, donde había conseguido su primera banca por el partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional), fundado por Margarita Stolbizer, y abandonado su larga militancia en la UCR. En esa época Bullrich trabajaba para convertirse en referente de la oposición a Fernández de Kirchner, desde lo que se llamó el “Grupo A”. Milman se unió a Bullrich y Elisa Carrió (líder de la Coalición Cívica) para armar lo que sería Cambiemos, y luego Juntos por el Cambio, la alianza con Macri. En la época del atentado a Cristina, Milman era jefe de campaña de la exministra y presidenta del PRO, que cultivaba sus aspiraciones presidenciales de cara a 2023. Bullrich nunca repudió el intento de magnicidio. Milman, más o menos: “Nunca la violencia, inmediata investigación de la Justicia para esclarecer la situación”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

En medio de la declaración de Abello, Capuchetti se levantaba de la silla, iba y venía. Desaparecía por un rato mientras quedaba a cargo algún secretario, o a veces nadie. El testimonio no fue presenciado ni por la fiscalía ni por la querella. Los abogados de CFK se quejaron por no haber sido notificados. De ser cierto el relato del testigo inesperado, se abriría una pregunta inexorable: ¿Milman sabía del atentado? ¿Tuvo algo que ver?

“Eso fue todo lo que escuché, después siguieron las bromas, los

chistes, él se paró, saludó a unas personas por ahí y pagamos nosotros y nos fuimos”, completó. “Mi cuñado no escuchó nada de lo que él dijo, hicimos algún comentario de la billetera y el galán, y elogiábamos lo bonitas que eran las chicas”, relató Abello en el juzgado. Junto con su cuñado, dejaron Casablanca. “Yo esto no se lo comenté a mi cuñado ni a nadie”, añadió. Al día siguiente (aquí confunde el 31 de agosto con el 1 de septiembre, día del atentado), estaba regresando de hacer una compra en el barrio de Belgrano, y recibo una llamada de mi madre, que vive en Villa Cañas. Ella estaba llorando, y me decía que quisieron matar a Cristina. Cuando empiezo a escuchar las noticias, me empezó a caer todo lo que había escuchado en Casablanca”, relató. Cuando terminó de declarar y se fue de tribunales, le comentó a gente de su confianza que en el juzgado no le permitieron llevarse una copia de su testimonio.

Abello había dejado de lado un detalle relevante en su declaración. La noche del atentado, cuando asoció la supuesta frase de Milman con el intento de magnicidio, le había mandado una serie de mensajes de Whatsapp al diputado Cleri en tono de espanto. Empezaban a las 22.36: “Marcos, ayer cuando salí de tu oficina fui a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía: Cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa”. “Están las cámaras, que no me dejan mentir”. “Hdmp, lo escuché. Créeme que estoy temblando”. Estos whatsapp fueron conocidos por varios funcionarios del gobierno en cuanto Cleri los recibió. Pero tardaron en creerle. Para chequear, llamaron a Leito y le preguntaron si había estado en Casablanca el 31 de agosto. La respuesta fue negativa. Sin embargo, después se dieron cuenta de que Abello había dicho mal la fecha. “¿El 30 estuviste?”, le volvieron a preguntar. Ahí dijo que sí. Esas idas y vueltas explican, en parte, por qué Abello tardó veintidós días en ir a declarar. Se supone, además, que no fue antes por temor. Y prefería esperar a que la propia Cristina se presentara en la causa como querellante.

Lo primero que hizo Capuchetti ese mismo viernes fue pedir a Casablanca el acceso a las cámaras de seguridad ubicadas en el interior y el exterior del local, para corroborar si Abello y las personas que mencionaba habían estado ahí el 30 de agosto. A la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le encomendó después que obtuviera las grabaciones de las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires y de aquellas cámaras privadas de locales y edificios aledaños al

café. La Policía Federal ya había quedado apartada de la investigación. El Centro de Monitoreo Urbano de la ciudad aportó 39 soportes ópticos con el contenido de las cámaras oficiales. Quedó comprobado que Milman había estado ahí, desde las 15.23 hasta las 16.28, con dos mujeres. También figuraban Abello, su cuñado y Leito.

Los abogados de la querella tardaron varios días en pedir más medidas. Finalmente, reclamaron el “inmediato allanamiento” al domicilio de Milman, identificar su auto, su recorrido, las cámaras de la autopista a la costa (entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre) y precisar quiénes eran las dos mujeres que lo acompañaban, además de que se las citara urgente. La jueza accedió a todo, menos al allanamiento, y citó al cuñado de Abello. El viaje había sido a Pinamar el 31 de agosto, y aparecía en las propias redes sociales de Milman. Quienes estaban con él en Casablanca resultaron ser sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz.

Cuando Abello volvió a tomar un café a Casablanca, le sirvieron de regalo una porción de torta. “No sabés toda la gente que vino acá por vos”, le festejó un mozo. También recibió insultos de algunos excompañeros suyos, de la época en que quería ser marino y estudiaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (de donde lo echaron), algunos familiares suyos se enojaron y otros lo bancaron. Cuando viajó a Santa Fe para el cierre de listas, todos lo aplaudieron. En su círculo más cercano comentó que recibió amenazas por las redes sociales.

* * *

Antes y después del intento de magnicidio, Milman presentó una serie de proyectos de ley y pedidos de informes que relacionaba con la situación judicial de la vicepresidenta para atacarla políticamente. Aprovechó que CFK atravesaba el tramo final del juicio oral por el caso Vialidad, que algunos medios difundían en tono de condena anticipada. El 6 de octubre, la querella alertó en un escrito sobre la “extraña” y “sospechosa” “actividad legislativa” de Milman. También pidió, “ante demoras y puntos grises” en la causa, que empezara a intervenir la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINICRI), del Ministerio de Seguridad, o cualquier otra de sus dependencias que fuera competente. No sucedió.

Los proyectos de Milman que llamaron la atención fueron los siguientes:

- El 18 de agosto, menos de dos semanas antes del atentado, había presentado un proyecto de declaración donde advertía sobre la posibilidad de que hubiera un “falso” atentado contra CFK. Le requería al Poder Ejecutivo que informe, a través del Ministerio de Seguridad, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otros organismos, si se estaban tomando medidas específicas de seguridad frente a una supuesta escalada verbal hacia “periodistas independientes y amenazas a jueces y fiscales”, cuyos nombres no precisó. Decía, además, que había que reforzar la custodia de personas “de alta investidura institucional” e “involucradas en causas judiciales”. “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”. El texto cerraba así: “Sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina”. Con él, firmaban Francisco Sánchez (el mismo que pidió la pena de muerte), Pablo Torello, Héctor Stefani, Ingrid Jetter, Alberto Asseff y Carlos Zapata.

- El 29 de agosto siguió con un proyecto que planeaba la “prohibición de amnistías, indultos y conmutación de penas para crímenes y delitos relacionados con hechos de corrupción previstos en el Código Penal”. Era evidente que estaba dedicado a la vicepresidenta.

- Al día siguiente, el 30 de agosto, hizo otra presentación para exigir al Poder Ejecutivo (vía la Dirección de Migraciones, la AFI y el Ministerio de Seguridad) información relacionada con el exagente de inteligencia Juan Miguel Prado, que —según había publicado el diario *Ámbito Financiero*— había filmado a los manifestantes cerca de la casa de CFK desde una terraza. Fueron esos días en que el clima se puso más tenso, cuando Rodríguez Larreta valló la cuadra y mandó a sus policías. Milman quería defender a Prado, que había sido colaborador de Bullrich. Afirmó que se lo estaba imputando “de manera errónea” y, además, hizo saber que el hombre estaba jubilado y

de viaje. Deslizó que la divulgación de su foto podría violar la Ley de Inteligencia. Era una chicana contra la denuncia por espionaje en las manifestaciones, que habían presentado diputados del Frente de Todos.

- El 31 de agosto, presentó un reclamo de información al Ejecutivo “sobre diversas cuestiones relacionadas con la organización, presupuesto y logística del servicio de protección del Estado y custodia del presidente, la vicepresidente y exmandatarios de la nación”.

- Un día después del atentado, el 2 de septiembre, acompañó un tercer pedido de informes presentado por el bloque de Juntos por el Cambio, al ministro de Seguridad de la nación, Aníbal Fernández, sobre las medidas de seguridad para garantizar la seguridad de la vicepresidenta.

- El 5 de septiembre firmó el cuarto pedido de informes al Ejecutivo, junto con su bloque, “acerca de la seguridad de la vicepresidenta de la nación, en ocasión del atentado contra su vida el 1 de septiembre de 2022”. No hablaba de “autoatentado”.

El mismo día del intento de magnicidio, con casi cinco horas de anticipación, Milman había publicado en su cuenta de Twitter: “¿Por qué el Ministerio de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidenta? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña República de Recoleta. La sobreactuación nos lleva a preguntar de qué manera se están llevando a cabo el resto de las custodias”.

* * *

La identificación de las colaboradoras de Milman llevó cerca de un mes. La confirmación de que eran Gómez Mónaco y Bohdziewicz llegó el 24 de octubre. La querella de CFK pidió que fueran llevadas de manera sorpresiva, por la fuerza pública, sin avisarles de la citación, para evitar que pudieran “acomodar” sus testimonios. La jueza rechazó ese pedido. Optó por convocarlas con menos de veinticuatro

horas de anticipación. Ambas llegaron casi sin dormir porque habían tenido una sesión extensa en la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2023. Les tomaron declaración en una salita del juzgado, donde estaban un taquígrafo, Capuchetti, un auxiliar fiscal y el abogado Aldazabal.

Primero le tocó pasar a Ivana, de 27 años, quien desde marzo de 2022 manejaba la agenda de Milman, filtraba llamadas y correos electrónicos, colaboraba en la organización de eventos políticos y se ocupaba de las redes sociales. Dijo que no recordaba una reunión con el diputado en Casablanca la tarde del 30 de agosto, a pesar de que ni siquiera habían pasado dos meses. En cambio, tenía presente un encuentro ahí mismo siete meses antes —precisó—, donde había hablado con Milman y Gómez Mónaco de un viaje, en una mesa para cuatro personas. Sobre la frase “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”, aseguró: “Nunca escuché que diga eso, solo habló de un viaje a la costa, concretamente, a Pinamar. Ese viaje a Pinamar lo realizó al día siguiente y volvió al otro día a la mañana”. “Cuando yo llegué, Carolina y Gerardo ya estaban sentados. La mesa estaba cerca de la puerta”. Todo coincidía con la descripción de Abello, pero ella hablaba de marzo de 2022, cerca de las 17 horas. Otro día muy lejano, y otro horario.

Gómez Mónaco, de 30 años, es abogada y asesora de Milman desde la época del gobierno de Cambiemos. Trabajó con él en el Ministerio de Seguridad, como jefa de Planeamiento Estratégico, un área que absorbió funciones de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito, que había sido disuelta. Su hermana Daniela era jefa del Departamento de Administración y Recursos Humanos de la DINICRI. Era responsable de la gestión administrativa de los fondos reservados. Gómez Mónaco tampoco recordaba el encuentro en Casablanca por el que le preguntaba la jueza. Sobre lo que Abello le escuchó decir a Milman, respondió: “No, por Dios que jamás escuché esa frase. Tampoco algo parecido”.

Ante la mala memoria de las asesoras, Capuchetti les mostró los registros de las cámaras de seguridad que las ubicaban en el lugar y en la reunión, tal como Abello lo había descrito. Carolina había entrado al bar primero con Milman, Ivana después. Ambas, de repente, volvieron de su particular amnesia. “Sí, soy yo”, admitió Ivana al verse en las imágenes. Trató de explicar que en realidad había confundido la fecha de la reunión. Gómez Mónaco tuvo que admitir

que era ella la de la filmación, pero no reconoció la reunión, ni que en algún momento hubieran hablado de un viaje. Ya con el traspíe de Bohdziewicz, el abogado de la vicepresidenta notó que algo olía mal. Con Gómez Mónaco y las contradicciones entre ambas, se convenció más todavía. Solicitó un cuarto intermedio para pedirle a la jueza que secuestrara sus celulares. Ella le respondió que tenía que presentar un escrito después. Eso implicaba dilatar todo y que, mientras se resolviera el tema, las mujeres se fueran lo más tranquilas con sus aparatos.

—Pónganlo en el acta —le reclamó Aldazabal a la jueza, con vehemencia.

Capuchetti no quería, pero improvisó una ronda de consultas con los que estaban alrededor para ver si era posible. El auxiliar de la fiscalía le dijo que sí. Era algo que hacía con frecuencia, sacarse las dudas con quien tuviera a mano. Después de una larga pulseada, quedó el pedido asentado, pero la jueza lo rechazó con el argumento de que no había pruebas para avanzar con una medida violatoria de la intimidad de quienes estaban convocadas en calidad de testigos. Como nadie confirmaba que Milman hubiera dicho que tenía información sobre un posible atentado a CFK, para la jueza los caminos investigativos se iban cerrando. Así las cosas, Gómez Mónaco y Bohdziewicz se fueron, con sus celulares, a sus casas.

La tensión entre Capuchetti y los abogados de la querella no dejaba de escalar. El día después de la declaración de las asesoras, la magistrada montó en cólera cuando vio que la tapa del diario *Página/12* publicaba los mensajes de whatsapp que Abello le había mandado a Cleri la noche del atentado, y que no existían en la causa. Los investigadores llegaron a desconfiar de su existencia porque no los habían visto y Abello no los había mencionado. La jueza denunció una filtración, que por sorteo le tocó investigar al juzgado de Julián Ercolini. El diputado Cleri declaró el 29 de octubre y confirmó que los había recibido. Había certificado los whatsapp con una escribana que firmó una “constatación notarial” en Rosario, el mismo día que Abello había ido a tribunales, y que él entregó el 4 de noviembre.

Frente al escándalo, Milman dobló la apuesta y denunció al testigo Abello por “falso testimonio”, mediante una presentación con numerosos errores de tipeo y de ortografía, como escrito a las apuradas. En ese texto reconocía haber estado en Casablanca, reunido ese 30 de agosto con sus asesoras. “Estábamos organizando un evento

en Mar del Plata y, al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas. Fue así que concurrí, primero a Pinamar, y volví al día siguiente a la mañana”, aseguró. “Ese fue el tema de conversación en dicha oportunidad, siendo que jamás hice una afirmación como la que el ‘testigo’ ha pretendido imponer como salida de mi boca, quien sabe con qué inconfesados fines políticos”, planteó Milman. Capuchetti tomó las afirmaciones de Milman, extrajo testimonios y los mandó a sorteo para que otro juzgado los investigara: también le tocó al juzgado de Ercolini.

El 10 de noviembre, cuando ya se habían cumplido dos meses del atentado, Cristina Fernández de Kirchner anunció en Twitter que recusaría a la jueza y compartió un video, con la voz de la periodista Julia Mengolini, que denunciaba que, pese a ser “el hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación”. Más allá de Milman y de otras pistas que la querella entendía como subestimadas, la jueza no había tratado en ningún momento el intento de asesinato de CFK como un caso de violencia política.

Para fundamentar el pedido de apartamiento de Capuchetti, los abogados Aldazabal y Ubeira realizaron una enumeración de “irregularidades” (desde el reseteo a fábrica del celular del principal acusado, las fallas previas a la detención de Brenda Uliarte y las pistas ignoradas) y consideraron que era parcial. “Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a, y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, decía al final la presentación.

El camarista Leopoldo Bruglia, de la Sala I de la Cámara Federal, debía pronunciarse sobre la recusación. Pero Capuchetti se adelantó y decidió delegar la causa al fiscal Carlos Rívolo. Eso reducía la injerencia del juzgado, aunque siguió teniendo siempre la última palabra sobre la producción de pruebas sensibles. Bruglia, de todos modos, confirmó a la jueza en la causa. “Leo” Bruglia, como lo llaman, es uno de los jueces que el gobierno de Mauricio Macri nombró en la estratégica Cámara Federal, con un mecanismo de “traslado” por el

cual jueces o juezas pasaban de un tribunal a otro sin importar si se trataba del mismo cargo o jerarquía. Él venía de integrar el Tribunal Oral Federal 4.

La jueza fue recusada por la vicepresidenta una segunda vez, cuando el ministro de Justicia, Martín Soria, reveló en Twitter que desde 2017 estaba contratada como investigadora senior del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISPP). Si bien es un organismo autárquico, está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que en ese momento lideraba Marcelo D'Alessandro, quien supo compartir viajes difíciles de justificar con jueces federales y empresarios de medios. Soria denunció que “el doble rol de Capuchetti” es “contrario a la ley”. “Los vínculos económicos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límites”, dijo. La querella sostuvo que el cargo de la jueza “es político porque el ISSP se constituye como una instancia de apoyo de la conducción política del sistema integral de seguridad”. No ejercía la docencia, para lo cual sí podía haber obtenido permiso. Aldazabal y Ubeira entendieron que estaba en duda su “imparcialidad”. Mencionaron que todo esto podría explicar por qué no investigó a la Policía de la Ciudad, que instaló el vallado para romper la movilización a favor de CFK, pero no detectó la presencia de Sabag Montiel y Uliarte, que se hacían pasar por vendedores ambulantes. La Cámara rechazó también esta recusación. El juez de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci, hizo lo mismo. Ahí se cerró el círculo de la protección corporativa.

10

“Borren todo”

La onda expansiva del encuentro en Casablanca no solo cambió las vidas de Gómez Mónaco y Bohdziewicz, que quedaron en el centro de la escena mediática, sino que, además, la mayoría de los treinta contratados como asesores y prestadores de servicios de Milman fueron despedidos en 2023, ya que sus contratos, que vencían en diciembre de 2022, no fueron renovados. En el Congreso atribuyen la orden de dar de baja los contratos a Patricia Bullrich, ante la dimensión que cobraron la pista Milman, las revelaciones sobre el diputado y el abuso con los contratos. En la lista de planta temporaria figuraban la hermana de Gómez Mónaco, su socio Fernando Daga y hasta la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. Cobraban sueldos de entre 90 000 y hasta 500 000 pesos, según la categoría. Había sido una habilidad notoria de Milman conseguir hasta cuatro o cinco veces más contratos que el resto de los diputados. En los 90, cuando creció como cuadro del radicalismo en Avellaneda, era famoso por su poder de negociación y sus habilidades como “rosquero”, “pragmático” y “armador”. En Juntos por el Cambio le terminaron retirando el saludo. Se convirtió en una mancha venenosa en un espacio que intenta hacer gala de la lucha anticorrupción, como si no existieran causas —por ejemplo— sobre presuntos negociados de Mauricio Macri.

El staff femenino de Milman fue objeto de escraches en distintos medios porque muchas de las empleadas carecían de antecedentes y méritos para cumplir tareas parlamentarias. La atractiva apariencia física de algunas de sus contratadas fue también centro de comentarios y suspicacias. La sospecha en el Congreso es que algunas de ellas integran la nómina extendida de los famosos y ya tradicionales “ñoquis” parlamentarios: gente que cobra sin cumplir tareas reales, aunque en ciertos casos aportan un porcentaje de ese ingreso al diputado/a que los contrata, una práctica extendida en la

política. Sería el caso de María del Socorro Lanusse de Peralta Ramos, quien perdió su contrato en el despacho de Milman. Habría cobrado 50 000 pesos mensuales, aunque no trabajó ahí.

María del Socorro es hermana de María Luz, quien figura como empleada del gobierno porteño hasta diciembre de 2022 y que protagonizó un increíble episodio, unos meses antes del atentado y del escándalo por los contratos legislativos. El 4 de abril de 2022 manejaba un Peugeot modelo 2008 Sport, cuando fue detenida en la intersección de las avenidas Bullrich y Cerviño. Una oficial de tránsito advirtió que la licencia de conducir era apócrifa y que no tenía autorización para manejar el vehículo. Se había fabricado un carnet falso durante la pandemia. Entonces, la fiscalía de turno ordenó el secuestro del auto. Milman viajaba adelante de ella, en su auto oficial, y bajó para increpar a los policías con el argumento de que era diputado. Dijo que era el dueño del auto, pero resultó que estaba a nombre de Metalúrgica Oliva Hnos. SA (una transportadora de caudales), que le extendió una cédula azul para que él pudiera manejarlo. La empresa es de la localidad de Burzaco, donde Milman tiene su casa y su última pareja, Florencia Retamoso, buscaba ser intendenta. Milman fue a denunciar al personal policial y a la fiscalía. En la denuncia declaró que María Luz era su novia. El fiscal Augusto Troncoso cerró la causa por “inexistencia de delito” por parte de los policías y personal de la fiscalía que concretaron el secuestro del auto. Troncoso ordenó notificar a la Cámara de Diputados para que se analicen posibles sanciones. En diciembre de 2022 se rescindió un supuesto contrato que el diputado tenía con Metalúrgica Oliva, por el cual se había comprometido con la firma a brindarle asesoramiento sobre “seguridad internacional”.

Por esa historia, Milman fue denunciado por dádivas, y hacia julio de 2023 se investigaba si la firma había sido proveedora del Estado. También tenía una causa por enriquecimiento ilícito. Y otra, junto con Bullrich, por la extraña contratación, cuando era secretario en el Ministerio de Seguridad, de dieciocho agentes de inteligencia de la DINICRI que no habrían cumplido ninguna función real. Lo detectó la gestión de Aníbal Fernández en esa cartera, que realizó la denuncia. El Ministerio de Fernández había convocado a los supuestos agentes. Algunos se presentaron y negaron haber prestado servicios. El perjuicio calculado era de 1 700 000 pesos, entre 2017 y 2018. Una de las que pagaba los sueldos era Daniela Gómez Mónaco, la hermana de

Carolina, una de las pocas empleadas a la que Milman no despidió.

* * *

Gómez Mónaco sobrevivió a la ola de despidos y permaneció en el despacho de Milman. Es evidente la estrecha relación entre ellos. Ivana Bohdziewicz fue echada en el verano. A fines de abril de 2023 se presentó un abogado en su nombre, ante la fiscalía, para informar que quería volver a declarar, por tercera vez. Rívolo, que estaba por tomar una licencia breve para un viaje, la citó para el 10 de mayo. La chica se anticipó. Denunció que estaba recibiendo mensajes de Gómez Mónaco que le resultaban intimidantes. De alguna misteriosa manera se había enterado de que quería testificar. “¿Te presentaste posta?”, “no me traiciones”, le dijo. Le tomó la declaración una fiscal, Alejandra Mángano, que estaba como reemplazante. En el entorno de Gómez Mónaco sostienen que nunca intentó presionar a su colega.

Su testimonio fue tan sorprendente como explosivo. Ivana contó bajo juramento que, en realidad, la idea de borrar el contenido de su celular no fue propia, sino que Gómez Mónaco la había llevado a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato. Según la chica, en el lugar las esperaba el mismísimo Milman, cuyo celular —relató— también habría sido “manipulado”, y a Carolina la mandaron a comprar un Iphone nuevo.

La joven ubicó esta escena “más o menos el 10 de noviembre”. Es decir, después de la primera declaración, donde se salvaron de que les secuestraran los teléfonos, pero antes de que las volvieran a convocar para que los entregaran. “A todo esto, Carolina —dijo— tiene dos líneas, una no está a su nombre. Me llama desde ese celular y me dice de reunirnos pasado el mediodía, que íbamos a un local de Tienda de Café sobre la avenida Scalabrini Ortiz, a dos cuadras pasando Santa Fe. Nos juntamos y me empieza a preocupar diciéndome que los medios, todo lo que era la parte mediática, estaba avanzando, me transmite preocupación y me comenta que había hablado con Jerry (apodo de Milman), que para ese momento estaba desaparecido, y Carolina decía que se ponga las pilas, que nos dé un respaldo, que con el Mundial no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia (Bullrich) y nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares, porque era probable que se filtrara nuestra información”.

Fueron hasta Avenida de Mayo 953, piso 3, donde están las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Pública (IEES), que dirige Patricia Bullrich, que ya se postulaba para la presidencia. Esa entidad sin fines de lucro fue denunciada por la IGJ por el presunto uso ilegal de fondos para su campaña. Ivana continuó: “Llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. En ese momento, nos enteramos por Milman, no sé si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares. Nunca dijo quién le informó. Y en ese mismo momento le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo. Yo preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos, entonces deciden borrar todo y yo accedí”. A ella, aclaró, le interesaba particularmente eliminar lo que tuviera que ver con su vida privada.

Bohdziewicz detalló que Carolina “estaba con dos celulares”. “Llama a su abogado Diego, no sé el apellido, y en altavoz, hablando con Jerry y el perito, deciden que Carolina se vaya a comprar un celular nuevo. Con la línea que presentó (ante el juzgado). Decía que iba a decir que no conocía la contraseña de iCloud, entonces se hacía una nueva y ese fue el celular que entregó. Con respecto al otro celular que no estaba a su nombre, decidieron no hacer nada, hacer como si no existiera. Salimos de ahí, me fui a mi casa y ella, a comprarse el celular. Después, el 1 de diciembre recuerdo que vinimos a declarar y entregamos el celular”, recapituló. El abogado se llama Diego Álvarez Bognar. El único perito del IEES es Jorge Teodoro. Había sido director de Tecnología en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Bullrich.

Las excompañeras de despacho habían hablado en marzo por la filtración de algunos de los mensajes de Ivana a los medios. Carolina le había mandado una nota para mostrarle, según contó Ivana. “Me dice ‘estoy hablando con el abogado de Patricia (Bullrich) para que vayas a hablar con él, a ver si te dan pelota’, porque estaban saliendo mensajes míos. Me recomiendan hablar con Julián Curi, un abogado, me dicen que vaya a Uruguay 705, 5 D. El 29 de marzo fui a verlo, y cuando voy ahí, preocupada por mi situación económica, porque por esto se me hacía difícil conseguir trabajo, y él me dijo que estaba a disposición por si pasaba algo, que lo mediático era cuestión de tiempo, que me quedara tranquila”. Después, no volvió a hablar con

nadie, hasta que empezó a recibir los mensajes de Gómez Mónaco, y fue a declarar.

Bullrich se hizo la desentendida. “Ya no saben qué inventar”, tuiteó. Ante una pregunta del periodista Lautaro Maislin, amplió: “Verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan, y no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada, todo es un invento, del atentado... nada que ver, me sorprende la creatividad”. Bohdziewicz había hecho varias referencias a ella, que daban a entender que, al menos, estaba al tanto de todo.

En un tramo de su relato, Bohdziewicz contó que le había llamado la atención un mensaje de Milman después del atentado contra Cristina: “Me acuerdo que Jerry nos dice en un grupo que busquemos el proyecto del día —no recuerdo la fecha— y que lo leyéramos, como canchereando, como que veía el futuro. Estábamos hablando del proyecto de la custodia y todo ese coso, que la verdad nunca lo leí”. Se refería al que había presentado el 18 de agosto, que alertaba sobre un posible “falso” ataque contra la vicepresidenta.

* * *

La revelación de Ivana desató enormes dudas: ¿por qué Milman querría borrar el contenido de su propio celular? ¿Por qué tanta preocupación por ocultar qué había en todos esos teléfonos y eliminar posibles pruebas? ¿Eran solo cuestiones privadas? ¿Sabía algo Milman del atentado? ¿Cuál fue el papel de Bullrich?

Los abogados de la querella reclamaron el secuestro del celular de Milman y el fiscal Rívolo los respaldó. La jueza Capuchetti se opuso. Alegó que, para tomar medidas sobre las comunicaciones del diputado, había que iniciar un trámite de desafuero, y agregó que ni siquiera estaba imputado. La cuestión de los fueros se debatió: en rigor, la orden de secuestro del celular de un diputado no requeriría autorización, su ejecución sí. Una vez más, decidiría la Cámara Federal. Pero antes Milman hizo una jugada: se “autoimputó” para poder tener acceso al expediente y mandar un abogado a la audiencia en el tribunal de alzada.

Nombró para que lo represente a un histórico abogado de Gendarmería, Manuel Barros, a quien había conocido en Esquel, en medio de la investigación por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado mientras participaba de una protesta de la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en Chubut. Un grupo de gendarmes

había ingresado al predio donde se encontraba la comunidad, sin orden de allanamiento, y desató una cacería. Bullrich alentaba la persecución y estigmatización de los pueblos originarios. Barros estaba ahí para defender a los efectivos de la fuerza. Milman iba como viceministro de Seguridad a meter la nariz en el expediente. Se cruzaron en un agasajo que el jefe del Escuadrón organizó para los funcionarios del Ministerio de Seguridad. La política fue atacar a la víctima y a su familia.

Barros también es el abogado de los gendarmes involucrados en el presunto contrabando de municiones a Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales, por el que son investigados Bullrich y Macri. Defendió a miembros de Gendarmería acusados de homicidios y por delitos de lesa humanidad.

Para defender a Milman, se aferra a un dato de la causa: el entrecruzamiento de llamadas del teléfono del diputado y sus secretarías con los teléfonos de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Carrizo dio negativo. La querella de Cristina cree que Capuchetti cometió “mala praxis” al demorar tanto tiempo esta pista. La audiencia en la Cámara Federal se hizo más de un mes después de ser convocada. Hacia finales de julio no había resuelto nada. El celular de Milman se reía solo.

Caldo de cultivo

Fernando Sabag Montiel está solo. Está preso en una celda individual. No hay otros reclusos a su alrededor ni puede compartir el patio con ellos. Tiene un horario exclusivo para él. Su única compañía es un televisor. Nadie lo visita en su lugar de detención. Habla poco, aunque a veces quisiera hacerlo más. Cada tanto conversa con una psicóloga, y se las rebusca para charlar con algún guardia. Pero está aislado. Es por su seguridad. No debe pasarle nada al hombre que intentó matar a la dirigente más popular de la Argentina. Está en un sector del penal de Ezeiza que se llama Área de Observación Continua (AOC), donde todos sus movimientos son monitoreados. Tiene un teléfono público a su entera disposición. Debería compartirlo, si estuviera detenido con otras personas, por un delito común. La gran paradoja es que, en el plano de la investigación judicial, su intento de homicidio es tratado como un delito cualquiera, desligado del contexto político, sin indagar si están allí sus posibles motivaciones.

A esa línea telefónica a veces lo llama algún detenido de otro pabellón. O se contactan con él periodistas que quieren entrevistarlos: la mayoría de las veces corta la comunicación. Como sea, está completamente solo. Entonces, escribe cartas y pide mandarlas al juzgado de María Eugenia Capuchetti. La primera, en forma de manuscrito, llegó a Comodoro Py el 29 de septiembre de 2022. Su caligrafía era difícil de leer, pero con paciencia se lograba descifrar. Sabag Montiel quería cambiar a su defensor oficial por un abogado particular y lo escribió haciendo gala de aparentes conocimientos de lenguaje jurídico: “Pido yo, el imputado, la revocación del servicio de la defensoría pública oficial Nro. 1, del domicilio en Comodoro Py 2002 piso 5, la desafectación y desvinculación permanente tanto del abogado Juan Martín Hermida como de Federico Irusta, presentando la propia defensa de forma momentánea a mí mismo hasta nuevo aviso”.

Casi al final venía lo más sorpresivo. Puso el nombre de la persona que, consideraba, era quien debía conseguirle un nuevo abogado. “Dejo la defensa en poder a elección del Dr. Hernán Carrols (sic), quien dispone de los medios necesarios para la implementación del cargo al nuevo abogado”, fue el remate de la carta. Y el comienzo de una pista. Debajo de la firma decía “Fernando Sabag” y su número de documento. A la izquierda de su nombre estampó, con tinta, la huella del dedo pulgar de su mano derecha. La jueza lo rechazó.

La aparición de este texto generó revuelo en el entorno de CFK. Sus abogados, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, junto con un pequeño equipo de colaboradores, se pusieron a rastrear enseguida quién era “Carrols”. No lograban llegar a ninguna parte. Hasta que se les ocurrió sacar la “s” final del apellido y dieron en la tecla. Hernán Carrol era el fundador de un espacio político conocido como Nueva Centro Derecha (NCD), opuesto al kirchnerismo, que entró en acción el 25 de mayo de 2020. Venía de militar contra las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por el coronavirus, porque tenía un gimnasio que debió cerrar. Primero fue referente de la agrupación “Gimnasios Unidos” y suele contar que, como no conseguía respuestas del gobierno, comenzó a tejer vínculos políticos. En las elecciones de medio término de 2021 fue candidato a concejal en La Matanza con la lista de José Luis Espert, quien ya por esa época agitaba la consigna “para el delincuente cárcel o bala”. La querella también vinculó a Carrol con el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman. Dijo que habría compartido un viaje con Fernando “Teco” Villares, una especie de jefe de gabinete de Milman con funciones en la dirección de Inteligencia Criminal, pero sin cargo formal, en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Carrol y Villares niegan conocerse. Carrol dice que no viajó. La pista no fue profundizada.

En sus redes sociales, Carrol publicaba fotos con varios dirigentes. En una que se hizo conocida, aparece detrás de Javier Milei y Bullrich en el momento en que concretan un saludo nada espontáneo, que el propio Carrol había planificado para mostrar ante las cámaras y que ellos querían difundir. A él se lo ve pelado, musculoso, de piel blanca, y lleva puesta una remera negra que dice “Seguridad”. Parece que los abraza, los protege o los contiene, como si fuese su garante. Aquel acontecimiento fue el 27 de febrero de 2021, todavía en época de pandemia. Se convirtió en una manifestación opositora al gobierno,

con cuestionamientos a la “vacunación VIP”, cargada de odio y de mensajes de muerte. Tuvo gran repercusión. Fue el día que se exhibieron bolsas mortuorias en la puerta de la Casa Rosada, cada una con la frase “Estaba esperando la vacuna, pero se la aplicó o aplicaron...” y un nombre: Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo), Martín Guzmán (que era ministro de Economía), “los pibes de La Cámpora”, “los amigos de Alberto (Fernández)”, “los suegros de (Sergio) Massa” (era presidente de la Cámara de Diputados), entre otros. Esa imagen macabra fue paradigmática en la escalada de violencia que iría en ascenso.

La irrupción en la escena público-política de discursos como el de Carrol u otros integrantes de la NCD y sus aliados puede inscribirse en el “libertarismo” argentino. El historiador y periodista Pablo Stefanoni, en su libro *¿La rebeldía se volvió de derecha?* (Siglo XXI), hace una descripción de la convergencia entre las ideas libertarias y las reaccionarias que puede ayudar a entender el fenómeno. Libertarios y reaccionarios, explica, odian lo que llaman “la mentira igualitaria”, desprecian todo pensamiento “políticamente correcto”, comparten su incomodidad con la democracia e imaginan formas pos democráticas capaces de evitar la “demagogia de los políticos”. Además, descalifican la lucha por la justicia social, un concepto que usan también para desacreditar la “defensa del feminismo, los derechos civiles y el multiculturalismo” o “casi cualquier cosa que orbite en la constelación *progre*”, dice. La justicia social, además, “tiene como precondition al Estado”, que quieren destruir, así como al “cobro de impuestos y la distribución de la riqueza”, que también rechazan.

* * *

Según lo que había escrito Sabag Montiel en su carta, Carrol debía ocuparse de él y ponerle un defensor. Esto abría varias preguntas: ¿había un mensaje oculto en ese texto? (del estilo: “páguenme un abogado o abro la boca”), ¿cuál era la relación de Sabag con Carrol?, ¿se conocían?, ¿de dónde?, o ¿de dónde había sacado su nombre?

Por lo pronto, Brenda lo conocía y había estado en contacto con él desde al menos quince días antes del atentado. Habían hablado por Instagram. Carrol hacía entrevistas en esa red social. La había visto en Crónica TV en aquella nota en la calle en la que había cuestionado los planes sociales y le propuso realizar un charla en vivo con él, que se

concretó el 18 de agosto y duró una hora y media. La conocía como Ámbar, el nombre que usaba en uno de sus tantos perfiles y con el que se había presentado en la tele. En medio de esa conversación pública, la invitó al cumpleaños de su amigo y también referente en NCD, Martín “el Negro” Almeida, un joven con dotes de influencer, conocido por hacer monólogos supuestamente cómicos y, con esa máscara, fomentar los discursos más violentos del grupo, mientras comparte fotos donde posa con armas o videos practicando tiro. El festejo era al día siguiente, en un bar con karaoke de Palermo. Uliarte no solo fue, sino que llevó a su novio “Nando”, aunque no lo presentó como tal.

Las últimas comunicaciones que Brenda tuvo con Carrol fueron después del atentado. El dirigente de NCD le mandó un audio y un mensaje escrito por Instagram. Le pasó su número de teléfono por si Sabag Montiel necesitaba un abogado. Dos amigos suyos, deseosos de fama, le habían ofrecido sus servicios. Ella le pidió que bajara la aplicación Telegram a su celular, algo que él no hizo. Brenda le escribió finalmente por Whatsapp el 4 de septiembre, a las 17.04, casi cinco horas antes de su detención, cuando ya era evidente que necesitaría un defensor.

—Hola, soy Ámbar —le dijo.

Así fue hallado en el teléfono de ella, pero la respuesta no estaba. Al parecer, no le llegó. Tal vez ya la habían detenido. Debía estar en el teléfono de Carrol.

Frente a la carta de Sabag Montiel, la jueza Capuchetti no hizo grandes averiguaciones. Solo constató el festejo de Almeida y si Sabag y Brenda habían estado ahí también, con Carrol. La querella de CFK le había reclamado el secuestro de los celulares de Carrol y de Almeida, pero ella no accedió. Los citó a ambos como testigos para el 25 de octubre, casi un mes después de recibir el manuscrito y después de que el canal C5N diera a conocer su existencia y su contenido. Fue todo a las apuradas, y las declaraciones comenzaron al anochecer. Almeida hizo un vivo de Instagram cuando recibió la citación, quejándose por la premura y donde le advierte a la jueza que no se quería “perder el básquet”. “¿Escuchaste, Capuchetti?”, se mofaba, y siguió con bromas sobre su compromiso con la justicia, como si fuese un nuevo número de stand up. Un patrullero lo escoltaba. En tribunales sacó fotos, que también compartió.

Entrada la noche, al lado del despacho de Capuchetti había

empleados sentados en el piso y una secretaria que, de a ratos, se sacaba los zapatos porque le dolían los pies. Todos tenían hambre, pero a esa hora en Comodoro Py ya no se puede comprar nada. El lugar es un páramo. Solo quedaba un pote con semillas de sésamo, donde todos metían la mano en busca de una salvación, incluso la jueza.

Como testigo, Carrol juró decir la verdad. Pese a que no estaba imputado, había ido con un abogado de la agrupación, Hernán Seivane, que se tiró el lance de entrar a la declaración, pero la jueza le bloqueó el ingreso.

—No soy una persona afín al kirchnerismo y consideré que esto había sido un falso atentado —se sinceró al comienzo.

Era lo que buscaban instalar varios dirigentes opositores. Él reconoció que tuvo que cambiar de idea al “ver a las personas”, que conocía, aunque aseguró que no sabía el nombre de Sabag Montiel. Pero pasó a otra teoría conspirativa: que enemigos internos del peronismo pudieron haber incitado a Brenda y a Fernando a atentar contra CFK, como ataque al kirchnerismo. Carrol considera que sabe de peronismo. Su abuelo materno fue taquígrafo de Perón. Todo ese lado de la familia era peronista, menos su mamá, que se hizo ferviente radical.

Contó en el juzgado la historia de los intercambios con Uliarte y dijo que el “vivo” de Instagram lo había borrado porque no le había parecido interesante, pese a que había tenido una considerable duración de una hora y media. Para explicar por qué lo llamaban a él algunos abogados para ofrecerle sus servicios a Brenda, explicó que el video se había hecho “viral”. Aclaró que, además de invitarla a la fiesta de Almeida, le escribió antes para confirmar si iba. Llegó con Sabag y, según Carrol, le pareció que eran “gente rara, extraña”. Comentó que estuvieron unos cuarenta minutos, y dijo que no hablaron de política porque supuestamente ella solo hablaba de sexo y mencionaba a un “ex”, productor de televisión con grandes dotes, mientras su novio permanecía parado al lado de ella. Lo mostró como una situación humillante para Sabag Montiel.

Fue la única vez que la vio en persona, dijo en el juzgado, y confirmó los contactos posteriores. Pero el último mensaje que le mandó a Uliarte como respuesta no lo tenía guardado.

—Yo hoy no tengo esa conversación de Whatsapp porque la borré, porque borro muchos chats todos los días. Yo no sabía que un “hola”

iba a ser tan relevante. En Instagram también borré un montón y, por suerte, no borré el de ella —expuso.

La querella le preguntó si podía aportar su celular de manera voluntaria, algo que él mismo había ofrecido como para mostrar que nada tenía que ocultar.

—Sí, chicos, no tengo problema, lo entrego voluntariamente. No tiene patrón de bloqueo —dijo, como si hablara con amigos.

Aclaró que tenía otro aparato que usa para la actividad política y prometió mandar por mail las capturas de pantalla de Instagram. A la jueza no le pareció nada raro y sin ningún problema dejó que se fuera con ese segundo teléfono.

El teléfono que dejó en tribunales tenía la pantalla rota y eso impedía apagarlo. El peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó que el aparato tenía información a partir del 24 de octubre, es decir, un día antes de su declaración. Para atrás, no había nada de nada. Parecía un chiste. La jueza no tomó medidas sobre esa situación irregular ni sobre nada relacionado. A la querella le quedaron muchas dudas.

Carrol insistió con que no hay ningún misterio sobre su vínculo con Brenda y que a Sabag Montiel no lo conocía, más allá de aquella fiesta. Sin embargo, en el último “vivo” de Instagram de Uliarte, antes de que la arrestaran, el dirigente estaba entre el público, y hablaba del hombre que trató de matar a Cristina en estos términos: “Fer hizo una joda para hacerse el gracioso, sin saber que la mafia K iba a utilizar esto para victimizarse y ahora se come flor de garrón”.

Al declarar ante la justicia, comentó que no entendía cómo Sabag se pudo haber enterado de la comunicación que había tenido con Brenda. Una hipótesis de algunas personas que conocen la causa es que la pareja pudo haber tenido alguna posibilidad de hablar o intercambiar unas palabras, de celda a celda, durante su detención en la PSA. Pero habrían quedado expuestos ante los guardias que los cuidaban.

Almeida también declaró como testigo en la causa del atentado. Contó que conocía a Brenda por sus apariciones en Crónica. La identificaba como “la chica de los copitos”. “Qué bueno que viniste”, fue lo único que le dijo en la fiesta, según relató. Sin embargo, después del atentado, con toda confianza le preguntó por Instagram: “¿Se pudo?”. La fiscalía le preguntó a qué se había referido con aquella consulta. Dijo que era una forma de preguntar “qué pasó, qué

fue lo que había pasado, cómo fue que al loco se le ocurre eso con la vicepresidente. Nunca me contestó...”.

El 2 de septiembre, después del intento de magnicidio, Almeida subió a Instagram una selfie en la que, detrás de él, se ve una movilización kirchnerista, y escribió: “Ellos no saben que el que atentó contra Cristina vino a mi cumpleaños”. Cuando le preguntaron, dijo que “es humor negro” y que es a lo que él se dedica como comediante.

Al hablar de NCD, tanto Almeida como Carrol la definieron como una agrupación apartidaria, pero con actividad política, que busca dar “la batalla cultural”. Este concepto, también utilizado por el kirchnerismo para referirse a la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos, igualitarios, distributivos, frente a la difusión de un discurso contrario desde los medios y usinas políticas, comenzó a ser utilizado en sentido inverso por los grupos libertarios y que buscan instalar los valores de la derecha. Se jactan de hacer encuentros culturales para eso y hasta tienen a su intelectual fetiche, el joven cordobés Agustín Laje, que en 2022 publicó el libro titulado, precisamente, *La batalla cultural*.

* * *

La protesta con las bolsas mortuorias tuvo mucha cobertura mediática. Fue el 27 de febrero de 2021. El canal TN transmitió más de una hora en vivo desde distintos puntos del país donde se replicaba la manifestación. El apretón de manos entre Bullrich y Milei (con Carrol detrás) fue una de las notas salientes, pero ese día dejó otras caras pegadas a aquel mensaje macabro.

La exministra de Seguridad estaba junto con otros dirigentes de Juntos por el Cambio: Gerardo Milman, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, que llevaba puesto un barbijo rojo. Milei entró a la Plaza de Mayo con el puño en alto, escoltado por dos referentes del llamado “Ministerio del Odio”, un grupo de influencers con discurso antiperonista, enfocado en difundir las virtudes de la “libertad”. Uno era Álvaro Zicarelli, joven escritor y analista de derecha, cuyo primer libro fue *Cómo derrotar al neoprogresismo*; el otro era Emanuel Danann, quien cuenta con un millón de seguidores en YouTube y otros miles en diversas redes, ofició de presentador de Milei en más de una ocasión y compartió en los actos sus dotes de cantante. En realidad, se llama Manuel Jorge Gorostiaga y en 2018 empezó a trabajar en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo, donde permaneció hasta el

gobierno siguiente. El Día de la Memoria de 2021 compartió una foto en la que posaba junto a un Falcon verde (como los que utilizó el aparato represivo de la última dictadura). También posó con un arma y compartió una foto con el siguiente epígrafe: “¿Qué creés que es más eficiente para terminar con la criminalidad? ¿Lo que proponen la izquierda y el kirchnerismo? ¿O esta?”. Brenda Uliarte era una de sus fans.

Nueva Centro Derecha tejía vínculos con otros personajes, como Espert, Ricardo López Murphy y la negacionista libertaria Victoria Villarruel. El afán de juntar a los liberales y el ala más dura de Juntos por el Cambio se fue diluyendo. Bullrich y Milei, en lugar de juntarse, competirían en 2023 por llegar a la presidencia. Carrol persistía en su caminito. Compartía consignas negacionistas, celebró el asesinato de alguien que robó y pidió portación de armas, entre otras cosas. Fue perfeccionando su oratoria.

El 8 de noviembre de 2020 se formó la Federación de Centro Derecha Argentina (FCDA), que hizo un acto oficial en el Obelisco con un camión que funcionaba como escenario. Zicarelli fue uno de los oradores, y le dedicó unas palabras a CFK: “A ver si en Juncal y Montevideo le avisamos a esa señora que acá hay miles de jóvenes”. La acusó, además, de tener memoria selectiva. El presentador fue Almeida y Danann cantó en vivo. “El Presto”, Eduardo Prestofelippo, aportó su *speech* sobre la libertad, igual que el economista Agustín Etchebarne (Republicanos Unidos). Entre la multitud se veía un inflable gigante con la imagen de la vicepresidenta con traje a rayas de presidiaria, que aparecía siempre en las manifestaciones de NCD. Ese mismo día había “banderazos” contra el gobierno en varios puntos del país.

Con el correr de los meses, la violencia discursiva fue en aumento. El 25 de mayo de 2021 hubo un acto de NCD en el Obelisco. Otra vez Almeida le habló al público desde el camión y presentó a Carrol con efusividad: “¡Fuerte el aplauso para mi jefe de seguridad de la NCD!”. Carrol tomó el micrófono. “Hay que decirles a estos políticos nefastos que ellos gobiernan para nosotros —bramó—. Son nuestros empleados”. En un momento cuestionó que “los políticos hablan de no bajarse sueldos de 400 mil (pesos)” y ahí arremetió contra CFK:

—Ni hablar de la señora, con perdón de las señoras que tengo acá, llamarla señora a esa chorra que tenemos inflada ahí es una falta de respeto —mientras señalaba la muñeca inflada.

La gente devolvía con cánticos: “¡Hija de puta, hija de puta, hija de puta!”. “¡La tenemos que matar!”, se sumó alguien en la multitud. Pedían elecciones anticipadas y la renuncia de Alberto Fernández. Carrol alternaba frases sobre corrupción, robo de vacunas, un llamado a la rebelión fiscal, la casta. En un momento pidió terminar con la participación en redes sociales y poner el cuerpo. Era lo mismo a lo que se refería Brenda Uliarte cuando se quejaba de que los libertarios no llevaban sus discursos a la acción. “No hay lugar para los tibios”, decía el fundador de NCD. Hacia 2023, Carrol estaría decepcionado con todos, empezando por Milei y Bullrich. Después del atentado, ella negó conocerlo. A él le dolió. Pero su agrupación sigue. Él da clases de gimnasia, vende suplementos deportivos y atiende un kiosco tipo drugstore en el centro de Ramos Mejía, donde vive, a la noche.

* * *

El “Ministerio del Odio” se había convertido en un poderoso canal de difusión del pensamiento libertario y de mensajes de odio, como su nombre lo indica, respecto de todo lo que tuviera relación con el peronismo o el progresismo. Hacían transmisiones que llegaban a miles de personas y, en especial, apuntaba a adolescentes y jóvenes. El nombre elegido era el de un grupo de Whatsapp de youtubers e influencers que comenzaron a desplegar un gran abanico de actividades. Charlas, encuentros, recitales, convocatorias culturales. Había surgido en la pandemia, como otras organizaciones similares. Se convirtió en un ejemplo cabal de diseminación masiva de contenido violento, gracias a las plataformas y las redes sociales. El equipo estaba integrado por “Tipito Enojado” (un youtuber que aparecía enmascarado), Augusto Grinner (conocido como “Es de Peroncho”), “El Presto”, Dannan y Zicarelli.

Era uno de los grupos que Brenda Uliarte tenía en el radar y cuyas ideas había incorporado con facilidad. En general, se interesaba en quienes tuvieran algún vínculo con Milei. Con Prestofelippo se contactó directamente por Instagram y, por la investigación del atentado contra CFK, se supo que habían tenido una relación, o por lo menos algún encuentro sexual en 2022 y varios intercambios de mensajes. Ella quedó decepcionada cuando fue evidente que él no tenía interés en volver a verla. De todos modos, hablaba de esa historia cada vez que podía y de las habilidades sexuales y del pene de “El Presto”. No solo se lo contaba a su amiga Agustina Díaz y a

algunos amigos del grupo de “los copitos”, sino que le daba detalles a Sabag Montiel, cuando eran novios.

“El Presto”, radicado en Córdoba, ya se había ganado un lugar en los principales títulos de los medios porque sus amenazas tuvieron consecuencias penales. Una de las más conocidas estuvo dirigida a Cristina Fernández de Kirchner: “Vos no vas a salir viva de ese estallido social. Vas a ser la primera en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo”, publicó en su cuenta de Twitter en 2020. Terminó procesado por incitar al odio. También agredió a Fabiola Yáñez, primera dama, compañera del presidente Alberto Fernández. Tuvo por eso una condena a treinta días de prisión efectiva, por hostigamiento y discriminación, y la obligación de asistir a un “Taller de violencia de género y respeto a las mujeres” en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La pena logró cumplirla en su casa, con una tobillera electrónica.

“El Presto”, Danann y Zicarelli fueron los más cercanos a Milei. Zicarelli fue su asesor en asuntos internacionales y lo llamaban “el canciller en las sombras”. Con la incorporación de Carlos Kikuchi y Karina Milei en La Libertad Avanza, los jóvenes influencers perdieron protagonismo, fueron desplazados.

En su primera aparición en YouTube como “Ministerio del Odio”, el 22 de mayo de 2020, sus cinco pilares habían dado una charla de más de dos horas. La pantalla los mostraba a todos a la vez, con una imagen de CFK de un lado y una de Alberto Fernández del otro. Sobre el final, Zicarelli dijo algo para lo que pidió especial atención a los más jóvenes: “La libertad se defiende armada”; “si querés la paz, preparate para la guerra”.

El discurso de este espacio que se reconoce como de centro derecha logró penetrar en distintos estratos de la sociedad. El propio Zicarelli ensayó una explicación en una entrevista que le otorgó a elDiarioAr, en la que afirmó que habían ganado seguidores entre los jóvenes de “clase media, media baja y barrios populares”. ¿Por qué? “Porque son chicos que han sido educados en la creencia de que la pobreza es una condición. Pero la pobreza es una circunstancia en la vida. Y se hartaron. Dicen: ‘Yo no quiero morir pobre, yo no quiero morir conforme con lo que me tocó’. Ahí está la generación Rappi, tan denostada... La que pedalea para ganarse el mango y el mango le paga la facultad. Ellos son los que van a la universidad privada de noche,

porque a los de la mañana se la paga el papá. Son los que no creen que la salida es Ezeiza, que quieren quedarse en su país. Esa es nuestra generación, esa es la generación que milita con nosotros”. A “ellos” les hablan y les proponen ser más individualistas. De eso se trata, precisamente, el libertarismo: una presencia mínima del Estado, limitada a cuestiones como la seguridad y, eventualmente, el trazado de rutas para dejar todo lo demás librado al mercado. Un discurso que en ocasiones llega a convencer a quienes tienen necesidades insatisfechas, pero también a quienes creen que se llegó a esa situación de carencia por culpa de la política.

Un trabajo de investigación llamado “Dilemas de la esfera pública digital: discursos de odio y articulaciones político-ideológicas en Argentina” advierte sobre la gravedad y los efectos concretos que pueden tener los mensajes violentos que brotan de las viejas y nuevas organizaciones de derecha. Esto implica que a las palabras no se las lleva el viento. Los discursos de odio son aquellos que incitan o avalan la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia personas por razones que pueden ir desde lo religioso, lo étnico, lo racial o de género, hasta lo político. “Frecuentemente generan un clima cultural de intolerancia y odio y, en ciertos contextos, pueden provocar en la sociedad civil prácticas agresivas, segregacionistas o genocidas”, explican los investigadores Ezequiel Ipar y Pablo Villarreal (del Conicet) y Micaela Cuesta y Lucía Wegelin (de la Universidad de San Martín). Señalan consecuencias concretas sobre las personas amenazadas, asediadas o violentadas en la vida pública. Con estadísticas, muestran que los sectores de derecha y los millennials (24 a 40 años) son los más proclives a participar de este tipo de expresiones que hoy encuentran su cauce en redes sociales, medios de comunicación, plataformas y diversas formas tecnológicas que los potencian. Recuerdan cómo se agitó y transmitió la toma del Capitolio en Estados Unidos por streaming. En Argentina, queda a la vista una ofensiva contra un sector de la política (el peronismo), pero implica un ataque a la vida democrática.

* * *

El 9 de julio de 2022 fue un día de muchas manifestaciones en Plaza de Mayo. La izquierda había convocado con consignas contra el Fondo Monetario Internacional; había grupos que apoyaban al gobierno y un “banderazo” alentado por la oposición, pero con convocantes

variopintos. Las marchas se sucedieron una detrás de la otra, con cruces mientras unos llegaban a la plaza y otros la dejaban.

En medio de esa *melange* apareció una guillotina gigante, hecha de madera, con un cartel que rezaba: “Todos presos, muertos o exiliados”. La palabras “Todos” emulaba el logo del “Frente de Todos” (la fuerza que había llevado a Alberto Fernández y a Cristina al gobierno), que en la segunda letra “o” lleva un sol. Pero en la guillotina, en lugar de un sol, había una antorcha. Esa escenografía atemorizante era aportada por una organización ultraviolenta llamada Revolución Federal, que había iniciado sus actividades, al menos en las redes sociales, en mayo de ese año. Ahí nomás había un grupo de Nueva Centro Derecha y otro de miembros del PRO, que ya eran parte del elenco estable: Milman, Iglesias y Wolff. Las más fuertes expresiones antigobierno coincidieron ahí, a las puertas de la Casa Rosada.

En un momento dado, Carrol se hizo cargo del megáfono, que pasaba de mano en mano. Se paró en una zona de la plaza que estaba separada por vallas, entre la pirámide de Mayo y la Casa de Gobierno. Estaba vestido todo de negro, con una campera de cuello alto y gorro.

—¿De quién es la plaza, gente? —le habló al público.

—Nuestraaaaa —le respondieron.

—Del pueblo que labura. No de esa gente que vive de ustedes. Defiendan lo que es suyo, la libertad. Quien no defiende lo que es suyo, no lo merece. ¡Viva la patria! —arengó.

El discurso se fue poniendo más violento. Y aprovechó la atención que unos pocos le prestaban para dedicarle un mensaje al presidente Fernández y a CFK:

—Y a la gente del gobierno de la nación... hoy es 9 de Julio y no está izado el pabellón nacional. Manga de hijos de puta, levanten la bandera nacional, respeten a nuestros muertos. Delincuentes...

A su alrededor merodeaba un joven también vestido de negro, que hacía flamear una bandera sin parar. Carrol le pasó el megáfono. Era Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, que en poco tiempo se haría conocido y multiplicaría la violencia con pedidos explícitos de muerte desde su agrupación. Faltaban menos de dos meses para que se produjera el intento de asesinato de CFK.

Habría más coincidencias entre los seguidores de Milei y Revolución Federal: esa organización asistió al lanzamiento del líder de La Libertad Avanza como aspirante a presidente, en 2022, en Gerli,

provincia de Buenos Aires. Llegaron con una bandera negra que decía: “Si Dios no demanda, la patria lo hará”, en letras amarillas. Y difundieron su presencia en redes sociales.

Aquel 9 de Julio de 2022 cayó sábado. El jueves anterior, 7 de julio, se había estrenado en la Argentina la película de Marvel Studios *Thor: Love and Thunder*, que Brenda Uliarte iría a ver en su primer fin de semana de proyección en los cines, con un joven al que había conocido por Facebook. Brenda llegó tarde a su cita. Su festejante reveló el motivo en su declaración como testigo: había ido antes a una marcha “cerca del Obelisco”.

12

“Dejalos chorreando sangre”

“Al kirchnerismo, cárcel o bala”, amenaza el cartel que cuelga de las rejas de la Casa Rosada. La imagen, que incluye una antorcha encendida, es el centro de una publicación en Twitter de la agrupación ultraviolenta Revolución Federal, que convoca a una protesta que acaba de empezar. Es 18 de agosto de 2022, ya casi de noche. “Así o más claro? A los corruptos, ni piedad. #18A #vanacorrer”, advierte el mismo posteo. El plan del grupo es ambicioso. Quieren rodear el palacio de gobierno, voltear la reja y meterse adentro, sin más. A metros de la explanada se forma una ronda. Cada participante lleva un largo palo de madera. En el medio, megáfono en mano, está Jonathan Morel, uno de los dos fundadores de la organización. Prende fuego en la punta de su propio palo, lo comparte con los demás y marca el suelo con esa llama. Las pequeñas baldosas se ennegrecen. Al lado, los manifestantes habían escrito con aerosol: “La casa de la chorra”.

Hay quienes filman y fotografían lo que pasa. De pronto, empiezan a volar antorchas, que saltan sobre el enrejado, en dirección a la entrada principal del edificio gubernamental. Desde el otro lado, la Policía Federal responde tirando agua para apagar las llamas, pero no lo logra del todo. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que debe custodiar del lado de la Plaza de Mayo y las movilizaciones, no está. Los activistas de Revolución Federal hacen lo que quieren. No cumplieron su gran y delirante objetivo, pero lograron hacerse notar y figurar en redes y portales, aunque no había más que una veintena de antorchas. Tiempo después Morel se jactará en Twitter Spaces (una función que permite hablar a través de esa red) de que, en general, los policías “son bastante permisivos” con ellos. El día de las antorchas, dijo, podían haberlos detenido, y no lo hicieron.

Morel tiene 24 años, pelo negro corto y ojos oscuros y bien separados. Se muestra siempre sonriente. A veces con un cigarrillo en la mano. Domina el arte de la simpatía. Sabe hablar, se le da bien.

Envuelve. Por esas dotes, se define a sí mismo como un hombre capaz de venderle cualquier cosa a cualquier persona. En 2021 abrió una carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, con un dinero que cobró por irse del call center en el que trabajaba, según su propio relato. No terminó la secundaria y cada curso de lo que sea que empezó, lo abandonó. Siente que aprende con facilidad. Se metió en el mundo de la carpintería, como vendedor, por un tío suyo y profundizó el oficio por YouTube, otra de las cosas que le gusta contar. En abril de 2022 conoció a Leonardo Sosa, un año menor que él, en un encuentro libertario en San Martín, que les dejó sabor a poco. Querían algo más explosivo. Armaron un grupo de Whatsapp en el que, al principio, estaban solo ellos dos. Le pusieron Rebelión Federal, pero luego lo cambiaron a Revolución Federal, con el que se harían más conocidos. A pesar de haber participado de algún acto de Milei, buscaron siempre mostrarse “independientes”, evitar identificarse con algún partido político.

Toda esta historia se la contaron al periodista Nicolás Baintrub, que había detectado en el grupo la clave de algo que se estaba gestando, y la publicó en la revista digital *Anfibia*. Fue la primera semblanza de estos personajes, que puso sobre el tapete sus ideas y las acciones violentas que desarrollaban. Tenían claro lo que buscaban y lo decían con un eslogan propio: que los kirchneristas “tengan miedo de ser kirchneristas”. Era como plantear que anhelaban la desintegración de la expresión más masiva y potente del peronismo en los últimos veinte años. Acusaban al kirchnerismo de haberles arruinado la vida con impuestos, de no dejarlos despegar económicamente.

Por coincidencia, según contaba aquella crónica, tanto Morel como Sosa —más parco que su socio— habían militado en 2015 por la candidatura presidencial de Mauricio Macri, en la campaña que lo llevó al poder. Sosa repartía boletas en Villa Ballester y Morel, que por entonces tenía 16 años, llegó a fiscalizar en alguna elección para ese espacio. Pero lo que proponía la unión del macrismo con la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica les resultó insuficiente. Se volcaron por la opción liberal. Sosa contó públicamente que fiscalizó para Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires y en territorio bonaerense hizo campaña para José Luis Espert.

Cuando supo de la convocatoria a la marcha de las antorchas de Revolución Federal, Fernando Sabag Montiel se sintió motivado. La

leyó como una buena oportunidad para vender copos de nieve azucarada en un entorno favorable. Tenía cierta coincidencia ideológica con los organizadores y creía que la fama que había ganado su novia al salir en la tele podría ayudar a aumentar las ventas. Cerca de las 3 de la tarde de ese 18 de agosto envió un mensaje al “Grupo de Trabajo” de Whatsapp que había creado Gabriel Carrizo:

—Chicos, discúlpenme, pero les quería decir algo con respecto al trabajo. Yo sé que hoy no trabajan, pero hoy había una marcha en Plaza de Mayo y, bueno, como es un movimiento político que es muy referente a lo que está pasando con la actualidad de Brenda, de los planes y tiene todo que ver con el tema, va a tener una repercusión hoy en Plaza. Por eso, no sé si se podría trabajar hoy, o hacer una cantidad de copos como para ir.

Algunas horas después, Brenda Uliarte posteó dos fotos desde una de sus tantas cuentas de Instagram, la que usaba con el nombre @_ambarelizal, inhabilitada tras su detención por la firma Meta. En una de las imágenes se veía a un grupo de personas que participan de la manifestación frente a la Casa Rosada. En la otra estaba ella, parada con un calzado negro, una calza con rayas verticales negras y blancas, y un buzo con los mismos colores, pero con el rayado horizontal. “Fui a la marcha, faltan muchas personas, tenemos que ser muchos gritando para que nos escuchen. No podemos seguir dormidos mientras ellos se cagan en nuestros sueños. Son comunistas disfrazados de seudo demócratas. Disculpen la facha. Había terminado de laburar y quise darme una vuelta a apoyar la causa. Argentina, falta poco para recuperarte”, escribió. Al final puso un corazón.

Morel y Sosa cuestionaban que los liberales o libertarios se limitaban a utilizar las redes sociales para explotar su prédica y atacar al kirchnerismo, su presa predilecta dentro del peronismo. Ellos, en cambio, querían “conquistar las calles”. Pasaron del dicho y las redes al hecho, con una seguidilla de protestas extremadamente agresivas. Lograron despertar y atraer a personajes influenciables como Brenda Uliarte, que asistió al menos a una de sus feroces movilizaciones. Aunque los modos de los “revolucionarios” también cansarían a Uliarte.

—Los liberales ya me tienen repodrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo, basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi —le confesaría Brenda a su amiga Agustina Díaz el 27 de agosto de 2022, por

Whatsapp.

Los propios miembros de Revolución Federal comenzaron a radicalizar cada vez más su discurso. Sosa dirá en una entrevista que “es un milagro que todavía no haya aparecido alguien que se les plante a estos tipos con cosas más jugadas. En el mundo se escucha: tiroteos, cosas así”. Tiempo después, Sabag Montiel intentará matar a la vicepresidenta. Brenda será detenida como coautora.

* * *

Revolución Federal abrió sus redes sociales el 10 de mayo de 2022, y así se presentó en sociedad. Sus primeros posteos usaban como hashtag la vieja consigna #QueSeVayanTodos. Después le añadieron precisión: “Vamos a ponerles un freno a todos”, pero la palabra “todos” llevaba la “o” con el logo del sol que identificaba al Frente de Todos.

Fueron aumentando la virulencia. Uno de sus lemas favoritos fue “Van a correr”. La cuenta de Twitter tenía la dicotomía “cárcel o bala” en su descripción. Desde ahí agitaban la protesta. Desplegaron más de treinta acciones públicas. El 24 de mayo aparecieron frente a la Quinta de Olivos junto con otra agrupación, Equipo Republicano, para convocar al #25M, el día que fueron con antorchas a Plaza de Mayo por primera vez.

El 4 de julio revelaron las formas de violencia con las que estaban dispuestos a actuar. Esperaron afuera de la Casa Rosada para increpar a quienes fueran saliendo del acto de asunción de Silvina Batakis como ministra de Economía. Uno de los primeros atacados fue el entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la nación, Jorge Ferraresi. Lo persiguieron por la calle.

—Traidor a la patria, te vamos a prender fuego, la concha de tu madre. Vamos a matarlos, uno por uno los vamos a bajar a estos hijos de puta —le gritó Morel, enardecido.

Hizo lo mismo cuando salieron las legisladoras porteñas del Frente de Todos Claudia Neira y Maia Daer.

—Chorras, hijas de puta, garcas, los vamos a prender fuego, uno por uno —las aturdió. Volaban escupitajos.

Dos días después encararon al diputado radical cordobés Rodrigo De Loredó en un bar y le advirtieron que no dejarían caminar en paz a ningún político que votara la ley del salario básico universal. El episodio fue protagonizado por dos mujeres mayores. A ellas y otras

que se sumaban al movimiento violento, Morel las llamaba “Las Mabeles”.

Morel y Sosa lograron llamar la atención con una foto que se hizo viral. Posaron junto a una enorme guillotina de madera que había fabricado Morel en su carpintería. Se encontraban en una manifestación en Plaza de Mayo el 9 de julio de 2022. En la parte superior, justo arriba de donde estaba la cuchilla (hecha con cartón) se leía otro de los lemas que más utilizarían de ahí en adelante: “Todos muertos, presos o exiliados”. Otra vez la palabra “Todos”, con el sol que identificaba al frente oficialista. Las fotos de aquella marcha revelan que en la plaza confluyeron el líder de la Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, y los diputados de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, entre otros.

El 3 de agosto, Sergio Massa dejaba su banca en la Cámara de Diputados para pasar a ser ministro de Economía. Lo reemplazaba Juan Marino, del Partido Piquetero. En ese contexto, fueron seguidos e insultados en las inmediaciones del Congreso el dirigente Juan Grabois, que respondió con la “V de la Victoria”, la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman, a quien le gritaban “Andate a Cuba, hija de puta”, y la exdiputada Mirta Tundis.

El 25 de agosto, Morel realizó una transmisión en vivo de Instagram desde la puerta de la Quinta de Olivos, donde se refirió a Victoria Donda, que era interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI): “Donda, te persigo. Donda, vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de puta. Le vas a ir a tocar timbre a San Pedro antes, Donda, la concha tuya”. La funcionaria es hija de desaparecidos.

Las consignas de ese tenor se multiplicaban. Las movilizaciones, aunque con bajísimo poder de convocatoria, también. “No tienen que poder caminar en paz”, fue el lema que utilizaron el 14 de julio cuando hicieron una marcha de velas frente a la Quinta de Olivos. El 21 de ese mes se pararon en la puerta del Instituto Patria a insultar específicamente a Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre vestido con un delantal blanco, canoso, llamado Claudio Herz, amenazó de muerte a la vicepresidenta desde un megáfono.

—Ahora te toca la horca —le gritó, entre tantas otras cosas.

—¡La horca, la horca! —corearon a su alrededor.

La prédica asesina no parecía encontrar límites. Al hombre del

megáfono se le acercó un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y lo saludó con el puño y una sonrisa. Estaban allí Morel y otros dos miembros muy activos de Revolución Federal: Gastón Guerra y Sabrina Basile, hija de Alfio “Coco” Basile, exdirector técnico de Boca, Racing y de la Selección nacional. En las filmaciones de ese día, se lo ve a Morel tirando basura en la puerta de la institución. Había más policías porteños haciendo nada, o charlando con los manifestantes.

Al día siguiente, en los grupos de Revolución Federal circuló un video de la protesta que había sido publicado como noticia en Internet, bajo el título “Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina Kirchner”. Una mujer, identificada en el celular de Morel como “Dali Revolución”, respondió: “Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (...) Que no es una mala idea, tengo una 9 mm, cualquier cosa me avisan”. Fue solo el primero de cuatro ofrecimientos que realizó esa mujer en diferentes días y conversaciones. Casi un año más tarde, el 28 de junio de 2023, los investigadores la identificaron. Se llama Lidia Margarita Casciano, vive en San Fernando y tiene más de 60 años. En el allanamiento a su casa fue encontrada la pistola y una caja de balas. La tenía registrada. En sus redes sociales había publicado, además, imágenes que la mostraban como una buena tiradora.

El enorme alcance del discurso violento y de odio de Revolución Federal quedó en evidencia en otro de los métodos que utilizan para difundir sus ideas: las charlas en Twitter Spaces, donde llegaron a participar hasta dos mil personas en la semana caliente previa al intento de asesinato de CFK. Los nombres que le ponían a cada conferencia buscaban impactar, provocar y convocar. Reflejaban consignas destituyentes, incendiarias, bélicas y de violencia física:

- “NO LLEGAN A DICIEMBRE”, se llamó la del 19 de agosto, y duró casi dos horas. Tuvo 673 participantes. Morel, que solía llevar la voz cantante, celebró la marcha de antorchas del día anterior, de la que había participado Brenda Uliarte.

—Me encanta cuando le prenden fuego a la foto de Cristina y Alberto —aplaudió el líder del grupo.

—Van y les exigen, los escrachan y les exigen —propuso Basile para lograr la renuncia de algún funcionario.

—Yo sería partidario de que, de verdad, le metan una bomba en la Casa Rosada... También tengo ganas de que se prenda fuego toda la

casa de Cristina —redobló un usuario identificado como “Gastón”.

—Si Gastón tiene ganas de salir e incendiar todo, perfecto, yo te acompaño, vamos juntos —respondió Morel.

Otro sugirió “tirarle alquitrán” a Victoria Donda. La idea más suave fue incendiar llantas en el Ministerio de Ambiente. También hablaron sobre el conductor de radio y televisión Víctor Hugo Morales. “Viejo pelotudo, hijo de puta... lo cagaría a trompadas hasta desfigurarle la cara...”, dijo Morel. “Prendería fuego C5N”, se refirió al canal donde lo estaba viendo.

- “12 AÑOS E INHABILITACIÓN PERPETUA”, se tituló la charla del 22 de agosto, en referencia a la pena que había pedido el fiscal Diego Luciani para CFK, que Revolución Federal festejaba con saña. Había 2000 personas escuchando. Basile dijo que ya no le alcanzaban “las palabras de compromiso”, quería “acciones” para “que el cáncer del kirchnerismo no esté más (sic)”. Una tal Lorena clamaba: “Se terminó salir a la calle pacíficamente”; “a estos políticos lacras hay que fusilarlos a todos”. Morel quería ir a la calle en ese mismo instante.

Lo hizo. Mientras anoecía, fue a Juncal y Uruguay, junto con Sosa. Allí había un puñado de antikirchneristas celebrando el pedido de condena con gritos dirigidos al edificio donde vivía la vicepresidenta, pero ya había una multitud que, al contrario, iba a respaldarla y alentarla.

Los referentes de Revolución Federal llegaron dispuestos a provocar a los militantes de La Cámpora y otros espacios. Morel y Sosa empezaron a sacudir una valla de madera blanca que rodeaba una zona de la calle en refacción. Querían romperla para arrojársele a los kirchneristas. La policía los reprendió. Morel se calmó, pero Sosa no. Mientras un agente intentaba sacarlo del tumulto, sorprendentemente lo agarró del cuello otra persona. Se trataba de Natanael Reinstein Menin. En el forcejeo cayeron al piso. Reinstein Menin aprovechó el momento y le dio un mordiscón al oficial. Su mochila impactó contra el piso y algo se rompió: cuando la abrieron, tenía restos de una botella de vidrio verde, trozos de tela y líquido que olía a combustible. Era un cóctel molotov.

- “Y SI NOS VOLVEMOS MONTONEROS”, fue el título de un nuevo encuentro en Twitter Spaces con 1200 participantes, el 23 de agosto. “Yo a Cristina la bajo a patadas en el orto del departamento y

la pongo a barrer disfrazada de Cliba, hija de remil puta negrera (sic)", fogoneaba Morel. "Necesito al milico, quiero que tengan miedo de ser K", siguió y comentó que ya no sabía más qué hacer: "Hay que matarlos, otra cosa no podés hacer". De paso, contó cómo es el kit que lleva a las marchas: "Tengo la pancarta, el tapa cara, todo, tengo todo ahí (...) por si mañana se muere Cristina, y salir a festejar". Otro usuario dijo: "No puede ser que estos pibes estén copando Recoleta (...) acá esto se resuelve con sangre, acá... sí, acá... sí, acá, acá este gobierno llega a tener un muerto o dos muertos, acá sinceramente se cae el gobierno".

• "HAY QUE PUDRIRLA?", fue la conferencia del 25 de agosto en Twitter Spaces, con 793 personas, donde Morel pronunció la más premonitoria de sus alocuciones:

—Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia, y me decía: lástima que a mí ya me conocen la cara porque, si no, sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje... Pero yo te juro... o sea, si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia.

El método que proponía Morel fue exactamente el mismo que utilizó Sabag Montiel para intentar el magnicidio. No se sabe si él estaba entre toda esa gente que escuchaba al fundador de Revolución Federal, porque la Policía de Seguridad solo pudo identificar a las personas que hablaban. Detrás de cada usuario podía haber infinidad de personas escuchando. Los entrecruzamientos de llamadas no detectaron contactos entre los miembros de esa agrupación y los acusados por el ataque a CFK. Pero está claro que había un repertorio de odio que circulaba con fuerza y entre muchas personas, y que en este caso estaba dirigido a la vicepresidenta.

En aquella misma conversación virtual donde Morel ofreció su receta, habló Franco Castelli, un soldado que lamentó que no hubieran golpeado a Massa, entonces designado ministro de Economía, ni al dirigente Juan Grabois cuando los increparon. "Yo lo dejo, que ni el SAME lo va a curar". Después de eso fue desafectado del Ejército. Es la misma persona que contó, además, que vivía en Río Gallegos, cerca de la casa de Máximo Kirchner. Ahí Morel le preguntó: "¿Por qué no lo mataste, boludo?".

• “AMOR EN RECOLETA”, fue el último vivo en la misma plataforma de Twitter, con 1700 participantes. Se realizó el 27 de agosto, una fecha recurrente en la reconstrucción de los días previos al atentado, por todo lo que sucedió y por una seguidilla de coincidencias: las vallas, la policía porteña sacada, Sabag Montiel entre la militancia tratando de encontrar, sin éxito, el momento indicado para disparar. Leonardo Sosa reportaba en esa charla virtual lo que ocurría en Recoleta.

—Ya aparecieron con merchandising de Cristina 2023 —avisó.

—Nooo. ¡Hay que matarlos, boludo, tirá una bomba, la puta que te parió! ¡Una bomba! —le respondió Morel.

—No, no, encima te preguntás tipo quién. Bueno, matémoslo, pero quién lo va a hacer.

—No hay que darle un muerto, hay que darle sesenta —se sumó un tal Gabriel.

—Mirá lo que está pasando ahora. Apareció (Andrés) Larroque, el hijo de puta este, la cara del kirchnerismo más pura está ahí enfrente de la policía en Recoleta —volvió Sosa.

—¡Y matalo!

Sosa seguía pasando el parte de quiénes llegaban: Grabois, Victoria Tolosa Paz... Morel, reaccionaba con excitación. “Están todos, es una bomba”. “Dejalos chorreando sangre”. Como en trance, el líder de Revolución Federal llegó a decir que, “por Alá”, había que “tirarle un avión, como se hizo en el Pentágono”, en Estados Unidos. “Por favor, alguien que esté yendo para Aeroparque, desviate, son veinte metros, por favor, falló el radar, hagan patria carajo. No lo puedo creer, un retirado de la fuerza, por favor alguien que haga algo, alguien, necesitamos un hombre bomba, Dios mío, la puta que los parió”. Se despidió con una sugerencia: “Quédense viendo las noticias, capaz nos enteramos de algo bueno y llega un avión a lo de Cristina”.

La Policía de la Ciudad, que estaba muy concentrada en aplicar toda su fuerza contra dirigentes y manifestantes que apoyaban a CFK, no detectó la presencia extraña de Sabag Montiel, y tampoco la de Sosa, a quien para colmo algunos agentes ya conocían del día de la molotov.

Al día siguiente, Sosa volvió a la zona. Junto con Guerra, entraron al edificio donde vivía la vicepresidenta, pero fueron un piso más arriba. Era el departamento de Ximena Tezanos Pinto, ya a esa altura conocida como “la vecina de Cristina”, de 56 años, madre de cuatro

hijos grandes. Había sido foco de atracción de los medios cuando, durante la pandemia por coronavirus, el 17 de agosto de 2020, desplegó una bandera nacional en su terraza que decía: “Argentina República Democrática”. El 4 de diciembre de 2021 colgó otra: “Justicia independiente, por una república democrática”.

Liberal, de posiciones antiperonistas, “la vecina” es parte de los Republicanos Unidos. En un comienzo se identificó con Ricardo López Murphy (promotor del “es ellos o nosotros”), pero ya en pleno período electoral, en 2023, comenzó a escuchar con interés a Roberto García Moritán, más conocido como “el marido de Pampita”, por la modelo Carolina Ardohain. En 2021 había votado a Javier Milei, no tanto por él sino porque la sedujo el relato negacionista de su número dos, Victoria Villarruel. Participó cuanto pudo de toda marcha contra el gobierno de Alberto Fernández.

El dúo de Revolución Federal sacó fotos desde su balcón. Guerra, que venía de otro grupo, llamado Nación de Despojados, puso una selfie en Instagram, tomada ahí, con el epígrafe: “Y si no la llevan presa... qué quilombo se va a armar. Ah, no, así no era. Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la nación argentina”. Sosa tomó una imagen de la calle y la publicó en Twitter, junto con un texto: “Miren a los kumpas ahora mismo, creo que me están cantando a mí”, y un emoticón de risas.

¿Qué hacían ahí? Tezanos Pinto se había convertido en una vía de acceso de lo más sencilla.

A Guerra le habían abierto una causa por patear el auto que llevaba a Sergio Massa el día de su jura como ministro de Economía. El joven de barba negra pateó a más no poder. Su abogada era Gladys Egui. Esta mujer le alquilaba una habitación a Tezanos Pinto, quien le habría ofrecido trabajo a Guerra por recomendación de su inquilina, para realizar arreglos en su casa. Con esa excusa, podía entrar y salir cuando quisiera en esos días terribles. Sosa diría ante la Justicia, tiempo después, que ella “tenía intención de iniciar una carrera política” y que entonces “estaba armando un temario de cosas que representaban su ideología republicana”. Se lo mostró y les preguntó:

—Chicos, ¿están de acuerdo? ¿Les gustaría sumarse?

Quería invitarlos a formar un pequeño grupo. “No solamente era para hablar de nuestras causas, sino también para conocernos y para, justamente, exponernos sus ideas”, resumió Sosa.

Después del atentado, la vecina recorrió algunos medios. Tenía el

pelo de color violeta. Dijo que no repudiaba el intento de magnicidio, sino que lo condenaba.

Revolución Federal emitió un comunicado para despegarse del hecho. Desde la organización, invocaron un mensaje que les había llegado a su cuenta de Twitter tras el atentado, en el que un usuario identificado como Juanargento (desde la cuenta @juanpeluchan) se lo atribuía. El texto decía: “Lo hicimos bien?? Lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa, con un extranjero... igual no tenía alas, es solo para que corran, ¡Van a correr! como dicen... cadena nacional”.

El comunicado de la organización decía, sin repudiar: “Estamos ante un hecho de máxima gravedad, del cual ninguno de los integrantes de Revolución Federal tiene responsabilidad alguna”. También aseguraba que nadie conocía al autor del mensaje. La justicia tampoco lo identificó.

13

Los millones de Caputo

Después de estudiar la zona durante varios días, el 1 de septiembre Sabag Montiel se infiltró entre los militantes kirchneristas e intentó “hacer pasar a la historia” a la vicepresidenta. Quien pasó a la historia, en cambio, fue él. Quedó preso desde ese día por el intento de homicidio que no logró concretar.

Morel se enteró del atentado por un mensaje del periodista Baintrub, que lo había entrevistado, y que todavía no había publicado la nota.

—Ahí estoy viendo, casi la mata. ¡No salió el tiro, la concha de su madre! —le dijo en un mensaje de audio. No parecía estar bromeando.

Con la noticia, Sosa fue a expresarse en su cuenta de Twitter: “En caso de que todo sea real, que se trata de un brasilero es el dato más deprimente de todos. Eso significa que ni un solo argentino estaría dispuesto a sacrificarse por su patria”.

Las grandes preguntas que despertaba el funcionamiento de Revolución Federal a quienes habían notado el ruido que generaba y las características de sus acciones, eran inevitables: ¿son conscientes de la violencia de sus consignas? ¿Pueden creer que son solo conceptos sin carnadura? ¿Son independientes? ¿Forman parte de un dispositivo? ¿Se autofinancian? ¿Cómo sostienen económicamente sus movidas? La intensa catarata de acciones que desplegaron dejó en evidencia que, aunque la organización era en apariencia precaria, tenían medios para pasarse todo el día en la calle, construir una gran guillotina, moverse de acá para allá, armar antorchas, entre tantas otras cosas.

La primera pista que hizo pensar que alguien los financiaba la dieron ellos mismos en la entrevista con la revista *Anfibia*, poco antes de su publicación a mitad de septiembre. “Uno de mis clientes es el grupo Caputo”, sorprendió Morel. Caputo Hermanos SA es una

desarrolladora inmobiliaria que se dedica a construir barrios y grandes edificaciones. Pertenece a miembros de la familia de Luis “Toto” Caputo, el exministro de Finanzas del macrismo; hermano menor del presidente del directorio de la empresa, Flavio Caputo. Lo primero que dijo Morel, sin grandes detalles, fue que lo había contactado una decoradora para un enorme trabajo en Neuquén. Ya de por sí era extraño que una carpintería chica y sin demasiada infraestructura, con tan corta existencia, y cuyo dueño había aprendido a hacer muebles por YouTube, fuera contratada por una firma de tal magnitud.

La mujer resultó ser Rossana Pía Caputo, otra de las hermanas. Le encargó 144 mesas de luz, 144 respaldos de camas, 60 sillas y 48 banquetas. También le pidió 144 sommiers, colchones y almohadas, según Morel. Por supuesto, en su carpintería no tenía listo nada de todo eso. De hecho, nunca antes había vendido almohadas y colchones, que no se hacen con madera. Eran para un edificio llamado Espacio Añelo, ubicado en Vaca Muerta, en Neuquén, con 60 departamentos destinados a la gente que va a trabajar a esa zona en el negocio petrolero. También había que equipar el salón de usos múltiples. Era ostensible que la carpintería “Dogo”, como la llamó Morel, no tenía capacidad para realizar ese trabajo, que era requerido para un emprendimiento ubicado a más de 1000 kilómetros de distancia. El primer pago recibido fue el 24 de mayo, un día antes de su primera marcha callejera con antorchas. Los pagos continuarían hasta fines de agosto.

Revolución Federal cortó sus actividades y protestas violentas cuando ocurrió el intento de asesinato de la vicepresidenta. La agrupación fue denunciada el 8 de septiembre por una persona que se presentó como Lucas Morales, que mandó un correo electrónico al Ministerio de Seguridad, a una casilla para denuncias, en el que adjuntó una publicación de la red social Instagram del usuario “Revolución Federal”. Allí se incitaba al odio y a la violencia contra el presidente y la vicepresidenta de la nación. Decía: “Los vamos a perseguir. Van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en la Argentina van a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas. Se rieron cuando éramos 5, 10, 20, 40 y cuando somos 100. Esto recién empieza y cada sector debe elegir de qué lado ponerse, del lado del laburante y la clase media y baja, o de la de los delincuentes y mafias. Medios, Productores de Campo, Empresarios, Mercados. TODOS van a sufrir las consecuencias de sus actos. No van a seguir

destrozando nuestra vida para enriquecerse. Vengan a buscarnos y verán las consecuencias. #vanacorrer”. La publicación era anterior al atentado. La presentación quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita.

El texto de Revolución Federal ponía dos cuestiones al descubierto: el discurso de odio se había extendido a distintas organizaciones que, al mismo tiempo, habían sido subestimadas por casi todos, menos por los dirigentes políticos que buscaron crecer al calor de sus diatribas violentas. Ese discurso también logró captar cierto enojo de algunos sectores que tuvieron dificultades para subsistir en momentos difíciles, como los que se vivieron durante la pandemia por coronavirus.

Luego se sumó otra denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que entregó grabaciones de las conversaciones de Twitter Spaces, donde todos los días se convocaba a incendiar, trompear, asediar o matar a exponentes del oficialismo. El entonces interventor de la AFI, Agustín Rossi, la presentó ante el juzgado de Capuchetti, porque consideró que podía tener relación con el intento de magnicidio, ya que mostraba cómo se había producido una espiral de violencia que normalizaba la idea de eliminar al adversario. La magistrada se la envió a Martínez de Giorgi. Esto que parece burocracia de tribunales era, en realidad, una pelea más profunda sobre cómo se abordaría jurídicamente el intento de magnicidio: ¿con su contexto político-financiero y su trama violenta, o como un hecho disociado de todo?

El fiscal Pollicita, de 61 años, dictaminó que Revolución Federal debía ser investigada en conjunto con el intento de homicidio contra CFK. No se conocían los alcances de la posible actividad ilícita de la agrupación, ni todos sus integrantes, ni los eventuales nexos con el atentado. Solo se había detectado la presencia de Brenda Uliarte en la marcha de antorchas en la Casa Rosada. Su postura era compartida por los abogados de la querrela de la vicepresidenta. Aunque nadie podía acusarlo de tener algún vínculo con ella: es el mismo fiscal que la había acusado y había pedido que fuera a juicio por la causa Vialidad, donde Luciani tomaría la posta.

El juez Martínez de Giorgi, de 57 años, estuvo de acuerdo con la fiscalía y sostuvo: “Según la actividad constatada en torno a la agrupación autodenominada Revolución Federal, era manifiesta e incluso publicitada la voluntad de perseguir y ejecutar actos de violencia en torno a integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación,

situación que en efecto aconteció a la luz del atentado que se investiga en la causa del Juzgado Federal 5” (el de Capuchetti).

El fiscal Rívolo se opuso a juntar las causas porque no advertía ninguna relación entre Revolución Federal y el ataque a CFK y su planificación, y la presencia de Uliarte en una marcha de ese grupo no era suficiente para postular su agrupamiento. La jueza, en la misma línea, dijo el 22 de septiembre que la conexidad era prematura. Así pasaron los días. El camarista Mariano Llorens ordenó mantener los expedientes separados.

* * *

Cuando le avisaron que Morel estaba por viajar a Entre Ríos con su novia, Dalila Monti, Pollicita solicitó que los siguieran y que, ante el menor riesgo de huida, lo detuvieran. El 19 de octubre, el juez ordenó detenerlo, no solo a él, sino también a Sosa, Guerra y Basile. Además, mandó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a allanar sus casas, la carpintería y los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara al Sur, de Caputo Hermanos. Ambos habían contratado a Morel.

A Sosa lo arrestaron cuando salía de su casa en Villa Ballester. En cuanto vio a los agentes, trató de realizar una llamada pero enseguida lo tiraron al suelo. El hallazgo más llamativo fue ahí, en su vivienda: había 50 000 dólares, 371 000 pesos y 200 euros. Además, se llevaron dos notebooks, un celular de la hermana de Sosa, una antorcha, un megáfono, una videofilmadora y una bolsa con folletería “de contenido amenazante”. Había una tarjeta Ualá a nombre de Leonardo Sosa, una tarjeta SUBE, otra del programa Progresar, una tarjeta de Brubank, un DNI y un pasaporte suyos, una tarjeta de memoria, un pendrive, una billetera con 5 euros, dos billetes de 100 dólares, uno de 50 dólares, cinco de un dólar y diez billetes de 1000 pesos.

Morel fue detenido en Paraná. Llevaba 4490 pesos en la billetera, dos tarjetas de crédito, el DNI, una tarjeta SIM, la SUBE y un celular. No se resistió. Fue allanada su casa en Munro. Como no había nadie, tuvieron que entrar por la fuerza. Secuestraron folletos de Revolución Federal, una bandera negra de la agrupación, dos botellas de 0,9 litros de contenido inflamable, aparentemente querosén; un rollo de alambre, una bolsa de nailon color blanca y dos antorchas caseras.

En lo de Guerra, los policías fueron recibidos por su pareja. Había una notebook, un celular y una bandera argentina con un símbolo comunista dentro de otro de “prohibido”. En un rastillaje realizado

sobre sus redes sociales, los investigadores habían señalado que simpatizaría con ideologías nazis y fascistas. Su biografía en Facebook decía que trabaja en “Adolf Hitler’s deaths” y que estudió en “Camps de concentration nazis”, además de poner “me gusta” en páginas alusivas a Benito Mussolini, esvásticas y skinheads.

Morel intentó convencer al juez y al fiscal de que no es una persona violenta, o al menos no se considera así, y que jamás quiso hacerle mal a nadie. Se manifestó sorprendido por la detención. Pero, a la vez, admitió en forma indirecta haber participado en hechos de violencia política. “Lo de Cristina fue el primero de septiembre, lo del intento de magnicidio, y estamos a veintiuno de octubre y realmente yo desde ese día no hice más nada, porque entendí que el clima está muy complicado, que puede ser provocador salir a la calle, entendí que era difícil. Se rompió algo en lo social de lo que soy consciente, entonces no quería seguir metiéndole nafta al fuego”. La agrupación, explicó, se disolvió naturalmente.

—¿Revolución Federal tenía alguna fuente de financiamiento? — preguntó el fiscal.

—No tuvo financiamiento. Jamás. De nadie, ni de nada. Yo soy la persona que pagó las maderas para realizar la guillotina, eso sí lo voy a contar, me hago cargo, no tengo por qué negarlo. Es una maqueta de madera y cartón que no tiene intencionalidad de herir a nadie. Ni utilidad para lastimar a nadie. Leonardo era el que pagaba la nafta, por ejemplo, porque usábamos su auto para trasladarnos. Las redes sociales las manejaba Leo...

Contó que habían abierto una aplicación llamada “cafecito”, para que la gente hiciera donaciones.

—¿Cómo conoce a Rossana? ¿Nos puede contar cómo comienza la relación? —se interesaron los investigadores.

—Como lo que vendo es un producto raro, porque es madera maciza muy rústica y no se consigue, la gente que está buscando eso frena; me funciona hace un año y medio. Así que siempre dejo tablones afuera. Rossana vio los tablones, bajó, preguntó si hacíamos barras y mesas, y le dijimos que sí.

Así, según Morel, fue todo una casualidad. La decoradora, a quien agendó como Rosana Méndez, pasó por una carpintería perdida en Boulogne y le encargó unos muebles para el barrio Santa Clara al Sur. Después volvió por un reclamo, porque había tenido problemas con sus muebles. Sin embargo, se le ocurrió que era una gran idea

proponerle al joven un megatrabajo para Espacio Añelo, en Neuquén, muy lejos de su pequeño taller. Morel, siempre según su versión, no dejó pasar la oportunidad: a pesar de que sabía que no podía hacerlo, le dijo que encantado aceptaría el trabajo. Lo tercerizaría.

El joven precisó que facturó 6 906 000 pesos, pero que presupuestó 13 millones. La diferencia es lo que facturaron los proveedores. Contó que los muebles viajaron en un flete y que él se fue en un vuelo de Flybondi. Tenía todas las cuentas en la cabeza y en “google drive”, algo que los investigadores podían consultar. Tenían que mirar en una “planilla virtual”.

El negocio despertó inquietud en los investigadores y, por supuesto, en las querellas de todas las víctimas de Revolución Federal. La eventual concreción del trabajo no quitaba que pudiera ser una vía de apoyo económico para la agrupación que propagaba las consignas violentas.

El resto del grupo también fue indagado. Todos buscaban presentarse como personas pacíficas, y decían que no se harían cargo de lo que hubieran hecho o dicho otros. Sosa hizo un gran esfuerzo por mostrarse distinto a Morel. Se presentó como empleado de la escuela ORT. Se quejó por “quedar pegado” a “cosas que había dicho” su compañero, como pedir que mataran a Máximo Kirchner o desearle la muerte a Victoria Donda. Pedía que él “dé la cara” cuando se empezó a relacionar la actividad de Revolución Federal con el atentado a CFK. Los 30 000 o 40 000 pesos que había en su casa, dijo que provenían de los aportes de participantes y la aplicación “cafecito”. Pero los dólares se los atribuyó a su papá. Sosa reconoció que él manejaba las redes sociales, pero de la charlas virtuales se ocupaba Morel. Sabrina Basile tomó un camino parecido: “Lo máximo que hice fue insultar políticos con improperios tal vez subidos de tono, pero más que eso no pasó, y lo mismo entiendo que los demás, pero yo hablo por mí”. Ella dijo que pretendía “manifestarse democráticamente”. Se fue del grupo tres días después del atentado. “Estaban todos muy alterados, no había orden”, dijo.

“Yo sé muy bien lo que hice cuando fue a asumir Massa, que golpeé la ventana en un estado de mucha angustia por mi situación económica, por la situación que vivo con mi familia, que se me hace muy difícil al tener hijos”, sollozó Guerra en su indagatoria. “Me arrepiento de todo corazón, se los juro”, “no soy una mala persona”, quiso convencer. Había conocido a Revolución Federal el 25 de mayo,

cuando salieron por primera vez. Para enfatizar su perfil “familiar”, contó que justo ese día había ido con su pareja e hijos a conocer el Cabildo. La abogada que lo representaba ese día era Egui. Ella misma le pidió que hablara sobre la reunión en la casa de Tezanos Pinto. “Ximena quería charlar conmigo y preguntarme cómo era mi situación”, relató. Contó que comieron sándwiches de miga y dio a entender que se apiadó de él y le dio trabajo para pintarle la casa y hacer otros arreglos.

¿De qué se los acusaba? Según el fiscal Pollicita, Morel y Sosa habían organizado Revolución Federal, a la que se integraron Guerra y Basile, y “llevaron a cabo un esquema que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. En términos jurídicos, es una variante de la “asociación ilícita”. Se les adjudicó un “plan criminal”. El grupo, describió, se dedicó a “planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, ‘escraches’, actos intimidatorios y manifestaciones, llegando a utilizar incluso antorchas en la vía pública, arrojadas junto con bombas de estruendo, contra la Casa de Gobierno”. Todo eso, analizó el fiscal, “se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación, el pasado 1° de septiembre”. El juez Martínez de Giorgi coincidió con el encuadre y los procesó el 3 de noviembre. El fiscal y el juez hicieron una interpretación amplia del proceso de violencia que venía en aumento, e incluía el intento de asesinato de CFK como su punto máximo. En buena medida, adoptaron una postura diferente a la de Capuchetti y Rívolo.

El problema es que todavía quedaba —y quedará pendiente, se verá si hasta siempre— la “pista del financiamiento” que, por propio peso, impediría atribuir los sucesos violentos de manera lineal a odiadores producto de la crisis económica y social. Si hay alguien, uno o varios interesados, en poner dinero para agitar la violencia en las calles y debilitar a un sector del peronismo y su principal líder —caracterizados por enfrentar a los poderes fácticos—, queda claro que están en juego otras cuestiones de fondo, de poder político y económico. Los tribunales rara vez entran en este tipo de análisis, pero justo en este caso aparece el apellido de la familia Caputo, uno de cuyos miembros fue el “Messi de las finanzas” del gobierno de Macri.

Flavio Caputo, por lo pronto, se “autoimputó” al presentar abogados. Rossana estaba bajo la lupa hacia fines de julio, pero sin definiciones.

Dos días antes de la decisión de Martínez de Giorgi, la Cámara Federal había dejado en libertad a los cuatro detenidos, tras doce días presos. La decisión fue de Llorens, Bertuzzi y Bruglia. Dijeron que no había peligro de que se escaparan o entorpecieran la investigación. Además, acotaron que no encontraban conexión de este caso con el intento de magnicidio. “No se verifica —de momento— la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, escribieron.

El mismo tribunal decidió suavizar la situación de los activistas de Revolución Federal, dos meses más tarde. Bruglia y Bertuzzi (otro camarista, igual que Bruglia, trasladado a ese tribunal por el gobierno de Cambiemos) dijeron que no conformaron una asociación ilícita para imponer sus ideas, sino que habían cometido el delito de incitación a la violencia colectiva. Según ellos, el intento de magnicidio no se podía deducir como un efecto de sus actos. Mariano Llorens —uno de los jueces denunciados por visitar a Macri durante su presidencia— directamente dijo que no había delito alguno. La organización, dijo, “no tuvo la capacidad de alterar la paz social más allá de la entidad que quiere darle la querellante”, o sea, CFK. Todo este combo de fallos negaba la existencia de hechos de violencia política.

* * *

Los abogados de CFK —al igual que ella— están convencidos de que la familia Caputo financió al joven que mantendría a Revolución Federal en las calles durante al menos tres meses, agitando consignas violentas con el objetivo de amedrentar a cualquier kirchnerista. Para los investigadores judiciales, sin embargo, sigue siendo una incógnita cómo es que una firma como Caputo Hermanos SA llegó a establecer un vínculo comercial para equipar un emprendimiento de 60 departamentos en Neuquén con un ignoto carpintero de Boulogne, en la provincia de Buenos Aires.

La defensa de Flavio Caputo, a cargo de Matías Cúneo Libarona, cuestionó a los investigadores por incluir a la firma Caputo Hermanos en la causa judicial y definió el proceso como una “caza de brujas”. Hizo presentaciones para explicar la contratación de la carpintería de

Morel y alegó que se “escarbó” en la “actividad de la empresa” para incluirla “indebidamente” en el caso.

Para que el dinero fluyera de las arcas de Caputo Hermanos a las manos de Morel se utilizó la figura del fideicomiso, común en emprendimientos inmobiliarios, que implica un contrato por el cual se crea una persona jurídica distinta de sus partes. Eso permitía separar a Caputo Hermanos del “Fideicomiso Espacio Añelo”. La querella advirtió que a Rossana Caputo la habían metido por la ventana para ocuparse de los arreglos con Morel. Un empleado de Caputo Hermanos, Lucas Nudelman, confirmó bajo juramento que Rossana no tenía un papel activo ni en la empresa ni en los fideicomisos. Se trata del mismo testigo que relató que en abril de 2022 se le asignó la tarea de pedir presupuestos para amueblar Espacio Añelo, y que luego lo desafectaron de esa función para dejarla en manos de Rossana.

Para formalizar los pagos, Morel utilizó distintas estrategias. Él mismo facturó 1 760 000 pesos a Espacio Añelo. (Casualmente, la misma cantidad que le había facturado a Santa Clara al Sur, la primera vez que Rossana Caputo recurrió a sus trabajos, según surge de la investigación judicial). Pero tanto su socia, Ailén Cintia Vallero, como su exnovia, Evelyn Nataly Balboa, se inscribieron especialmente en el Monotributo para poder facturar para este negocio, una en mayo y la otra en junio. Vallero recibió de Espacio Añelo 2 454 000 pesos. Facturó el 24 de mayo, justo cuando salía a la luz Revolución Federal. Por su parte, Balboa, que trabajaba en relación de dependencia en la Municipalidad de San Isidro, le facturó 2 500 000 pesos. Recibió 1 millón en su cuenta y retiró casi todo. Morel también retiraba todo o parte de lo que cobraba en efectivo. Convertir el dinero bancarizado en efectivo permitiría perderle el rastro. La explicación judicial fue que con esa plata pagaba a los proveedores, que solo le facturaban la mitad.

La maniobra también incluyó el uso de posibles prestanombres. María Isabel Said, de 62 años, viuda, y comerciante, lo explicó sin rodeos cuando allanaron el domicilio que tenía declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). No era un local comercial ni tenía cartelería, constató la policía. A viva voz, dijo que le había hecho el favor a Morel de entregar dos facturas, porque él tenía un tope. Sumaban 3 460 393 pesos. La querella reveló que solo el 10% de ese monto estaba bancarizado. ¿Qué pasó con el resto del dinero? Habría salido en efectivo, aunque el testigo Nudelman explicó

que lo habitual era usar transferencias o cheques. Debido a los montos que maneja la empresa, “no se hacen pagos en efectivo y todos los pagos se realizan contra factura”, detalló.

Said figuraba entre los nueve proveedores a los que Morel supuestamente les había tercerizado el trabajo y la compra de camas, entre otras cosas. Él, en definitiva, actuaba como intermediario. Sin embargo, los abogados Aldazabal y Ubeira hicieron notar que contrató a Javier Aris, que ya era proveedor de Caputo Hermanos. ¿Cuál sería la ventaja de un intermediario que contrata a un proveedor habitual?

Asimismo, Nudelman reveló que para el traslado de los muebles no se utilizó al transportista habitual. Morel les dijo que conseguiría un furgón cerrado, en el que él viajaría para poder controlar que nada pasara con los materiales si se largaba a llover durante el trayecto. Pero viajó en avión.

La carpintería de Morel, así como Revolución Federal, quedaron inactivas después de que intentaran matar a la vicepresidenta. Él responsabiliza a CFK por el destino de su negocio.

A fines de julio de 2023, luego de que un peritaje reconfirmó que no se detectaron contactos telefónicos entre los miembros de Revolución Federal y Brenda Uliarte o Sabag Montiel, uno de los integrantes de esa agrupación se envalentonó con la idea de volver a las calles. “Nos cagaste la vida por una teoría conspirativa, sabías que si la gente nos acompañaba se te caía el gobierno abajo @CFKArgentina. Hoy la justicia te dio una patada mortal más. En este día más fuerte que nunca: a los amigos abrazo, al kirchnerismo balazo, forra”, escribió Sosa en su cuenta de Twitter. En otro mensaje agregó: “Si el dólar blue llega a los 600\$ la semana que viene Revolución Federal vuelve a las calles de forma definitiva. Renunciá, hacé algo @CFKArgentina”.

Gracias al peritaje a los dispositivos electrónicos de Jonathan Morel se pudo saber que Revolución Federal tenía prevista acciones que no llegó a concretar: se encontró un documento específico e intercambios vinculados con otra marcha con antorchas que preparaban para el 6 de octubre de 2022.

La PSA, que se encargó de los peritajes, también encontró un documento en el que Morel tenía preparado su descargo judicial: la explicación, casi literal, que le daría a la Justicia sobre cómo contactó con Rossana Caputo.

Entre los hallazgos hay uno que aún nadie puede descular, y del

que Morel se niega a hablar cuando alguien se lo pregunta. Es un contrato de colaboración y cesión de derechos fechado el 25 de enero de 2023, que guardaría relación con una serie documental sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Del informe elaborado por la PSA surge que había un documento en formato Word con los datos del currículum vitae de Morel, y se “localizaron siete tomas fotográficas de un contrato realizado entre el mencionado y una productora de nombre Producciones del Barrio SL”. Al parecer, prometió confidencialidad.

* * *

Alejado de la carpintería, y tras su detención, Morel trabajó como mozo en un bar de Chivilcoy, donde no duró mucho tiempo. Nunca dejó de responder las inquietudes de los periodistas.

Es 29 de mayo de 2023. En un bar de Olivos, el referente de Revolución Federal charla con un periodista japonés que intenta descifrar el fenómeno de los discursos de odio y entender cuánto pudieron influir en el intento de asesinato de la vicepresidenta. Quiere saber si Sabag Montiel tuvo algún vínculo con la oposición, con el macrismo, con Milei, con Revolución Federal, o con quién.

La entrevista transcurre en una mesa, en la parte exterior del bar. Morel está sentado de espaldas a la calle, de frente al local comercial. Junto a él, el entrevistador y un periodista argentino que hace de traductor. De pronto percibe un movimiento inhabitual a unos metros, como si hubiera llegado algún personaje, de esos que nunca van solos. Baja de un auto el expresidente Mauricio Macri.

—¡Apoyala a Bullrich! —le grita Morel a Macri, que desde lejos le sonrío y se mueve apurado para ingresar a una casa en la que lo están esperando.

El mensaje de Morel es, en realidad, para los periodistas que lo acompañan. No se define como macrista, pero lo que está haciendo es mostrarse definitivamente antikirchnerista. La secuencia continúa un rato más tarde, cuando Macri sale de la casa a la que había ingresado y mira hacia el lugar del que le habían gritado:

—¿Que apoye a Pato decías? —levanta la voz el expresidente, listo para respaldar su candidatura.

Ella utilizará para su campaña el discurso más violento y extremista, el famoso “Si no es todo, es nada”. Ya cerca de las PASO, junto a sus jóvenes adláteres, difundirá un video donde cantan y

cambian la letra de la canción “Sobreviviendo”, que compuso Víctor Heredia en 1974 por el “Año mundial por la paz”.

—Yo la quiero a Patricia de presidente para que construyamos este presente, para que construyamos una Argentina en la que estemos todos, menos Cristina.

14

Muerta o presa

—Me gustaría conocer a Brenda algún día.

Cristina Fernández de Kirchner sorprendió con su deseo en medio de una charla en confianza, en su despacho del Senado, en la que intercambiaba impresiones con un grupo reducido de conocidos.

—La miraba en Crónica y ella mostraba que quiere ser algo que no es. Dice ser porteña y estudiante de medicina, pero me dicen que no terminó la secundaria y es del conurbano, como yo, que soy de Tolosa. Esa piba podía haber sido yo en otra época. Pero hubiera sabido que su condición era producto de otra cosa —pensó en voz alta.

Su razonamiento era que, si hubiera crecido en otro momento histórico, habría entendido que, desde el Estado, se pueden mejorar las condiciones sociales. Pero le tocó atravesar parte de su adolescencia bajo el paradigma del gobierno macrista, que instaló la idea de que igualar es mala palabra: las cosas se merecen, o no.

—Brenda tiene algo aspiracional —analizaba CFK ante quienes la escuchaban. Ese término se utiliza para hablar de aquello que las personas creen que pueden llegar a ser, sin importar si es posible o producto del pensamiento mágico. La oferta neoliberal busca tentar a los más vulnerables con promesas de ascenso social, para lo cual predica que les sacará de encima al Estado, que les impide crecer con impuestos y regulaciones.

Allí donde el poder económico manda, logra que en los sectores de clase media-media y media-baja, pequeños comerciantes, productores o emprendedores empobrecidos, crezca el concepto de que el Estado los destruye, y los “planeros” son responsables de toda crisis. Los efectos negativos de la pandemia en la economía, en general, fueron atribuidos desde los grandes medios y los políticos opositores al gobierno de Alberto Fernández y CFK, mientras que la mayoría de los países los asumieron como una consecuencia de la paralización que provocó la expansión del coronavirus.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel aparecieron en la televisión antes del intento de magnicidio. Apelaron a un discurso que algunos medios querían instalar y muchos televidentes escuchar, en sintonía con la oposición política más derechizada. Salieron a atacar a los “planeros”. Buscaban mostrar que ellos son distintos. No quieren planes sociales, prefieren vender copos de azúcar “en lugar de fomentar la vagancia”, dirá la chica. Matar a Cristina —imaginarán— podría darles aún más notoriedad. Fernando Sabag Montiel soñará con ser un héroe, sin perder la conciencia de sus acciones, según surgirá de su perfil psiquiátrico. Tal vez alguien les dio la idea. O la fueron construyendo. Quizá les ofrecieron un futuro promisorio a cambio. Quizá tan solo lo imaginaron. El Poder Judicial no se esmeró en dilucidarlo: la causa fue elevada a juicio oral en menos de un año.

En ese enorme y señorial despacho del Senado donde la vicepresidenta trabaja, las paredes de madera todavía tienen algunos huecos que dejaron las piedras que le arrojaron desde la calle. Lo paradójico es que ese día la discusión transcurría en la Cámara de Diputados y no en la de Senadores, que encabezaba CFK. Se discutía sobre los términos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el lastre de la deuda impagable que había tomado Macri, de 56 000 millones de dólares. Aún no se sabe a dónde fue a parar buena parte de ese dinero (por lo que hay una causa penal, que también tiene la jueza Capuchetti).

La manifestación frente al Congreso reunió a militantes organizados de espacios de izquierda y a integrantes de organizaciones sociales. En ese contexto, alguien, quizás desconectado de todos ellos, arrojó bombas de pintura roja que justo impactaron en torno a la ventana de la vicepresidenta y de otros despachos de ese sector del edificio. La pintura, creen la vicepresidenta y sus colaboradores, funcionó como marcador: hacia allí volaron todos los piedrazos. Los cascotes perforaron los vidrios y casi le dan en la cabeza a la expresidenta. En ese momento, CFK estaba reunida con su hijo Máximo, los senadores nacionales Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio. La causa judicial la recibieron, casualmente, Capuchetti y Rívolo. Para el fiscal, ese direccionamiento no se probó.

La pelea por el FMI dentro del propio oficialismo dejó a la vista algo que algunos analistas creen que explica una de las razones por las que es denostada la vicepresidenta: su confrontación con el poder real.

La posición del kirchnerismo, en esta ocasión, no era la de no pagarle al Fondo, sino que bregaba por conseguir plazos más largos, quita de intereses, la no injerencia en las decisiones internas y asunción de responsabilidades de parte del organismo de crédito internacional: o sea, seguir negociando. Pero primó la postura del Poder Ejecutivo: un nuevo acuerdo, con nuevas metas, para pagar el anterior, y revisiones trimestrales. Máximo Kirchner terminó renunciando a la presidencia del bloque del Frente de Todos.

El ataque a cascotazos fue el 10 de marzo de 2022 y, a la distancia, desde el dispositivo cristinista, comenzó a ser interpretado como un antecedente de su intento de asesinato. Se sumaron otros. A fines de ese mes la ciudad apareció empapelada con unos afiches con la cara de Cristina que decía, en letras grandes de molde, “Asesina”, y arriba, “Culpable 35 000 muertes”. La acusaban de elegir hacer “negocios con (Vladimir) Putin”, el presidente de Rusia, al traer la vacuna Sputnik. La causa pasó por la justicia federal y la ordinaria, y nunca se supo con exactitud quién mandó a colocarlos. Un integrante de la Cámara del Crimen, Mariano Scotto, concluyó que “la finalidad” de los carteles era la de “atentar contra la señora vicepresidenta y su función en el gobierno nacional”.

El 25 de mayo de 2021 había explotado una bomba en una vieja casona en Bahía Blanca, donde funciona el Ateneo Néstor Kirchner. Fue colocada a las 3 de la mañana, por una ventana, y se escuchó en cincuenta cuadras a la redonda. El impacto hizo estallar vidrios de las ventanas de edificios cercanos. Cerca del lugar aparecieron panfletos con amenazas a militantes de La Cámpora, periodistas, sindicalistas y jueces: “Y cuántas razones más para empezar una purga”; “ahora a cuidarse, traidores, sabemos dónde viven. Hartos!!! de todos ustedes”. Algunos vecinos y vecinas decían que habían recibido ese tipo de avisos de grupos “anticuarentena”. La investigación judicial nada dilucidó.

* * *

6 de diciembre de 2022. 34 grados a las 17.30.

Está por llegar a su fin el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, sobre el que tanta expectativa había generado el fiscal Luciani. Aguardan el veredicto en forma remota la vicepresidenta, otros exfuncionarios y el empresario Lázaro Báez. Los tres jueces tienen abrochado hasta el último botón de sus

camisas, llevan corbata y lucen sus trajes con la espalda recta. Así se los ve en la pantalla. Uno de ellos, Rodrigo Giménez Uriburu, había sido recusado durante el juicio cuando salió a la luz que había jugado al fútbol en el mismo equipo que Luciani y que juntos disputaron partidos en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri, alguien muy interesado en que se condenara a CFK. En medio del escándalo, ese magistrado apareció en una de las audiencias, que se desarrollaban a través de la plataforma virtual Zoom, con un mate que llevaba el escudo del equipo donde jugaban, llamado Liverpool. La defensa de la vicepresidenta pidió también el apartamento de Luciani, y del presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, por registrar visitas al Ministerio de Seguridad en épocas en que lo comandaba Patricia Bullrich. Todo fue rechazado.

En 2019, CFK se había opuesto a que comenzara el juicio porque no se habían llevado a cabo los peritajes más elementales sobre las 51 obras cuestionadas. Lo planteó en un recurso ante la Corte Suprema, que amagó con frenar todo al reclamar el expediente completo, pero lo devolvió en veinticuatro horas, al ver que *Clarín* y *La Nación* se le pusieron en contra. Enseguida, el 21 de mayo, se iniciaron las audiencias. Los supremos guardaron los recursos de Cristina y otros acusados en un cajón y no resolvieron nada hasta tres años después. Los rechazaron justo cuando debía empezar el alegato de Luciani y su coequíper, Sergio Mola, que avanzaron con el camino despejado. Hasta ese momento, muy pocos medios seguían lo que pasaba en el proceso —en especial, *Página/12*, *Ámbito Financiero* y *Tiempo Argentino*— y daban cuenta de los pormenores del debate. El defensor de Cristina, Carlos Beraldi, explicó que la expresidenta no administraba los fondos para las obras. Entre ella y quienes las adjudicaban había no menos de 25 escalones entre la Jefatura de Gabinete, el ministro del área y toda la estructura provincial, expuso.

El final de la indagatoria de la vicepresidenta en ese proceso causó impacto, tanto entre quienes la quieren como entre sus detractores. Fue una de las pocas audiencias presenciales. Miró a los jueces y los desacreditó: “Ustedes son un tribunal del *lawfare*”, en alusión al armado político de causas. “A mí me va a absolver la historia y a ustedes los va a condenar”, declaró con vehemencia. Agarró todos sus papeles y carpetas, aclaró que su descargo había terminado y dio unos pasos para retirarse. Un secretario del tribunal le preguntó si iba a responder preguntas de las partes, pero ella no lo escuchó. Fue

entonces cuando el fiscal Luciani, desde su lugar, insistió con la pregunta. CFK volvió sobre sus pasos, se acercó al micrófono y, sin volver a sentarse, espetó:

—¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes.

Tres años más tarde, el juez Gorini leyó el veredicto con tono monocorde. Cuando en la lista llegó a la vicepresidenta, dijo: “Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Los jueces no aplicaron la figura de asociación ilícita que pedían los fiscales, pero aceptaron vedar su acceso a cargos políticos electivos para siempre.

Las instancias de apelación por venir incluyen a dos jueces de Casación que batieron récords de visitas a Macri en Olivos y la Casa Rosada, y una Corte Suprema que meses después intervendría en el proceso electoral de 2023, cuando suspendió elecciones en dos provincias, San Juan y Tucumán, donde se podían entrever triunfos peronistas.

Apenas media hora después del veredicto, la vicepresidenta habló en una transmisión por YouTube, desde el Senado. Se refirió, entre muchas cosas, a una decisión tomada, a su futuro, al Poder Judicial y, en particular, al papel de *Clarín*:

No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado. ¿A mí administración fraudulenta por el Estado y estos, los amarillos, que nos dejaron 45 000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de *Clarín*? Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto (el empresario directivo de *Clarín*). ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás. ¿Entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora...

Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa. A la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003, para acompañar a quien fuera mi compañero. Disculpenme un poco la emoción. Bueno, son... se me mueven muchos recuerdos y, cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho.

Bueno, nada. Esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del *lawfare* y del partido judicial... No, no. Mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena, esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando a algún empresario, a algunos Caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales, y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere: presa o muerta.

En un momento de su enérgica exposición, Cristina hizo referencia a un célebre viaje a Lago Escondido, a la estancia del magnate británico Joe Lewis, que hizo un particular contingente entre el 13 y el 15 de octubre de 2022, un mes y medio después del atentado. Ella misma describió al grupo: el juez de Casación Penal Federal Carlos Mahiques (que falló a favor de Lewis), su hijo Juan Mahiques (jefe de los fiscales porteños), el juez federal Julián Ercolini (que la mandó a juicio en la causa Vialidad), el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro (que mandó las vallas y policías a su casa para sacar de ahí a los militantes que le daban apoyo), el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials (con causas que atañen al Grupo Clarín y también al Estado), Pablo Yadarola (juez en lo penal económico y cercano a la jueza Capuchetti), el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el consultor Tomás Reinke. Todos fueron en un vuelo privado, menos sus anfitriones: los directivos de *Clarín* Jorge Rendo y Pablo Casey.

Al poco tiempo de que *Página/12* revelara el viaje, se filtraron chats de Telegram que serían del grupo, autodenominado "Los Huemules". Alguien había hackeado el celular de D'Alessandro. La

charla mostraba que los viajeros elaboraban una estrategia para aparentar que los jueces y funcionarios del chárter habían costeado el viaje por su cuenta, de lo contrario sería considerado una dádiva. Hablaban hasta de “truchar” facturas y analizaban qué decirles a los medios. La vicepresidenta se detuvo en un punto: Los Huemules estaban ansiosos por armar una operación contra José Glinski, el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), creada por el kirchnerismo. Suponían que de esa fuerza había salido la información sobre el vuelo privado. La PSA era, justo, auxiliar fundamental de la investigación del intento de magnicidio, después de que fue desplazada la Policía Federal.

Cristina compartió parte del chat, donde aparecen tramando una venganza:

D'Alessandro: Si me toca ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA.

Yadarola: Glinski es parte del paisaje de mi trabajo. Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento.

D'Alessandro: Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro, que lo hago cagar.

Casey: Jajajjaa. Pasen alguna info de este personaje que escribimos una notita.

Una nota que apuntaba contra la PSA salió en *Clarín* el 25 de noviembre y el título era: “Atentado a Cristina Kirchner: surgen dudas sobre el manejo de la PSA en el celular de Sabag Montiel”.

La condena de CFK fue música para los oídos de la oposición, que ya encaraba la campaña electoral de 2023. Todos aprovecharon para decir algo o sacar algún comunicado, y hablaban de que era “un fallo judicial histórico” y que ponía “freno a la corrupción”. La Coalición Cívica dijo que el juicio había sido “ejemplar” y “demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina”. Era una reflexión extraña, ya que todo el mundo sabe que hay políticos y empresarios que logran dilatar sus causas durante años, hasta que un día prescriben o nadie se acuerda. Juntos por el Cambio ofreció un eslogan: “Siempre más democracia, más libertad, más justicia y más República”. “Es impunidad o justicia. Se hizo justicia”, dijo Rodríguez Larreta. “Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos”, se sumó Bullrich.

A los seis meses del atentado, invocando a sus superiores de la Cámara Federal, Capuchetti le avisó a Rívolo que quería cerrar la investigación sobre Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo para mandarlos a juicio oral y público. El fiscal le dijo que no, que era prematuro. Todavía, entre otras cosas, no habían explorado todas las soluciones tecnológicas posibles para acceder al maltrecho celular de Sabag Montiel. De ahí al 29 de mayo, cuando al final Rívolo hizo su pedido de elevación a juicio, nada cambió demasiado.

Los abogados Aldazabal y Ubeira estaban furiosos, hartos de pedir medidas puntuales que no se concretaban. El expediente parecía la maldición de los celulares: el del principal acusado se había reseteado y no se pudo avanzar en su análisis; el de Hernán Carrol estaba borrado, pero eso no generó ninguna medida adicional; los de las secretarías de Gerardo Milman estaban en estado dudoso después de haber sido eliminado su contenido en una oficina que una de ellas atribuyó a la precandidata presidencial Patricia Bullrich; los mensajes de una de las chicas eran llamativos; el teléfono de Milman seguía todavía en sus manos después de once meses, cuando seguramente ya no serviría para nada. El peritaje sobre el manuscrito de la Regla de Tueller, que la querella reclamó en forma reiterada, fue ordenado cuando la causa principal ya había sido elevada a juicio oral. Tampoco hubo una nueva declaración, en presencia de todas las partes, del testigo Abello, el hombre que escuchó a Milman decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa”; por supuesto, tampoco se habían juntado el expediente del atentado con el de Revolución Federal, uno de los mayores reclamos de la querella.

El 29 de mayo Rívolo presentó, en 197 páginas, su pedido para que fueran juzgados los tres detenidos por el caso, y sobreseída Agustina Díaz. La querella respondió que no entendía el apuro, teniendo en cuenta que las normas procesales permiten que alguien esté en prisión preventiva hasta dos años prorrogables. En este caso, no había pasado ni un año. Pocas veces se ve tanto garantismo en Comodoro Py. De todas formas, formularon una acusación, por si su postura en contra de apurar el juicio no prosperaba. El fiscal sostuvo que el término “magnicidio” no está contemplado como figura penal, pero que este caso se había tratado de un hecho de “extrema violencia política”, aspecto sobre el que no profundizó.

Enseguida aclaró su postura: no había encontrado, aseguró, ni

incentivo político ni económico detrás del atentado. “La prueba recabada hasta el momento impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”, fue taxativo. La explicación fue que, “de todos los teléfonos secuestrados y analizados, no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”. Tampoco encontró nada extraño, sostuvo, en los entrecruzamientos de llamadas ni en la geolocalización de los aparatos, ni en los movimientos financieros.

Según Rívolo, tal como se hizo el ataque, no requirió dinero, estructura “ni recursos extraordinarios”: “Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”. Su razonamiento es que Sabag y Uliarte viajaban siempre en transporte público, que él llevaba poco dinero y le había pedido prestados 4000 pesos a una amiga el día anterior para comprarse comida.

Los abogados de Sabag Montiel y Brenda Uliarte no se opusieron a la elevación a juicio. El abogado de Carrizo, Marano, la avaló en la madrugada del lunes 12 de junio. Horas más tarde, ese mismo día, Capuchetti cerró la parte central de la investigación y dispuso su paso al debate oral. Se supone que la pista Milman se profundizará en forma separada.

Una novedad rutilante había acelerado los tiempos de los defensores y de la jueza: Brenda Uliarte había desplazado a su defensa oficial, y designó como abogado al exreducidor de autos Carlos Telledín, quien se recibió de abogado mientras estuvo preso diez años por el atentado a la AMIA. Si el letrado tenía en mente alguna jugada de alto impacto para ese momento determinante, no pudo desarrollarla. Capuchetti mandó a juicio a Sabag Montiel y Uliarte como coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, de la vicepresidenta. Carrizo quedó como partícipe secundario.

Los abogados de Cristina alertaron que mandar a juicio una investigación por tramos “es una práctica incorrecta y daña el

descubrimiento de la verdad”. Cortar una pesquisa en los autores materiales, cuando quedaban muchas cuestiones por analizar, es una práctica de manual cuando el objetivo es no hurgar más en los hechos y así evitar tocar intereses políticos y económicos, explicaron. Elevar a juicio en tan poco tiempo y con medidas pendientes, una causa de tanta trascendencia institucional, como la describió Rívolo, no deja más que suspicacias sobre lo actuado. Sostener la teoría de los tres “locos sueltos”, dijeron, es una decisión política. Del mismo modo que mantener una investigación separada sobre la actuación y el financiamiento de Revolución Federal.

La explicación formal es que no encontraron relación directa entre los protagonistas de los dos expedientes. Este enfoque excluye contemplar que “alguien” (sea fuerza política, dirigente, organización, empresario) haya fomentado un clima de hostilidad y violencia de manera deliberada, para que luego otro intentara cometer un acto criminal. Esta teoría o hipótesis se podría denominar: “Hagan bardo”. Podría incluir favores o financiamiento.

La lectura lineal de la “Justicia” generó disconformidad en la víctima. “Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima”, enfatizó la vicepresidenta en una carta titulada “A 40 años de democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad”, que difundió el 25 de mayo de 2023. Ahí volvió a decir: “Me quieren presa o muerta”.

¿Realmente no se podía rastrear nada más? ¿Solo con los celulares, llamadas y notebooks se investiga? ¿Se analizaron suficientes dispositivos, teniendo en cuenta la prueba estropeada? ¿No existen otros caminos o estrategias? ¿Cómo es que quedan afuera tantas medidas que pide una querella? Por más que el dictamen hable de “violencia política”, en el devenir de la causa judicial, Cristina Fernández de Kirchner fue negada como víctima política. Eso también es una decisión.

* * *

Rívolo escribió, además, que no había encontrado razones de género como para hablar de un intento de femicidio, a pesar de que al comienzo de la investigación había postulado otra cosa: que pudo tratarse de un ataque por ser CFK una importante líder política mujer. A eso agregaba que en este intento de asesinato podía haber una amenaza genérica hacia mujeres que ejercen liderazgos políticos como

forma de disciplinamiento y de impedir que ocupen posiciones de poder. Después, aclaró, no encontró esas motivaciones en los imputados, lo mismo que sostenía la jueza Capuchetti.

En su libro *Sinceramente*, Cristina dijo lo que piensa:

Así como en un homicidio la condición de familiar es un agravante, en un proceso nacional, popular y democrático, la condición de mujer es sumamente agravante. Casi tanto como sus ideas. Es un acto de rebeldía que las mujeres accedan a posiciones de poder, cuestionando la forma en que funciona ese poder. Es rebelarse contra lo establecido, porque el poder no es cosa de mujeres, es cosa de hombres. Una mujer puede ser una estrella de cine, eso está permitido. Ahí no importa ser prima donna, no hace daño porque es un lugar que pareciera estar permitido para las mujeres. El problema es cuando querés ser prima donna en el mundo de los hombres, en el mundo del poder y, además, para cambiar las cosas. Ahí te disparan a matar. Y más aún si se pretende ser prima donna de un proceso nacional, popular y democrático, donde la inclusión social y la defensa de lo nacional son los ejes.

En marzo de 2023 la vicepresidenta recibió la visita del Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que había venido a la Argentina, tras el intento de magnicidio, para evaluar la situación de violencia política contra las mujeres. Es un equipo a cargo del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), que establece el derecho de las mujeres a una vida libre y sin violencias. Les entregó un informe que describe la ofensiva en su contra, que se fue construyendo con los años, con estrategias complementarias: entre 2015 y 2019 fue procesada en 13 causas judiciales, que motivaron páginas y títulos catástrofe de los diarios. También incluye algunas de las numerosas tapas con imágenes chocantes que le dedicó la revista *Noticias*: la muestran desde teniendo un orgasmo (con el título “El Goce”, y la pregunta de por qué el poder erotiza a los líderes), desnuda, vestida de enfermera (para hablar de los “trastornos anímicos del poder”) y hasta literalmente crucificada, con el título “Vía crisis”.

El organismo hizo su propia evaluación y advirtió que, a medida que crece la representación de mujeres en política, también aumenta

la violencia hacia ellas, al punto de ser asesinadas, como la concejala y militante por los derechos humanos brasileña Marielle Franco, la concejala Juan Quispe en Bolivia y la líder indígena hondureña Berta Cáceres, feminista y activista ambientalista. El intento de magnicidio de CFK y el de Francia Márquez en Colombia revelan, según este organismo, que es una amenaza que sigue latente.

* * *

Una pregunta que se vuelve ineludible es: ¿por qué a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué fue ella el blanco y no otro?

Tanto sociólogos como politólogos que analizan los fenómenos de la violencia política y los discursos de odio sostienen que CFK es destinataria de las agresiones de los “enojados” porque funciona como centro del sistema político, y por su enfrentamiento con el poder real. “Es el centro del sistema solar”, plantean a modo de ejemplo. Hay quienes plantean que representa “la condensación de la polarización”. Los que la aprecian —se explayan— le atribuyen sus victorias cotidianas. Los detractores la culpan de los inconvenientes que afectan a la vida diaria: el transporte público a veces atestado de gente, las deficiencias del sistema público de salud, el no llegar a fin de mes. Ese combo se complementa con el papel que juegan ciertos medios de comunicación, decididos a ignorar toda virtud y siempre atentos a exacerbar cualquier característica que pueda ser tomada por defecto. No le perdonan su capacidad de irritar a las corporaciones: estatizó YPF y las AFJP (sistema previsional), le pone límites al Fondo, puso retenciones al agro, habla con pocos industriales, no habla con el poder en general, prescinde de la intermediación para dar a conocer sus ideas. Hay un sector, además, que cuestiona su política de derechos humanos.

Acerca de los magnicidios, no existe una teoría o tipología que sea útil “preventivamente”, dice el exjuez de la Corte Zaffaroni, en un artículo publicado en *La tecl@Ñ* después del atentado contra CFK, llamado “¡Cuidado! ¡Eróstrato anda suelto!”. Es claro que los asesinatos o intentos de este tipo contra líderes políticos o figuras públicas fueron muy variados en la historia: originados en conspiraciones, venganzas, cometidos por personas “borderline”, con estructura y financiamiento o sin ella. Los casos que involucran a personajes solitarios (con rasgos similares: megalómanos, con trastornos de salud mental, desempleados, en crisis familiar, violentos,

fanáticos, frustrados y heridos en su autoestima que buscan protagonismo) a menudo no son concluyentes y dejan flotando ideas conspirativas, alimentadas por la opacidad, incapacidad o negligencia del sistema judicial.

Un ejemplo paradigmático, entre otros muchos, es el de John Fitzgerald Kennedy, donde el gran público aún duda de la versión de que Lee Harvey Oswald, un veterano megalómano, desertor, con inestabilidad familiar, económica y mental —luego asesinado—, haya cometido en soledad el crimen de la figura política más relevante de los años 60. Eso explica una gran proliferación de teorías sobre este crimen. Otros casos revelan la marca histórica que puede dejar un magnicidio, como el del colombiano Jorge Eliécer Gaitán, conocido como “El Caudillo Liberal” por su defensa de las causas populares, asesinado el 9 de abril de 1948 en la puerta de un hotel. El hombre responsabilizado, Juan Roa Sierra, un albañil de 26, terminó linchado y muerto por una muchedumbre. Nunca se supo si fue el autor de los disparos, un autor intelectual, o si había sido instigado. Pero el hecho abrió dos décadas de violencia en Colombia.

* * *

Sabag Montiel escribe y escribe cartas en prisión, todas a mano y dirigidas al juzgado. Once llegó a enviar. Imagina conspiraciones en su contra, se dice secuestrado, habla de un complot entre CFK y Capuchetti, pide abogados cuyos nombres escucha en la televisión. En uno de esos textos, agrega el número de teléfono que tiene en su celda. A veces suena. No siempre atiende.

—Lo hice motu proprio, están inventando una historia. Actué solo —le contestó a la producción del programa televisivo *Minuto 1*, de C5N, que logró un breve intercambio el 13 de marzo de 2023.

—¿Por qué quisiste matarla?

—Por la situación del país —no dudó.

Cuando le preguntaron cómo se había preparado, contestó que la pistola “estaba cargada” con cinco balas. Y que gatilló, pero la bala no salió. Es lo que el mundo entero vio por televisión.

—En vez de tirar el pestillo, imagínate los nervios de estar en un lugar, tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo no salió el tiro, porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso —explicó su fracaso.

—¿Te arrepentís de lo que hiciste?

—No.

En otra conversación telefónica, con otro periodista, Sabag Montiel dijo que quiso matar a Cristina “por el odio generalizado”.

Este libro termina de escribirse en un momento crucial. Una jueza y un fiscal acaban de decir que no encontraron nexos políticos o económicos detrás de este crimen. ¿Está todo dicho? No. El expediente pasó a manos de un tribunal oral. Intervendrán en el debate otros jueces y otra fiscal. ¿Puede cambiar algo? Mucho, algo o nada.

La aparición, en el último minuto, del nuevo abogado defensor de Brenda Uliarte despertó la expectativa de que algo puede cambiar. Carlos Telledín, a quien apodan “El Enano”, conoce bien a José Manuel Ubeira, uno de los abogados de la vicepresidenta, que tuvo protagonismo en el mismo juicio por el atentado a la AMIA, donde tanto Telleldín como su cliente, el expolicía Ribelli, fueron absueltos. Luego se volvieron a encontrar en el juicio por encubrimiento en la investigación de aquel ataque terrorista donde Ubeira fue querellante y Telleldín acusado.

“El Enano” ya tuvo un breve ensayo de juicio oral en defensa de Uliarte cuando el 15 de junio la sentaron ante un tribunal de San Martín, a metros de Sabag Montiel, a quien trató de exnovio. Los juzgaron y condenaron a un año de prisión porque tenían en su departamento un DNI de otra persona, algo que es un delito. En la audiencia se los veía molestos. Ambos respondieron en sus indagatorias y volvieron a expresarse al final del juicio en el momento que se conoce como “últimas palabras”. Quedó claro que querían hablar.

Quizá sea el juicio oral por el atentado a Cristina, o incluso alguna instancia previa, la oportunidad en que Brenda rompa definitivamente su silencio.

Epílogo

El intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder política de la Argentina, no fue obra de un par de marginales que emergieron de la nada o que salieron de un repollo, como se dice en forma coloquial. Lo imaginaron, lo diseñaron, hablaron de él, insinuaron su concreción, muchas personas, desde grupos diversos de ultraderecha, mayoría jóvenes (aunque no todos), cultores de las formas discursivas del odio y la intolerancia, que detonaron con la pandemia por coronavirus y continuaron su expansión. Más o menos organizados, se encontraron en el espejo de un vasto sector de la dirigencia política opositora, para quienes las palabras “exterminar”, “eliminar”, “son ellos o nosotros” son parte de su libreto cotidiano. Como decían quienes participaban en charlas multitudinarias de la agrupación Federal en una plataforma virtual, solo falta que vaya alguien y lo haga. No se trata de negar las deficiencias del Estado en dar respuestas eficaces a los males de época, pero ya sabemos, por más que parezca una obviedad, que la violencia no soluciona nada. La violencia, en rigor, está movida por poderosos intereses que condicionan a la democracia.

El atentado a la vicepresidenta dejó en claro que los principales ejecutores de ese condicionamiento son el sistema judicial, los medios hegemónicos (y con ellos, el poder económico), además de las fuerzas políticas antiperonistas, y en especial antikirchneristas. El intento de asesinato se produjo en medio de movilizaciones de apoyo a las dos veces presidenta, que comenzaron el 22 de agosto de 2023, el día que el fiscal Diego Luciani pidió para ella 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el juicio conocido como “Vialidad”. Su alegato había sido un despliegue de espectacularidad que duró nueve días y se transmitió prácticamente por cadena nacional. “Señores jueces: es corrupción o justicia”, fue una de las frases del remate de Luciani, que llevaba a evocar, como si fuera una versión aggiornada, el “Señores jueces, nunca más” del Juicio a las Juntas. Una afrenta para los organismos de derechos humanos y todos aquellos/as que luchan por Memoria, Verdad y Justicia, en un país marcado por el terrorismo de Estado.

La defensa de los derechos humanos como política de Estado, que la derecha defenestra, es un sello de los gobiernos kirchneristas y es la contracara, precisamente, de la violencia política. Después del alegato y del atentado, el diario *Clarín* tituló: “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Hacía tiempo que el multimedia pugnaba por sacar a CFK de la escena política a fuerza de notas y notas sobre causas judiciales (retroalimentadas por esas publicaciones), sus políticas estatistas y su estilo de confrontar al poder.

El sociólogo Ezequiel Ipar, investigador del Conicet que dirige el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, escribió un artículo en la revista *Anfibia*, apenas después del atentado, al que tituló “Fue el odio”, y dice: “Esto que finalmente se materializa con brutalidad, que observamos en la crudeza registrada en la imagen del arma de fuego lanzada sobre una de las principales dirigentes del país, responde y se explica por un proceso social, político-ideológico y mediático muy claro y muy preciso (...). Esto podía pasar porque esa red de ideología, medios y tecnologías de comunicación estaban preparando, ni siquiera silenciosamente, este tipo de acontecimientos. El contexto político-ideológico marcado por una creciente intolerancia y el autoritarismo político merece de modo urgente nuestra atención”. Más allá, explica, de que fue un ataque dirigido a “una determinada orientación”, es “contra la vida política democrática en general. Esto emergió. Pasó por este circuito donde se supone que las palabras no hacen nada y terminó en un hecho político gravísimo”.

“Por el odio generalizado”, dijo Fernando Sabag Montiel cuando un periodista llamó al teléfono que tiene en su celda y le preguntó por qué había intentado matar a Cristina el 1 de septiembre de 2022. Es lógico preguntarse si alguien lo incitó a hacerlo, lo mandó, le prometió dinero o algo, si hubo una organización, si vender copos de azúcar e ir a hacer inteligencia en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta fue una idea propia. De eso debió ocuparse una investigación judicial que, al cabo de un año, mostró una magra voluntad de ir a fondo. Que dejó al descubierto una cantidad abrumadora de errores en los inicios del expediente, a punto tal de perder la mayor parte del contenido del celular del principal acusado, y de permitir que sucediera lo mismo con los teléfonos de varias personas, que eran la puerta de entrada a rastrear una pista política y tal vez financiera. Esto no puede generar más que suspicacias. Cristina está convencida de que hubo planificación y financiamiento.

Los principales acusados, Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, fueron enviados a juicio como tres lumpenes sueltos, como si estuvieran disociados de un escenario político determinado. Como si no se hubiera tratado de un caso de violencia política. Otra investigación, que la Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py nunca quiso juntar con la del atentado, se acerca un poco más al análisis de ese contexto al analizar el papel de la organización ultraviolenta Revolución Federal. Pero, pasado el tiempo, no terminó de profundizar (aunque todavía podría ocurrir) la pista que sugiere que la agrupación podría haber tenido financiamiento de un grupo empresario, el Grupo Caputo, de la familia de un exministro, Luis “Toto” Caputo, que integró el gobierno de Mauricio Macri. De ser cierta esta hipótesis, ¿para qué les pagarían? Para que “hagan bardo”, para que agiten la violencia, dirá un funcionario en una charla para este libro. Dejar en duda la existencia de financiamiento equivale a negar que la violencia no solo tiene responsables políticos, sino también económicos.

Es notable cómo la mayoría de los medios de comunicación, con los meses, fueron dejando el tema a un lado. También llama la atención que no se haya instalado una profunda preocupación en la dirigencia política (en ciertos casos, todo lo contrario) y que el peronismo acompañara poco y fuera restando magnitud al caso.

Este libro intenta dejar testimonio de este complejo proceso y de lo que ocurrió antes y después del atentado. Fue escrito en medio de la campaña presidencial de 2023. Si bien los grupos de odiadores no están en las calles, los discursos de candidatos/as y dirigentes están plagados de los mismos —o peores— mensajes violentos y de eliminación del enemigo que precedieron al intento de asesinato de la vicepresidenta. Batió el récord de salvajismo el cantito difundido por los seguidores de Patricia Bullrich —la única dirigente que no repudió el intento de magnicidio— en un video donde ella ocupa el centro, que toma la música de la canción “Sobreviviendo” de Víctor Heredia, y le cambia la letra para pedir “una Argentina sin Cristina”. Más claro, imposible.

Sobre el final de este trabajo, llegó una noticia reconfortante y esperanzadora: las Abuelas de Plaza de Mayo habían encontrado al nieto 133, apropiado después de su nacimiento en cautiverio, durante la última dictadura cívico militar, integrante de la enorme familia Santucho, diezmada por el régimen dictatorial. Lo contaron en una

conferencia de prensa emocionante, donde se dijo que cada restitución de identidad pone en valor los derechos conquistados, y donde quedó claro que estas luchas, fundadas en el amor, lejos de la venganza y cualquier forma de violencia, ponen por delante de todo el valor de la vida democrática. Ahí está el antídoto contra el odio.

Agradecimientos

A Ariel Zak y Emilia Delfino, enormes periodistas a quienes admiro. Imprescindibles aliados en la aventura de este libro.

A Franco Mattiello, por su entusiasmo y compromiso.

A Raúl “Tuny” Kollmann, mi maestro, y el que me abre caminos.

A Walter Goobar y Nicolás Fiorentino, por sus aportes.

A Gustavo Abrevaya, por su aliento y contención.

A Nora Veiras, Vicky Ginzberg, Gustavo Sylvestre, Luli Trujillo, Charly Montes Onganía, Nico Bocache, Mariano Torres, Gastón Zinni, Pablo Marcovsky, Maru Espíndola, Werner Pertot, Julia Andrés, Lucía Eisenschlos, Mex Urtizberea y Giselle Repetto, por el aguante.

A Sonia Quiroga, mi hada del bien.

A las amigas, amigos y afectos incondicionales: Clarisa Canda, Patricia Chaina, Graciela Moreno, Vilma Noce, Vivi Iasparra, Irina Sternik, Nora Solari, Laura Galarza, Ale Goldin, Julieta Pérez Lavallén, Carlos Marcel, Ramiro Abrevaya, Paloma García, Paula Niccolini, Pablo Slonimski y mi hermano Germán Hauser.

A mis hijas Danu y Ro, por llenar siempre nuestra casa de amor, música y alegría.

A los abogados/as y funcionarios/as de los tres poderes que compartieron su información, teorías, chismes e historias.

A Rodolfo González Arzac por haber pensado y confiado en mí.

A Paula Pérez Alonso, gran editora (de este libro y los anteriores), reina de la calidez, que me llenó de energía con cada uno de sus comentarios y devoluciones.

Grupo  Planeta

¡Seguinos!

